



REPÚBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

18^a REUNIÓN – 5^a SESIÓN ORDINARIA

29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Presidencia de la señora vicepresidente de la Nación, licenciada **MARTA GABRIELA MICHETTI**,
del señor presidente provisional del Honorable Senado, senador don **FEDERICO PINEDO**,
del señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador don **JUAN CARLOS MARINO**,
del señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador don **ADOLFO RODRÍGUEZ SAÁ**,
y del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador don **JULIO C. C. COBOS**

Secretarios:

Señor don **JUAN PEDRO TUNESSI** y señor don **HELIO REBOT**

Prosecretarios:

Señor don **MARIO DANIELE**, señor don **ERIC CALCAGNO Y MAILLMANN**
y señor don **ÁNGEL TORRES**



PRESENTES:

ABAL MEDINA, Juan Manuel
 AGUILAR, Eduardo Alberto
 AGUIRRE DE SORIA, Hilda Clelia
 ALMIRÓN, Ana Claudia
 ALPEROVICH, José Jorge
 BARRIONUEVO, Walter Basilio
 BASUALDO, Roberto Gustavo
 BLAS, Inés Imelda
 BOYADJIAN, Miriam Ruth
 BRAILLARD POCCARD, Néstor
 CABRAL ARRECHEA, Salvador
 CASERIO, Carlos
 CASTILLO, Oscar Aníbal
 CATALÁN MAGNI, Julio César
 COBOS, Julio César Cleto
 CREXELL, Carmen Lucila
 DE ANGELI, Alfredo
 DURANGO, Norma
 ELÍAS DE PEREZ, Silvia Beatriz
 ESPÍNOLA, Carlos
 FELLNER, Liliana Beatriz
 FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
 FIORE VIÑUALES, María Cristina del Valle
 FUENTES, Marcelo Jorge
 GARCÍA, Virginia María
 GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
 GIACOPPO, Silvia del Rosario
 GIMÉNEZ, Sandra Daniela
 GODOY, Ruperto Eduardo
 GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
 GONZÁLEZ, Nancy Susana
 GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
 IRRAZÁBAL, Juan Manuel
 ITURREZ DE CAPELLINI, Ada R. del Valle
 KUNATH, Sigrid Elisabeth
 LABADO, María Esther

LEGUIZAMÓN, María Laura
 LINARES, Jaime
 LOVERA, Daniel
 LUENZO, Alfredo
 LUNA, Mirtha María Teresita
 MARINO, Juan Carlos
 MARTÍNEZ, Ernesto Félix
 MAYANS, José Miguel Ángel
 MENEM, Carlos Saúl
 MERA, Dalmacio
 MIRKIN, Beatriz
 MONTENEGRO, Gerardo Antenor
 NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
 ODARDA, María Magdalena
 OJEDA, José Antonio
 PAIS, Juan Mario
 PEREYRA, Guillermo Juan
 PEROTTI, Omar Ángel
 PÉRSICO, Daniel Raúl
 PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
 PICHETTO, Miguel Ángel
 PILATTI VERGARA, María Inés
 PINEDO, Federico
 RIOFRÍO, Marina Raquel
 RODRÍGUEZ MACHADO, Laura
 RODRÍGUEZ SAÁ, Adolfo
 ROMERO, Juan Carlos
 ROZAS, Ángel
 SACNUN, María de los Ángeles
 SOLANAS, Fernando Ezequiel
 URTUBEY, Rodolfo Julio
 VARELA, Marta Lucía
 VERASAY, Pamela Fernanda
 ZAMORA, Gerardo

AUSENTES, CON AVISO:

MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
 REUTEMANN, Carlos Alberto

SUMARIO

1. **Izamiento de la bandera nacional.** (Pág. 25.)
2. **Renuncia del señor senador Zamora.** (S.-4.500/17.) (Pág. 25.)
3. **Juramento de la señora senadora suplente por Santiago del Estero, Blanca Porcel de Riccobelli.** (Pág. 26.)
4. **Asuntos entrados.** (Pág. 26.)
5. **Aprobación de versiones taquigráficas.** (Pág. 27.)

6. **Asuntos entrados. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos.** (Pág. 27.)
7. **Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.** (Pág. 28.)

Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, al doctor Ricardo Bustos Fierro. (O.D. N° 942/17.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala F, al doctor Eduardo Antonio Zannoni. (O.D. N° 943/17.)

8. **Inserciones y abstenciones.** (Pág. 29.)
Transferencia de un inmueble en Tostado, Santa Fe. (O.D. N° 1.208/16.)
9. **Reforma previsional.** (O.D. N° 939/17.) **Consenso fiscal.** (O.D. N° 940/17.) **Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.** (O.D. N° 941/17.) (Pág. 29.)
Transferencia de un inmueble en Ubajay, Entre Ríos. (O.D. N° 1.216/16.)
Modificación de la Ley de Seguros. (O.D. N° 122/17.)
Declaración de Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles a Chascomús, Buenos Aires. (O.D. N° 378/17.)
Modificación de la ley 25.863 en referencia al Día de la Constitución Nacional. (O.D. N° 482/17.)
Modificación del artículo 1.741 del Código Civil y Comercial, por el que se incorpora a los hermanos para reclamar la indemnización de perjuicios no patrimoniales sufridos por un tercero. (O.D. N° 496/17.)
10. **Consideración de asuntos sobre tablas acordados.** (Pág. 116.)
Integración del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. (S.-4.551/17.)
Institución de la Fiesta Federal del Día de la Tradición el 10 de noviembre de cada año. (S.-4.247/17.)
Modificación de la ley 26.216, Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, por la que se establece su vigencia hasta que cumpla sus objetivos. (S.-246/16.)
Declaración de monumento histórico nacional en los términos de la ley 12.665 a la Manzana Histórica de la Universidad Nacional del Litoral situada en la ciudad de Santa Fe. (C.D.-71/17.)
Institución del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Atentado contra la Embajada de Israel el 17 de marzo. (C.D.-48/17.)
Régimen de promoción de la industria naval argentina (artículo 81 de la Constitución Nacional). (S.-3.729/16.)
Desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional (artículo 81 de la Constitución Nacional). (S.-1.529/16.)
Adopción del uso del bastón rojo y blanco en todo el territorio de la República Argentina como instrumento de orientación y movilidad para las personas con sordoceguera. (C.D.-52/17.)
Incorporación de las bomberas y bomberos voluntarios al régimen de las leyes 24.557 y 26.773, de accidentes de trabajo. (S.-2.268/16.)
Creación del fondo de asistencia de bomberos voluntarios de la República Argentina. (S.-4.640/17.)
Declaración de Fiesta Nacional de la Tradición de la Fiesta de la Tradición Jachallera, que se realiza todos los años en la localidad de Jáchal, San Juan. (C.D.-89/16.)
Declaración de interés nacional del 5° centenario de la reforma protestante a celebrarse el 31 de octubre de 2017 e institución de ese día de cada año como Día de la Reforma Protestante. (S.-3.615/17.)
11. **Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.** (Pág. 119.)
Declaración de Capital Nacional de la Chaya a la provincia de La Rioja. (O.D. N° 518/17.)
Declaración de bien de interés histórico nacional a la ex estación ferroviaria El Provincial, Tucumán. (O.D. N° 520/17.)
Institución del Día Nacional de la Reforma Universitaria. (O.D. N° 525/17.)
Declaración de monumento histórico nacional al edificio de la Secretaría de Cultura de Mendoza. (O.D. N° 526/17.)
Declaración de Capital Nacional de la Reforma Universitaria a la ciudad de Córdoba. (O.D. N° 527/17.)
Institución del año 2018 como Año del Centenario de la Reforma Universitaria. (O.D. N° 539/17.)
Incorporación en el Programa Médico Obligatorio de la cobertura integral de la fibromialgia. (O.D. N° 571/17.)
Transferencia de un inmueble a la provincia de Salta. (O.D. N° 579/17.)
Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. (O.D. N° 580/17.)
Declaración de interés y sujeto a expropiación de un inmueble en Lamarque, Río Negro. (O.D. N° 581/17.)
Transferencia de un inmueble en San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 583/17.)
Creación el Programa Nacional de Cuidados Paliativos. (O.D. N° 786/17.)
Modificación de un artículo del Código Penal. (O.D. N° 787/17.)

Solicitud de informes sobre las razones de la subejecución presupuestaria del programa 17, Acciones para Contribuir a la Preservación del Ambiente del INTI. (S.-3.325/17.)

15. **Consideración de decretos dictados por la Presidencia.** (Pág. 153.)

16. **Apéndice.**

I. **Actas de votación.** (Pág. 154.)

II. **Plan de labor.** (Pág. 166.)

III. **Asuntos entrados.** (Pág. 186.)

IV. **Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.** (Pág. 733.)

V. **Inserciones.** (Pág. 1639.)

—En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 37 del miércoles 29 de noviembre de 2017:

Sra. Presidente. — La sesión está abierta.

1

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. — Invito al señor senador Rodríguez Saá a izar la bandera en el mástil del recinto.

—Puestos de pie los presentes, el señor senador Rodríguez Saá procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (*Aplausos.*)

2

RENUNCIA DEL SEÑOR SENADOR ZAMORA (S.-4.500/17)

Sra. Presidente. — Obra sobre las bancas la renuncia presentada por el señor senador por la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Señor secretario, por favor.

Sr. Secretario (Tunessi). — Se trata del expediente S.-4.500/17 que dice así: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017. Señora presidente: tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio al Honorable Senado de la Nación, con el objeto de presentar mi renuncia al cargo de senador nacional a partir del día 10 de diciembre de 2017, con motivo de haber sido honrado por

el pueblo de mi provincia como gobernador de Santiago del Estero, mandato que debo asumir a partir de la fecha referida. Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarla con consideración y estima. Doctor Gerardo Zamora, senador de la Nación”.

Sra. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Zamora.

Sr. Zamora. — Gracias, presidenta.

Simplemente, aprovecho en esta sesión, que será la última en la que me tocará estar, para agradecer a todos, a todo este honorable cuerpo, que me ha permitido en estos cuatro años crecer en términos políticos, aprender y, sobre todas las cosas, haber sido distinguido y honrado en cargos importantes como la presidencia provisional y, actualmente, la vicepresidencia del Senado de la Nación.

Quiero recordar que soy parte de un proyecto político provincial, netamente provincial, de una gran pluralidad, donde representamos en este Senado a Santiago del Estero, hombres y mujeres comprometidos con la democracia.

Y no quisiera irme de este Senado, de este paso inconcluso de mi mandato, porque voy a asumir como gobernador de la provincia de Santiago del Estero, cargo con el que me ha honrado el pueblo santiagueño, sin dejar de decir que me he sentido muy respetado, aparte del honor que es haber sido aprobado por este cuerpo en esos cargos a los que me he referido, tanto por sectores del radicalismo, del peronismo y de todos los partidos políticos, a los cuales agradezco muchísimo.

Y sería..., no sé si fuera de lugar, pero lo voy a decir: conformando un bloque junto con la senadora Cappellini, del Frente Cívico por Santiago del Estero, no puedo dejar de agradecer al bloque del Frente para la Victoria, al peronismo en sí. No tengo el honor de ser peronista, pero me he sentido tratado, respetado y acompañado muchísimo por hombres y mujeres de este movimiento político, sin desmerecer, por supuesto, el buen trato y la relación con todos los demás bloques y sectores políticos que conforman y representan a las provincias argentinas en este Senado.

Dicho esto, pedirles que sea aprobada la petición que se acaba de leer y desearles el mejor de los éxitos a todos los senadores de la Nación

reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional siguiendo los lineamientos de la Corte Suprema.

Había un tema vinculado con la acreditación del estado de salud física y mental de los candidatos, por supuesto necesaria atento a esta renovación. Se produjo efectivamente esta acreditación por los medios razonables que fueron apreciados por la comisión y por eso es que, para no dilatar más el trámite, habiéndose cumplido con todas las normas y habiéndose escuchado a los candidatos perfectamente por parte de todos los miembros de la comisión, pedimos que se habilite el tratamiento sobre tablas para que podamos aprobarlos en la sesión del día de la fecha y no seguir dilatando el trámite.

Muchas gracias.

Sra. Presidente. – Se va a votar a mano alzada el requerimiento de los dos tercios para el tratamiento sobre tablas.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.

Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los dos órdenes del día, O.D. N° 942/17 y O.D. N° 943/17.

–Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:

Solicitud de acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, al doctor Ricardo Bustos Fierro. (O.D. N° 942/17.)

Solicitud de acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala F, al doctor Eduardo Antonio Zannoni. (O.D. N° 943/17.)

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son 70 votos por la afirmativa, cero por la negativa y cero abstenciones. Unanimidad.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – Quedan aprobadas las resoluciones. Se procederá en consecuencia.²

8

INSERCIONES Y ABSTENCIONES

Sra. Presidente. – Corresponde votar las autorizaciones de las inserciones y abstenciones para la sesión.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas.

9

REFORMA PREVISIONAL (O.D. N° 939/17) CONSENSO FISCAL (O.D. N° 940/17) RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO (O.D. N° 941/17)

Sra. Presidente. – Corresponde considerar los órdenes del día 939/17, 940/17 y 941/17, dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda por la reforma previsional, dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social por el consenso fiscal y dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social por el que se crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, enviado por el ministro de Hacienda, presidente del Consejo de Responsabilidad Fiscal.

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidente: esta es la primera oportunidad en que en el recinto vamos a tratar el Orden del Día 941/17, sobre régimen federal de responsabilidad fiscal.

Presenté una nota pidiendo que se hiciera el giro correcto a las comisiones en el tiempo oportuno. La Presidencia no lo resolvió, las comisiones se reunieron y, en el seno de la comisión, hice el planteo. No obstante, se siguió actuando como si el planteo no se hubiera hecho y con la senadora Sacnun, por la provincia de Santa Fe, hemos hecho una impugnación al procedimiento y, por tal razón, brevemente quiero referirme al tema.

En otros tiempos nos quejábamos fuertemente por el tratamiento exprés y porque se pretendía hacer funcionar al Senado como una escribanía. Debo reconocer que, en aquellas

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

épocas, el Frente para la Victoria –que era mayoría– convocaba a las reuniones para tratar los temas y nos avisaba a los senadores que había una lista de invitados y que todos podíamos invitar y teníamos la oportunidad de participar. Debo reconocer también que hacíamos un esfuerzo en aquella época para presentar a muchos expositores para tratar de que el trámite exprés no se realizara y para queuviésemos la oportunidad de debatir el tema.

Ahora, además de un consenso –que es el que seguramente se va a votar y aprobar después–, hay un acuerdo político donde el trámite ya no es exprés, sino súper exprés. Y, además, violando el reglamento. O sea, ahora se le agrega al trámite exprés la violación del reglamento.

Como ayer me dijeron que no era un tema de coparticipación federal, quiero recordar a los señores senadores que las leyes que se refieren al sistema impositivo, por la Constitución, deben ingresar por la Cámara de Diputados. Solamente deben ingresar por el Senado, como cámara iniciadora, cuando se trata el régimen de coparticipación federal.

¿Y por qué este consenso que traen hoy al recinto tiene como Cámara iniciadora al Senado? Justamente, porque estamos tratando una modificación al régimen de coparticipación federal, en el cual una inmensa mayoría de los gobernadores ha prestado su acuerdo y consentimiento. Pero si se trata de una ley de coparticipación federal, como he expresado –y no hay ninguna duda–, tenemos que respetar nuestro reglamento, que dice que los temas de coparticipación federal los debe tratar la Comisión de Coparticipación Federal.

Acá, en cambio, se hizo un giro conjunto a las comisiones de Trabajo y de Presupuesto. La de Presupuesto tiene que ver con el tema y también es competente, pero la de Trabajo no tiene competencia para tratar este tema. Sin embargo, hubo un tratamiento conjunto, que presidió la Comisión de Trabajo. Entonces, el trámite es irregular. El trámite es ilegal. El trámite es contrario al reglamento.

Yo me pregunto: con qué necesidad el Senado de la Nación va a violar el reglamento y las leyes, si tienen el número suficiente para hacer la sanción correctamente. Sin embargo, no lo han hecho. Esto no ha tenido giro a la Comisión de Coparticipación Federal y no lo hemos podido

tratar ni opinar como corresponde, como manda el reglamento.

En consecuencia, primero hago una reflexión: el presidente podría subsanar el giro y hacer lugar a la petición, pero no lo hicieron ese día y no lo hicieron con la nota. Todavía están a tiempo. Si no, dejo planteado el trámite irregular, impugno el tratamiento que se ha dado y planteo que, en consecuencia, debería ser declarado nulo el dictamen.

Creo que se trata de un tema demasiado importante y creo que el Senado de la Nación ha luchado mucho por recuperar el prestigio perdido en las épocas en que leyes parecidas a estas fueron tratadas. También tuvimos multitudes en la calle protestando, como la que está ahora, contra la reforma laboral.

Pido que actuemos con sensatez. Nada más, señora presidenta.

Sra. Presidente. – Senadora Sacnun.

Sra. Sacnun. – Me expreso en el mismo sentido que plantea el senador por San Luis, el senador Rodríguez Saá. Ratifico lo que ha expresado.

En mi carácter de vocal de la Comisión de Coparticipación planteo que he estado evaluando y estudiando los antecedentes que existen en la Cámara respecto de los giros de los proyectos que se efectúan.

Para abundar en lo que acaba de expresar el senador Rodríguez Saá, en los años 2002 y 2003, en oportunidad de la reforma del reglamento, en este Senado de la Nación en algún momento se planteó la posibilidad, para evitar la superestructura de comisiones que existían, de unificar la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la Comisión de Coparticipación Federal.

En esa oportunidad, habiendo indagado y estudiado lo que ocurrió aquí en el Senado de la Nación, los senadores y senadoras se expresaron con un rotundo “no” en virtud de la importancia que tiene la Comisión de Coparticipación Federal en este Senado, que representa nada más y nada menos que los intereses de cada una de las provincias del Estado nacional, que ha adoptado un sistema representativo, republicano y federal.

Para mayor abundamiento, también quiero decir que el propio mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, expresando cuáles son los compromisos arribados por las partes e inclu-

yendo los lineamientos, establece –si se me permite leer– “que se llegó a acuerdos fundamentales sobre conflictos históricos entre las jurisdicciones firmantes con relación al régimen de coparticipación federal de impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones”. Razón por la cual, entiendo que, sin lugar a dudas, correspondía realizar el giro a esta comisión, de la cual soy vocal.

En este sentido, quiero hacer un planteo porque tengo varios proyectos que están durmiendo el sueño de los justos en este Senado de la Nación por el caprichoso giro que se les da a diferentes comisiones. Por lo tanto, esto genera, de acuerdo con el arbitrio de quien establece el giro, que haya proyectos que tengan que pasar por seis o siete comisiones, mientras que hay otros, que tienen este nivel de entidad, que comprometen los recursos de las provincias argentinas, que comprometen cuestiones previsionales y de responsabilidad fiscal, a los que, sin embargo, se les da, tal como lo acaba de manifestar el senador Rodríguez Saá, un tratamiento expreso.

Por lo tanto, adhiero a la moción del senador Rodríguez Saá y propongo que se someta a votación.

Sra. Presidente. – Senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Hay varios senadores que, en torno al cuestionamiento del trámite, fundamentalmente con una plaza repleta de organizaciones sindicales, sociales y jubilados que no han sido escuchados en un tema que les compete, no estamos dispuestos a avalar el tratamiento sobre tablas de esta cuestión. Queremos que quede constancia de esto para cuando se haga la votación para habilitar este tema.

Entendemos que se trata de tres temas que están deliberadamente imbricados en una urdimbre que tiene una finalidad política muy clara –vamos a explicarlo posteriormente en el debate–, pero no queremos dar el consentimiento para el tratamiento sobre tablas de esta cuestión.

Queremos que se escuche, así como la CGT se manifestó en contra del reajuste jubilatorio, a las distintas organizaciones sociales que hoy se están manifestando en la plaza.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: para que quede claro, se ha planteado concretamente una nulidad del dictamen. La nulidad del dictamen tiene que ser resuelta por la Presidencia, como hay antecedentes en este cuerpo.

Concretamente se ha planteado la nulidad por vicios que no son subsanables en la composición del dictamen, lo que solicito se tenga presente para resolverlo y después el pleno lo podrá revisar, porque está el recurso de revocatoria.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Señora presidenta: primero algunas consideraciones reglamentarias en función de la presentación que se efectuó el 21 de noviembre con relación al dictamen de fecha 23.

Cuando se formulan observaciones en cuanto al giro y la Presidencia no resuelva en el plazo de tres días hábiles, la cuestión será puesta a consideración del cuerpo en la primera sesión que se realice. Es decir, esta es la oportunidad –ante la falta de respuestas de la Presidencia, que no es imperativa, no es una obligación imperativa– de resolver lo que acá se está solicitando, que es un cambio de giro o un giro a la Comisión de Coparticipación.

Eso es desde el punto de vista formal, reglamentario, qué es lo que tenemos que resolver.

Ahora, nosotros estamos convencidos de que este tema no es de competencia de la Comisión de Coparticipación Federal. Y mire si no es de competencia de la Comisión de Coparticipación, porque cuando se tienen que resolver cuestiones de coparticipación generalmente vinculan a las veinticuatro provincias argentinas.

Esto tiene que ver con el derecho intrafederal, con los pactos federales, y en este caso estamos hablando pura y estrictamente del federalismo fiscal.

El federalismo fiscal vincula a la Nación y a las provincias que lo suscriben. Por eso esto fue acompañado y suscripto por veintitrés gobernadores de provincias. Y, desde esa mirada, nosotros entendimos que desde la reforma o algunos aspectos de la modificación de la movilidad previsional, que es parte del nudo central, del acuerdo y del consenso de veinti-

trés gobernadores con el Gobierno nacional, debía ser girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a la comisión laboral por el tema previsional.

Por lo tanto, me parece que, en el marco del derecho intrafederal, acá no se trató, bajo ningún aspecto, de buscar un atajo para que no se discuta en la Comisión de Coparticipación. Y lo digo con el mayor de los respetos, porque de la lectura de quienes integran la Comisión de Coparticipación creo que había número suficiente como para que se delibere y se cuente con un número para el dictamen. No pasó por ahí; tiene que ver con una cuestión de fondo de lo que nosotros entendemos del derecho intrafederal, el pacto fiscal, que no obliga a todos, sino a quienes lo suscriban.

Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, por favor.

Sra. Presidente. – No se la va a otorgar.

Sr. Petcoff Naidenoff. – No, pero para terminar, porque el debate es largo.

En función del planteo concreto que se ha hecho y que tenemos que resolver, la cuestión que está puesta a consideración del cuerpo, es decir, que es si se da o no giro a la Comisión de Coparticipación, sinceramente creo que no corresponde, que tenemos dictamen y en función del dictamen y de las comisiones pertinentes que han tratado el tema, tenemos que avanzar.

Por lo tanto, solicito que se rechace el planteo del senador Rodríguez Saá.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. – Creo que hay un error y por eso le pedía una interrupción al senador, presidente de Cambiemos, porque creo que hay un error material en la interpretación que se está haciendo.

El senador Rodríguez Saá ha planteado claramente que lo que es atinente a la Comisión de Coparticipación Federal es lo respectivo al consenso fiscal. Y no me pueden decir que en el consenso fiscal no se afectan impuestos coparticipables.

Se modifica lo relativo al impuesto al cheque, se modifica lo relativo al fondo solidario, se avanza sobre las provincias diciéndoles que tienen que derogar los impuestos provinciales, se avanza sobre los juicios y se le solicita a las

provincias que renuncien a los juicios por una compensación que también afecta a impuestos.

Entonces, el supuesto consenso fiscal es federal. La provincia de San Luis no lo ha firmado –el gobernador en la reunión dijo claramente por qué–, pero hace a la coparticipación federal. No estamos hablando de la ley de previsión para la coparticipación. Estamos hablando de la ley de consenso fiscal que está hoy en consideración.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cobos.

Sr. Cobos. – Quiero aportar algunas aclaraciones.

Nosotros hoy estamos tratando un acuerdo entre gobernadores –23 de los 24– y la Nación Argentina en el recinto que defiende o vela por los intereses de las provincias. Ahora, este acuerdo está indicando un camino de compromisos mutuos, comunes de las partes, y a partir de ahí se van a desprender una serie de leyes necesarias. En el compromiso fiscal, para poner un ejemplo, se deroga de la Ley de Impuesto a las Ganancias el artículo 104, incisos *a)* y *b)*. Con el pacto fiscal simplemente no queda derogado, queda avalado el compromiso, que requiere después ser ratificado, además, por las provincias.

Entonces, me parece que cuando entren el impuesto al cheque y todos los impuestos específicos que tienen que venir con media sanción de Diputados, ahí sí se le podrá dar intervención a la Comisión Federal de Impuestos.

Me parece que esto es general, está indicando un camino. Y tan es así, que tenemos ahora dos leyes para tratar: la de responsabilidad fiscal y la de movilidad, que sí pertenecen a Trabajo.

Esa simple aclaración es la que quería hacer.

Sra. Presidente. – Vamos a votar la moción del senador Naidenoff del rechazo o de aceptación de la propuesta de nulidad del...

Sra. Negre de Alonso. – La tiene que resolver usted en primer lugar, presidenta.

Sra. Presidente. – No, no la tengo que resolver yo.

Vamos a votar la moción que hizo el senador Naidenoff, quien dijo: rechazamos o aceptamos la nulidad propuesta por el senador Rodríguez Saá. Así que los que voten por la afirmativa están...

Sra. Negre de Alonso. – Las facultades de nulidad son, en primer lugar, de la Presidencia. Tengo, como antecedente de esto, que, cuando se trató el matrimonio igualitario, en su lugar el senador Pampuro declaró la nulidad –el senador Pichetto lo avaló– de uno de los dictámenes y dijo que era facultad de la Presidencia. Estos son los antecedentes que existen en este cuerpo.

Entonces le pido, señora presidenta, que usted primero resuelva sobre la nulidad y después nosotros tendremos derecho a plantear una reconsideración al cuerpo.

Sra. Presidente. – Me parece mucho más democrático que lo resuelvan todos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Me parece mucho más democrático que lo resuelvan todos.

Vamos a votar con el sistema...

Sr. Fuentes. – No es materia votable.

Sr. Secretario (Tunessi). – Le piden que diga que está bien girado.

Sra. Presidente. – Sí, claro que está bien girado. Es lo que nosotros creemos. Pero ahora vamos...

Sr. Pichetto. – Presidenta: ratifique sus actos.

Sra. Presidente. – Por supuesto, pero lo que quiero ahora es...

Sr. Pichetto. – ¡Pero ratifíquelos! Delante del pleno diga que son nulos o válidos.

Sra. Presidente. – ¡Pero son absolutamente válidos para mí!

Sr. Pichetto. – ¡Y si son válidos, dígalos, presidenta!

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Silencio, por favor.

La Presidencia ratifica que el giro es válido.

El senador Naidenoff hizo una moción. Si la quieren, vótenla, y, si no, seguimos de largo. Me da lo mismo.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¿Votamos la moción?

Listo, entonces. Sigamos.

Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: me tiene que dar la palabra.

Sra. Presidente. – Le he dado la palabra. ¿Cómo me dice que no le he dado la palabra? Tiene la palabra la senadora.

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, señora presidenta.

Usted acaba de resolver no ha lugar. Entonces, nosotros planteamos la reconsideración y ahora sí hay dos posturas, la del señor senador...

Sra. Presidente. – ¡Es lo que le dije, senadora! ¡Es exactamente lo que le dije!

Sra. Negre de Alonso. – ¡No! ¡No, señora presidenta! ¡Es un trámite procesal distinto! Yo le pido que ahora sí... Nosotros planteamos la reconsideración, los senadores por San Luis. Entonces, usted resuelva. Y el senador, presidente del bloque Cambiemos, ha planteado que se rechace la nulidad.

Nosotros le planteamos que al reconsiderar...

Sra. Presidente. – Señora senadora: todo lo que usted está diciendo no está previsto en el reglamento.

Sra. Negre de Alonso. – ¿¿Cómo que no!?

Sra. Presidente. – ¡No está previsto en el reglamento!

Sra. Negre de Alonso. – ¡Sí está previsto en el reglamento!

Sra. Presidente. – ¡Léamelo!

Sra. Negre de Alonso. – ¡Está previsto en el reglamento!

Sra. Presidente. – ¡Léamelo!

Sra. Negre de Alonso. – Usted tiene obligación de conocer el reglamento. ¡Usted tiene la obligación de conocer el reglamento igual que yo!

Sra. Presidente. – Senadora: porque lo conozco le estoy diciendo cómo se hace. No está previsto lo que usted dice.

Sra. Negre de Alonso. – ¡Sí tengo derecho a plantear la reconsideración!

Sr. Petcoff Naidenoff. – Para finalizar esto, yo solamente solicité que lo resuelva el cuerpo, porque a los tres días hábiles, cuando hay un planteo de cambio de giro y no lo resuelve la Presidencia –que no tiene la obligación de resolverlo–, en la primera sesión se pone a consideración del cuerpo.

Sra. Presidente. – Es exactamente así. Es exactamente así, senador.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Que lo resuelva. Listo. Lo tiene que resolver el cuerpo al cambio de giro, porque de lo que se planteó por escrito no hay planteo de nulidad, sino cambio de giro.

Sra. Presidente. – Absolutamente.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo quiero que, en función de lo que se plantea, se rechace el cambio de giro porque tenemos dictamen; y avancemos con la sesión, presidenta.

Sra. Presidente. – Es lo que pedí, senador, pero como todos hacen declaraciones y no se puede continuar...

Vamos a votar el rechazo a la propuesta de cambio de giro. Rechazo o aceptación a la propuesta. Los que votan por la afirmativa están votando aceptación del cambio de giro, o sea que están votando con...

Varios señores senadores. – ¡No!

Sra. Presidente. – No, rechazo.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – ¡Ah!, usted lo propuso. Perdón, perdón.

Los que votan por la afirmativa están votando el rechazo al cambio de giro; los que votan por la negativa están votando la aceptación del cambio de giro.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Vuelvo a repetir: la afirmativa es la propuesta del senador Naidenoff, la negativa es la propuesta del senador Rodríguez Saá.

Sra. Negre de Alonso. – Tiene que poner una primero y, luego, la otra.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Cuando se paran los senadores, se producen problemas en el sistema... Ahora se puede votar. Ponga el sistema, por favor.

La afirmativa es la propuesta de Petcoff Naidenoff, la negativa es la propuesta del senador Rodríguez Saá.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Mayans. – Yo le pedí permiso, presidenta, pero no me escucha. Quiero pedir permiso para abstenerme.

Sra. Aguirre. – Yo también.

Sr. Mayans. – No quiero contradecir a mi bloque. Quiero abstenerme, presidenta.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

–Un señor senador formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – Yo conozco el reglamento. ¿No voy a conocer las abstenciones? ¡No vi que levantó la mano, senador, por favor! Le pido que no sea grosero, porque la verdad es que yo no lo agredí a usted, ¿eh? Seamos respetuosos. Gracias, senador.

Me dice que no conozco el reglamento para una abstención...

Sr. Rodríguez Saá. – Usted, que conoce el reglamento...

Sra. Presidente. – Vamos a levantar las manos para las abstenciones, por favor.

Mayans, Aguirre, Menem, Labado...

Sr. Secretario (Tunessi). – Aguirre, Labado, Mayans y Menem se abstienen.

Sra. García. – Presidenta, para cambiar el sentido del voto.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – La vamos a hacer de nuevo a la votación... ¡Es que no se puede porque el sistema no da! Perdónenme, es así.

Traten de ser un poquito más tranquilos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Las cuatro que faltan votar son abstenciones.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son 47 votos afirmativos, 18 votos negativos y 4 abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

–La señora senadora García realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

1 Ver el Apéndice

2 Ver el Apéndice

Sra. Presidente. – Se rechazó la moción de cambiar el giro.

Sr. Secretario (Tunessi). – Ya está. Continúa.

–La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – No, no es la nulidad. Usted misma dijo... La nulidad la resolví yo.

Sra. Negre de Alonso. – Presidenta: es la reconsideración: artículo 148.

Sra. Presidente. – Reconsideración... ¡Pero usted estaba diciendo otra cosa, no nulidad!

Sra. Negre de Alonso. – 148.

Sra. Presidente. – ¡Por favor, senadora! Por favor...

Sr. Pichetto. – Bajemos la chicana un poquito. Bajemos un cambio.

Sra. Presidente. – ¡Por favor!

Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Quiere que explique? El 148 es otra cosa.

Sra. Presidente. – Bueno, adelante.

Sr. Secretario (Tunessi). – Ahora están en tratamiento los órdenes del día...

Sra. Presidente. – Están en tratamiento los órdenes del día que se leyeron por Secretaría.

Tiene la palabra el senador Rozas.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

–El señor senador Fuentes realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra. Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Vamos a votar, primero, el tratamiento sobre tablas para poder hacer el tratamiento de los órdenes del día; a mano alzada.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Rodríguez Saá. – Individualmente por cada proyecto. Pido la palabra. Pido la palabra.

Sra. Presidente. – El senador Pichetto tiene la palabra.

Sr. Pichetto. – Que el oficialismo cumpla con su rol y que explique en la Cámara este tema. Los tres temas tienen dictamen. Han transcurrido seis días. El reglamento dice siete, en la medida de lo posible. Estamos dispuestos a ponerlo a consideración para que quede todo bien. ¡Expliquen! ¡Expliquen! ¡Expliquen!

Sra. Presidente. – Lamentablemente, yo no puedo, senador.

Sr. Pichetto. – Porque si ustedes no cumplen el rol de oficialismo y defienden las posiciones del gobierno, la verdad es que no sabemos en qué Cámara estamos. ¡Expliquen claramente qué pasó!

Tiene seis días el dictamen. En muchas oportunidades hemos tratado temas con seis días, porque el reglamento dice: “en la medida de lo posible”. Ahora bien, como tenemos que tener una ratificación de toda la Cámara, póngalo a consideración para que tenga los dos tercios.

Sra. Presidente. – Lo voy a hacer, senador. Pero yo no puedo hablar, porque después me dicen que la Presidencia no habla.

Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Rodríguez Saá. – Después, pido la palabra.

Sr. Mayans. – Sí, presidente.

Lo que dice el senador Pichetto con respecto al tema del oficialismo, acá lo que tienen que aclarar es que en Labor Parlamentaria, estando presentes todos los bloques, se acordó que se iba a tratar este tema aun teniendo los seis días, porque ese fue el acuerdo que se hizo. Estaban todos los bloques presentes. Entonces, se va a ratificar lo de Labor Parlamentaria. Pero eso le corresponde a usted decirlo.

Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Vamos a manejarlos un poquito con cierto respeto, primero, por la Presidencia. Acá venimos de planteos de nulidad, que fueron resueltos, que no correspondían, que tienen que ver con el reglamento, y entramos a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es el planteo. Lo que se acordó en Labor es el abordaje integral, en la discusión integral de consenso fiscal, responsabilidad fiscal, reforma previsional y otros temas. Y votar por separado, como primer debate, cada una de estas decisiones políticas que hoy se ponen a consideración del cuerpo. Esa fue la voluntad de Labor Parlamentaria, la inmensa mayoría. La voluntad.

En lo que también se quedó y se acordó –es lo que, en definitiva, expresó el senador Pichetto– fue que, en caso de duda, porque el reglamento

dice: “en la medida de lo posible”, como se trata de estos temas, someterlo a la consideración del cuerpo. Entonces, lo que queremos es que se someta a la consideración del cuerpo la habilitación de estos tres temas, con la mayoría que requiere, conforme lo que se acordó en Labor Parlamentaria.

Sra. Presidente. – Eso es lo que pedí: que por favor se pusiera a consideración.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Que se ponga a consideración, presidenta.

Sra. Presidente. – Pero, perdón, primero vamos a hacer una votación sobre tablas, ¿o lo dejan considerado por Labor Parlamentaria?

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Que se vote la consideración sobre tablas. El tratamiento sobre tablas de los tres... ¿Me espera para...?

Senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Les ha dado la palabra a todos. A mí usted no puede cercenarme el uso de la palabra...

Sra. Presidente. – Le estoy preguntando si es sobre esto.

Sr. Rodríguez Saá. – Es para hablar de este tema.

Sra. Presidente. – Les pediría a todos que, por favor, se dirijan a mí con respeto, porque la verdad es que yo no le falto el respeto a nadie...

Sr. Rodríguez Saá. – Yo tampoco, señora presidenta.

Sra. Presidente. – O sea, no esté todo el tiempo aclarándome, ya que no es que no le estoy dejando hacer uso de la palabra, senador.

Sr. Rodríguez Saá. – Tengo una larga trayectoria en el Senado...

Sra. Presidente. – Ya me dijo dos veces que le niego la palabra.

Sr. Rodríguez Saá. – Y nunca le he faltado el respeto a nadie...

Sra. Presidente. – ¡Pero dos veces me dijo que le niego...!

Sr. Rodríguez Saá. – Y a usted no le he faltado el respeto; no le he faltado el respeto.

Señora presidenta: voy a plantear, en primer lugar, lo que aclaré en Labor Parlamentaria: que no tengo ninguna objeción de que se trate.

Yo voy a votar en contra del tratamiento sobre tablas. Pero lo que quiero pedir es que, por lo menos, se respete que son tres temas diferentes. Se tratan y se votan diferente. Una cosa es el acuerdo fiscal, otra cosa es la responsabilidad y otra cosa es el acuerdo previsional. Son tres leyes diferentes, se deben tratar en forma diferente y se tienen que votar en tres votaciones.

Sra. Presidente. – Senador Rozas.

Sr. Rozas. – Vamos a poner en claro cómo son las cosas, si realmente queremos avanzar, respecto de lo que se resolvió en Labor Parlamentaria, porque además fue la voluntad del gobierno nacional y de veintitrés gobernadores. Porque nosotros estamos hoy tratando este tema no porque se le haya ocurrido al bloque Justicialista o al bloque de Cambiemos o a cualquier otro bloque de los que conforman el Senado. Acá estamos analizando un acuerdo al que arribaron veintitrés provincias argentinas con el gobierno nacional, lo cual creo que debería ser reconocido por todos los sectores políticos como una cuestión trascendente, más allá de la letra fina, con la que podemos estar de acuerdo o no en algunos aspectos.

Pero, desde el punto de vista republicano e institucional, es un tremendo paso adelante, en medio de esta grieta que vivimos los argentinos, que veintitrés gobernadores puedan sentarse con el presidente de la Nación y llegar a un consenso, a una responsabilidad fiscal y a una modificación previsional.

Ahora bien, quiero decir que no son independientes, tal cual lo plantea el senador Rodríguez Saá de manera tajante, porque los señores gobernadores se han comprometido a la modificación de la fórmula del tema previsional cuando se habla del consenso fiscal. En el consenso fiscal, este tema figura como uno de los requisitos pedidos por los gobernadores o aceptado por los gobernadores.

Entonces, démosle un tratamiento integral al tema, más allá de cómo cada uno vote después cada uno de los temas.

Sra. Presidente. – Senador Pichetto.

Sr. Pichetto. – Creo que los acuerdos en Labor Parlamentaria hay que cumplimentarlos, y todos somos gente grande.

Lo que hemos decidido en Labor Parlamentaria es un abordaje en general de los tres temas

y luego la votación individual, en general y en particular, de las tres leyes. El gobierno, como siempre, comete tonterías, porque este era un esquema integral donde todos los acuerdos que los veintitrés gobernadores y el presidente firmaron deberían haber venido en una sola ley. Pero como parece que a veces tienen problemas con el funcionamiento neurológico, hacen todo mal.

Pero el tema era: debate en general de los tres temas y en general y en particular se votaba cada ley. Eso es lo que hablamos ayer todos los que estábamos en Labor Parlamentaria.

Senador Rodríguez Saá: yo sé que usted dijo que no estaba de acuerdo; usted fue coherente. Pero esto es lo que acordamos la mayoría en Labor Parlamentaria.

Lo que digo es: pongamos en consideración la habilitación de los temas con dos tercios y empecemos el debate en general de los tres temas y después votamos cada ley en general y en particular, para que nadie se sienta afectado.

Sra. Presidente. – Perfecto.

Vamos a votar con el sistema –como está rara la cosa– la habilitación de los tres temas a la vez sobre tablas.

Sr. Secretario (Tunessi). – Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Reúnen los dos tercios: 62 votos afirmativos, 8 votos negativos y cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sra. Presidente. – ¿Quién va a tomar la palabra primero? El senador Cobos.

Sr. Pichetto. – Hagamos la lista de oradores.

Sra. Presidente. – Sí, vayan haciendo la lista así ya sabemos cómo la cerramos.

Senador Cobos.

Sr. Cobos. – Gracias, señora presidenta.

Permítame hacer un poquitito de historia de por qué los gobernadores y el presidente de la Nación han decidido encarar un nuevo pacto fiscal.

Recordemos que el último pacto fiscal fue celebrado en agosto de 1992. En aquel entonces,

el presidente de la Nación –hoy aquí presente–, el doctor Carlos Menem, impulsó este pacto producto de un cambio en las condiciones del sistema de jubilación.

Aparecía el sistema privado: las AFJP. Por lo tanto, había que financiar el sistema de reparto, que se quedaba sin recursos y, en consecuencia, sin posibilidad de financiar a aquellos que estaban gozando de esos beneficios. De esta manera, las provincias cedieron el 15 por ciento de la coparticipación correspondiente al impuesto a las ganancias, es decir que, del total de ganancias que se recaudaba, el 15 por ciento iba a la ANSES y, después, la ANSES también aparecía como socia dentro de las provincias con un 20 por ciento; también, otras asignaciones vinculadas con un fondo solidario de provincias con necesidades básicas insatisfechas, el Fondo del Conurbano, los fondos correspondientes a los ATN para atender a las provincias con desequilibrio fiscal.

Han pasado muchos años y esto vence este año. Entonces, hay que hacer un nuevo pacto fiscal. Pero dentro del trajinar de la relación Nación-provincias, durante todos estos años aparecieron juicios. ¿Por qué? Porque entre los juicios que aparecieron apareció la provincia de Buenos Aires diciendo: “Miren: a mí me corresponde el 10 por ciento, pero está establecido un tope de 650 millones de pesos y quedaron congelados esos 650 millones de pesos”. Ese fue el motivo de la demanda que inició el gobierno de la provincia de Buenos Aires para actualizar ese valor.

Aparecieron después otros reclamos. ¿Por qué, señora presidenta? Porque en el año 2006, por presupuesto, se decide prorrogar este acuerdo de la retención o la detracción del 15 por ciento hacia las provincias en función de la ANSES y convengamos que después, además, el sistema jubilatorio volvió a ser estatizado. Entonces, aquel 15 por ciento que iba para financiar el sistema de reparto cuando existían las AFJP, estando otra vez en poder del Estado el sistema previsional, igual seguía descontándose a las provincias.

Las provincias de San Luis, Córdoba y Santa Fe reclamaron y originaron así una resolución de la Corte a favor de ellas. Pero producto de esto hubo también provincias que iniciaron y se adhirieron. En síntesis, tenemos una litigiosidad

¹ Ver el Apéndice

muy grande entre Nación y provincias, donde las cifras de las que se habla son millonarias: 56 juicios, 340 mil millones de pesos. Solo en la provincia de Buenos Aires, hablan las demandas por 400 mil millones de pesos. Entonces, hay que ordenar esto. Hay responsabilidades comunes que tenemos como Estado, la Nación, las provincias y los municipios, pero tienen que conducirse con armonía. Este es uno de los motivos del pacto fiscal: tratar de terminar con esta litigiosidad que ha venido transcurriendo durante muchísimo tiempo. Entonces, producido esto, hay una serie de acuerdos fiscales donde se anula o se propone anular. Como yo bien lo dije antes de entrar en la sesión, vendrán las leyes específicas para esto.

Ese artículo del que hablábamos de la Ley de Impuesto a las Ganancias del año 97, donde se afecta el 20 por ciento para la ANSES, va a ser derogado y también va a ser derogado el inciso b), que corresponde en ese artículo al Fondo del Conurbano. ¿Por qué? Porque hay un arreglo que hace la Nación con la provincia de Buenos Aires.

A partir de esta modificación, a través del acuerdo, surge también una modificación de lo que sería el impuesto al cheque, que hoy se coparticipa en 70 a la Nación y 30 a las provincias. Es un impuesto específico que se creó con una finalidad y que, como suele suceder en este país, se extendió indefinidamente. Y aquellos que son impuestos específicos...

—Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. — Por favor, un poco más de silencio. Gracias.

Senador, puede continuar.

Sr. Cobos. — Y aquellos que son impuestos específicos pueden salirse del esquema tradicional de coparticipación y se coparticipan de manera distinta. Bueno, lo que se ha resuelto entre la Nación y las provincias es que todo el impuesto al cheque vaya como recurso a la ANSES en compensación de la eliminación del artículo 104.

Yo les diría que esta es una de las razones. La otra razón de este pacto fiscal es que la Nación y las provincias tienen que recuperar el superávit fiscal. En economía, señora presidenta, es muy sencillo: son sumas y restas; no hay grandes ecuaciones. Y cuando se gasta más de lo que

entra, vienen los problemas: o emitimos o nos endeudamos. Y acá, el esfuerzo tiene que ser compartido entre la Nación y las provincias. Este es el esquema al que se pretende arribar en este acuerdo también. Por eso surge la ley de responsabilidad fiscal, que no es una ley de responsabilidad fiscal que por primera vez tratamos, ¡no! Es una modificación de la ley que se aprobó en 2004.

Y fíjese lo que ocurría en 2004 y 2005 cuando se cumplía con la ley de responsabilidad fiscal: había superávit fiscal, había un dólar competitivo, reservas del Banco Central, balanza comercial positiva. En 2004-2005 fue cuando el país tuvo inflación de un dígito. Hoy, nuestro gobierno persigue que ese objetivo se alcance en 2019. Por eso hay un compromiso gradual de reducir el déficit fiscal, pero también lo tienen que acompañar las provincias. Entonces, aparece ahí una ley de responsabilidad fiscal: son 24 artículos que modifican algunas cosas; que la actualizan, pero que la ponen nuevamente en vigencia para que saneemos las arcas de la administración tanto nacional como provincial.

Dicho de esta manera, se restringe el endeudamiento —que no puede ser más del 15 por ciento de los recursos que se destinan en coparticipación a las provincias—, hay estímulos, hay castigos, hay una limitación para designar personal cuando faltan seis meses para terminar un mandato. En definitiva, hay un ordenamiento de esto. Porque cuando se gasta más de lo que entra, se pierde la inversión del Estado en áreas esenciales como salud, seguridad y vivienda.

Hay otro tema muy importante, que es la recuperación de los fondos específicos. En tal sentido, hay un compromiso de los gobernadores. Miren: cuando se hacían obras —y muchas— en materia vial y en viviendas, los fondos específicos del FONAVI y de Vialidad no se tocaban. Después, por los problemas de déficit fiscal, se fueron afectando esos recursos. En conclusión: menos caminos y más deteriorados, si sumamos todo al efecto del impacto de la inexistencia del ferrocarril. ¡Ni qué hablar de nuestras rutas!

Lo mismo pasa con el tema de la vivienda. Hoy hay muchos créditos, producto —en muchos casos— de leyes que hemos tratado acá. Pero también está el tema de la vivienda social y es aquí donde hacen hincapié los gobernadores

junto a la Nación. Entonces, a mí me parece que este es el conjunto de medidas...

Ahora, ¿qué pasa con el régimen previsional? En realidad, el régimen previsional se va a tratar de acuerdo con una comisión bicameral que tendrá un plazo de dos años, aproximadamente, para abordar el fondo de la cuestión. Pero convengamos acá que ya hubo una señal por parte del gobierno y por parte de este Congreso, que aprobó lo que se llamó la reparación histórica. Es decir, se modificó la jubilación en muchos casos, en más de un millón de jubilados, en aquellos que adhirieron, cumpliendo con las sentencias determinadas. Lo que se persigue ahora, recompuesta esa jubilación y remuneración, es mantener la intangibilidad en el tiempo producto de la inflación y de la evolución salarial. El proyecto que mandó el Poder Ejecutivo contemplaba nada más que la indexación de las remuneraciones trimestralmente por la inflación. Bueno, acá, aceptando una propuesta de la oposición, se establece una fórmula polinómica que contempla la variación salarial y la indexación.

¿Cómo era antes o cómo es hasta ahora? Bueno, está previsto en función de los recursos que recibe la ANSES, pero acá estamos tocando los recursos que recibe la ANSES porque estamos afectando el impuesto al cheque, porque estamos cambiando el artículo 104. Entonces, lo que se quiere justamente es garantizar la jubilación. Después, la senadora Machado –en virtud de algunas cuestiones de forma y modificaciones al dictamen que se aprobó– va a informar, dado que pertenece también a la Comisión de Trabajo.

En el acuerdo entre los gobernadores y el presidente sobre el régimen previsional se habla de impulsar inmediatamente, dada la reforma propuesta en el régimen tributario –de lo que hablábamos antes– y en la distribución de recursos públicos, la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público –ley 26.417– para que aquellas se ajusten trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la evolución de la inflación, lo cual queda de alguna manera garantizado por la modificación que ha hecho el bloque de la oposición; garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil para aquellas personas que hayan cumplido los treinta años de servicios e impulsar

la eliminación de las inequidades generadas por los regímenes especiales de privilegio. Todo esto se va a discutir –el fondo de la cuestión– a más tardar en dos años, o sea que esto va a ser provisorio. Pero necesitamos una adecuación conforme a este nuevo cambio tributario que va a ser plasmado por las sucesivas leyes, muchas de las cuales tendrán origen en la Cámara de Diputados.

Para ir redondeando, a efectos de que haga uso de la palabra la presidenta del bloque del PRO, en líneas generales, el consenso fiscal está compuesto de fundamentos, de compromisos comunes entre la Nación y las provincias, muchos de los cuales hemos explicitado, y compromisos del Estado nacional. Precisamente, acá hay una garantía del Estado nacional para que con esta modificación tributaria, atendiendo el reclamo del conurbano, ninguna de las provincias perciba menos de lo que hoy percibe. Por eso, hay una garantía a través de transferencias automáticas y por vía de la emisión de distintos bonos para garantizar este cumplimiento, no solo el de la provincia de Buenos Aires, sino también el del resto de las jurisdicciones que han adherido al convenio.

Se fija un plazo también en el pacto para cumplir con aquellas provincias que tienen la sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Acá lo que queremos es competitividad, inflación de un dígito; es recuperar el aparato productivo. Por eso, también las provincias asumen un compromiso de ir disminuyendo gradualmente impuestos que son distorsivos o algunos impuestos que colocaron para su supervivencia –como las tasas de abasto– o impuestos municipales hasta a las exportaciones. Bueno, todas estas cosas tienen que desaparecer y, a lo mejor, ir aumentando los impuestos inmobiliarios o impuestos patrimoniales, pero bajo el concepto de armonización –esa es la idea–, para tener valores impositivos y tasas fiscales más o menos coherentes y que no haya las diferencias que hoy existen en nuestro país.

Hoy, en las provincias, ingresos brutos ha pasado a ser una cifra muy importante en la consideración del ingreso. En mi provincia, representa el 70 por ciento de los ingresos provinciales. La provincia de Mendoza tiene en el presupuesto mitad de coparticipación y mitad

de recursos provinciales. ¡Fíjese que es una cifra importante! Sin embargo, hay un compromiso de ir reduciéndolo en forma gradual a la espera, obviamente, de que se reactive la economía, que crezca el aparato productivo y así la mayor cantidad de recursos van a ingresar por el crecimiento de la economía. Pero esto me parece que es un paso verdaderamente importante.

Lo de la asignación específica ya lo dije.

Por último, ya para terminar, hay un desistimiento de las causas judiciales: volvemos a cero. Hay una compensación mutua entre la Nación y las provincias. Pero, la verdad, lo que necesitamos en el país es que provincias, Nación y municipios trabajen con sus responsabilidades en forma armónica, que cada uno esté en su lugar de trabajo administrando lo que tenga que administrar y no andar peregrinando por los palacios judiciales.

Dicho esto, señora presidenta, le voy a dar la palabra a la senadora Machado, quien va a abordar con detalles el tema de la movilidad previsional.

Sra. Presidente. – Gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Laura Rodríguez Machado.

Sra. Rodríguez Machado. – Gracias, presidenta.

Para agregar algunos puntos que tienen que ver con datos más específicos en lo que concierne a uno de los tres despachos que se someten a consideración de este cuerpo y que tienen que ver con las modificaciones que se sugieren en el sistema previsional argentino.

Como bien informaba recién el senador Julio Cobos, la ley de reparación histórica, 27.260, dispuso en su artículo 12 la creación de un Consejo de Sustentabilidad Previsional que elabore un proyecto de ley integral. Ese proyecto de ley será el que establezca un nuevo régimen completo: un régimen previsional universal, integral, solidario, público, sustentable y de reparto.

Por lo tanto, lo que ahora se somete a consideración son tres modificaciones puntuales, no es la modificación integral de todo el régimen jubilatorio. Y esta reforma que se somete a consideración de los señores senadores miembros de este cuerpo establece entre sus aspectos, primero, la movilidad jubilatoria, con algunas

modificaciones. Como bien explicaba el senador Cobos, las leyes que están en tratamiento en Diputados van a modificar sustancialmente la recaudación tributaria que era la base –entre otros componentes– de la fórmula que actualmente tenía el régimen de movilidad jubilatoria. De manera tal que, al modificarse eso, es menester rápidamente encontrar otra alternativa para que los jubilados puedan sentirse protegidos en lo que respecta al cumplimiento del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece la obligatoriedad de las jubilaciones y pensiones móviles, con otra fórmula.

Esa otra fórmula, que fue tratada en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo a propuesta de la oposición, que posteriormente de ser considerada por las autoridades del Poder Ejecutivo que estuvieron presentes fue aceptada, básicamente, es una combinación entre el nivel general del índice de precios al consumidor –que establece lo que todos entendemos como inflación– y el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Esto, en una combinación de un 70 por ciento del tema de inflación y un 30 por ciento del tema salarial, establece una fórmula que, a nuestro criterio, va a permitir la protección de una movilidad adecuada con relación a los sueldos de los empleados en actividad, pero también a lo que podría perder en relación al avance de la inflación en la medida en que esta atente contra la capacidad adquisitiva de cada salario.

Esta fórmula se ha utilizado en muchísimos países. En los países de la región, como el Brasil y Uruguay, tienen esta combinación de salarios o de índices inflacionarios. En Europa, la usan Alemania, España, Finlandia, Reino Unido y demás. Pero, básicamente, se llegó a un acuerdo en función de una propuesta de la oposición, que fue aceptada por el oficialismo.

El otro aspecto importante es que se establece un haber mínimo garantizado. Se fija una garantía adicional para los haberes jubilatorios equivalente al 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para todas aquellas prestaciones previsionales que estén por debajo de este número. Por lo tanto, va a significar una mejoría para aquel sector que en este momento estaría cobrando menos que ese 82 por ciento móvil. De hecho, aspiramos a que en un futuro sea

mayor, porque si el salario mínimo y móvil genera un aumento, esa movilidad también lo será en función de ese aumento para aquellos que cobran menos que ese salario. O sea que habrá dos garantías de movilidad, además de la fórmula que indiqué.

Finalmente, está el tema de la edad jubilatoria. Se modifica en el proyecto en consideración el artículo 252 de la ley 20.744, Ley de Contrato de Trabajo, que todos los abogados conocemos como LCT, con el propósito de facilitar al trabajador del sector privado exclusivamente la opción de poder elegir el momento en el cual se jubila, es decir, la mujer a partir de los 60 o el hombre a partir de los 65 pueden decidir si continúan trabajando hasta los 70 años. Esta decisión implicaría para el empleador que solamente por ese período de excedencia tenga que hacer los aportes de ART y con la obra social. En el caso de los empleados, los aportes se mantienen de la misma forma.

Por último, esto se completa con la exclusión del sector público de esta posibilidad o facultad de decisión del trabajador de aumentar su etapa de capacidad productiva o vida laboral ya que, como dije, solamente se aplica al sector privado.

Finalmente, queremos decir que este cálculo de fórmula mixta entre inflación y salarios se aplicará también a asignaciones familiares.

Con estas palabras, simplemente quise informar cuáles son los alcances del despacho que se somete a consideración del honorable cuerpo.

Gracias, señora presidente.

Sra. Presidente. – Muchas gracias, senadora.

Tiene la palabra el señor senador Federico Pinedo.

Sr. Pinedo. – Gracias, presidenta.

Ha sido bastante claro el informe de los miembros informantes pero, no obstante eso, en nombre de nuestro bloque quiero hacer una defensa del acuerdo político al que ha llegado el presidente de la Nación con veintitrés señores gobernadores de provincias, a los efectos de establecer un parámetro de previsibilidad y de seriedad para toda la Argentina que va a generar un proceso de crecimiento sostenido en nuestro país, que beneficiará tanto a las provincias como al Estado nacional.

El acuerdo que se analiza en el día de hoy considero que es absolutamente histórico. Es

absolutamente histórico porque podría llegar a terminar con un drama de la Argentina y de los argentinos más pobres. Me refiero al drama de ver cómo la Argentina, con su extraordinaria creatividad y con sus extraordinarias condiciones, tiene la posibilidad de crecer enorme y regularmente. Cada tanto tiempo se destruye por grandes crisis generadas siempre por el mismo motivo: es decir, porque los gobiernos gastan más de lo que tienen y gastan más y gastan más y gastan más, hasta que todo revienta por los aires y lo pagan los más pobres de la Argentina.

Así, hemos visto cómo la Argentina ha padecido momentos de hiperinflación, hiperinflación que significa que el Estado decide financiarse a sí mismo emitiendo cada vez más billetes para hacer frente a sus pagos. De ese modo, los billetes que tienen los sectores asalariados, los jubilados, los más pobres, los que tienen ingresos fijos, van perdiendo su capacidad de compra. Entonces, ganan una equis cantidad de dinero, pero van al supermercado y cada mes compran menos con ese dinero, porque ese dinero vale cada vez menos debido a que el Estado lo devalúa a efectos de pagar sus excesos de gastos.

Algunas veces, el Estado soluciona el tema con las hiperinflaciones: catástrofes sociales. Otras veces, lo soluciona –como en el año 2002– con extraordinarias devaluaciones. En 2002 y en 2003, lo que vio la Argentina fue cómo a los asalariados del país se les bajaba la capacidad de compra a la mitad. ¡Y eso pagó las cuentas del Estado! Que a los asalariados de la Argentina, a los más pobres de la Argentina, se les quitara poder de compra, poniéndolos a la mitad de lo que tenían antes. Eso llevó a que el 50 por ciento de los argentinos cayera bajo el nivel de pobreza.

Entonces, el gran drama de la Argentina para generar trabajo, para generar riqueza, para garantizar que se puede ir reduciendo la pobreza, es generar confianza y previsibilidad en el largo plazo. A todos los que quieran invertir en la Argentina, a todos los que quieran contratar trabajadores en la Argentina, a todos los que quieran generar empleo en la Argentina, darles la sensación y la convicción de que todo no va a volar por los aires. Cuando vuela todo por los aires, vuelan los ingresos de los trabajadores, vuelan las empresas, vuelan los trabajos, se destruye todo. Ya lo hemos visto muchas veces.

El esfuerzo que están haciendo los gobernadores de la oposición y el presidente de la Nación, en nombre del gobierno nacional, consiste en establecer bases sanas que garanticen a todos que la Argentina no va a explotar dentro de cinco, dentro de diez o dentro de quince años, porque la Argentina venía explotando cada diez años. ¿Cómo van a hacer eso? Generando compromisos federales, como decía hoy el senador Naidenoff, en materia de gastos, en materia de ingresos y en materia de producción.

Esto que estamos viendo hoy –estos acuerdos– no son acuerdos para el ajuste.

Vamos a analizar el tema de los gastos.

La ley de responsabilidad fiscal, que es la que trata el tema de los gastos públicos, elaborada por veintidós ministros de Economía de las provincias y por el ministro de Hacienda de la Nación –y hecha propia por algunos senadores para su tratamiento hoy acá–, no dice que va a haber un ajuste. Esa ley dice que se va a mantener en términos reales el gasto público de la Nación y de las provincias argentinas. Y este gasto público, que se va a mantener en términos reales, no es un gasto público bajo: es el gasto público más alto de la historia argentina, y se va a mantener en términos reales. O sea que no es un ajuste lo que estamos viendo en ese aspecto.

Lo que sí estamos diciendo, lo que están diciendo los gobernadores de la oposición, lo que está diciendo el presidente de la Nación, es que tenemos que hacer una apuesta al crecimiento de la Argentina para que ese crecimiento haga que el sector productivo crezca en relación cada vez más. Y, por eso, los gastos del Estado no van a aumentar más que en términos reales.

El otro acuerdo es el acuerdo de los ingresos

La Argentina tiene un nivel impositivo de los más altos del planeta. Eso impide generar actividades, producción, empresas, empleo. Entonces, estamos acordando bajar el nivel de impuestos en la Argentina.

A pesar de tener un déficit exuberante, extraordinario, que hace inviable a la Argentina a largo plazo y podría derivar en una nueva explosión, entonces, lo que se llama el consenso fiscal, lo que está diciendo es que vamos a eliminar en cinco años el déficit en la Argentina. Como decía el expresidente Kirchner, lo que da mayores libertades y mayor soberanía al poder

político es el superávit. Por eso el expresidente Kirchner defendía con tanto énfasis los superávits gemelos, el superávit fiscal y el superávit comercial, que quiere decir que vendemos más de lo que compramos en el exterior.

Entonces, los gobernadores de la oposición y el presidente de la Nación están diciendo que vamos a eliminar el déficit, pero vamos a bajar los impuestos. Y no solamente vamos a bajar los impuestos nacionales, sino que vamos a bajar también los impuestos provinciales.

Se dan cuenta todos los actores de este acuerdo que podría generar un daño a los ingresos de las provincias. Entonces, dicen: “Si nosotros bajamos impuestos en las provincias, podríamos reducir los ingresos de las provincias, lo cual podría ponerlas en dificultad”. Entonces, acordaron con el presidente de la Nación que, a los efectos de mitigar esa transición hacia un crecimiento que les va a dar más ingresos, el gobierno nacional va a emitir un bono que se va a distribuir en las provincias para cubrir sus necesidades de adaptación a un modelo productivo.

Si bajamos el déficit, garantizamos que no va a haber explosiones a espaldas de los trabajadores. Si bajamos los impuestos, estamos garantizando que va a haber crecimiento y generación de empleo en la Argentina. Hay que financiar la transición. La vamos a financiar con un bono que vamos a emitir por este acuerdo fiscal. Esto es lo que se está pactando y es lo que puede transformar en forma definitiva a la Argentina o, por lo menos, por un muy largo plazo, en un país que crezca sostenidamente en el tiempo.

Un último párrafo para el tema previsional. El tema previsional está impactado obviamente por los acuerdos de baja de impuestos, porque el sistema previsional se financia en parte con esos impuestos que se van a bajar, lo cual requiere una reestructuración del modo en que se actualizan las jubilaciones y las prestaciones de asignaciones familiares y de AUH, que van a ser materia de una modificación en el texto que aprobó la comisión para que también se actualicen las AUH y las asignaciones familiares, que por un error en la modificación de la fórmula que propuso la oposición es necesario modificar lo que se acaba de dictaminar.

En cuanto a la actualización previsional, lo que sucedía cuando se decidió –era una vieja

propuesta de cuando éramos oposición— es que nos enfrentábamos en ese momento a que no había índices de precios. No sabíamos cómo hacer para mantener estables las jubilaciones para que no se depreciaran. Desde la oposición al gobierno anterior decíamos: apliquemos índices de salarios, lo que se llama RIPTE. El gobierno dijo que no, que se aplique una mezcla de índice de salarios con impuestos, porque había unos impuestos que también podían subir por inflación, lo cual podía ser un elemento. Nos opusimos mucho. Dijimos que tenía que ser por índices de salarios y ahora tenemos que reverlo por la baja de impuestos.

El gobierno nacional hizo una propuesta. Vamos a aplicar índice de precios, que ahora sí existe, no se falsifica más, y vamos a poner un poquito más de crecimiento a efectos de que las jubilaciones y las AUH aumenten un poco más que la inflación, que es lo que se había acordado con los gobernadores.

Este es un mecanismo que tiene defectos, como todos los mecanismos. Fue considerado insuficiente por la oposición, que hizo otra propuesta que es parte salarios, como decíamos nosotros cuando éramos oposición, y parte índice de precios.

El problema que tienen los salarios solos es que saltan. Cuando se produce un aumento salarial por una paritaria, salta también el índice. Y cuando después pasa mucho tiempo sin que se produzcan aumentos de salarios hasta la próxima paritaria, las jubilaciones también decaen y no se actualizan.

Entonces, lo que se buscaba era un sistema más plano que le garantizara a los jubilados ingresos más estables durante todo el período. Obviamente, el índice de precios da esa estabilidad. Pero también la oposición quiso que aumentaran un poco más que la inflación y entonces propuso agregarle una parte de la fórmula que sean salarios.

Nosotros no podíamos oponernos a eso, porque era nuestra propuesta anterior y porque consideramos que era razonable. Y esto, ¿qué es lo que logra? Los salarios en el largo plazo aumentan más que la inflación. Cuando aumenta la productividad de la economía, cuando aumenta el crecimiento, los salarios aumentan más que la inflación. Entonces nos parece que es un mecanismo razonable no solamente para que las

jubilaciones no pierdan poder adquisitivo, sino para que aumenten un poco sobre la inflación.

Esa es la propuesta que está sometida en el dictamen de hoy y que nuestro gobierno y nuestra bancada han decidido acompañar.

Con esto, señora presidenta, dejo expuesta la posición del oficialismo en materia política sobre estos acuerdos que estamos tratando hoy.

Gracias.

Sra. Presidente. – Gracias, senador Pinedo.

Le voy a pedir si puede venir, porque tengo que retirarme unos minutos.

Senadora Blas.

Sra. Blas. – Señora presidenta: vengo a cumplir con el compromiso asumido por el gobierno de mi provincia de adherir al consenso fiscal firmado el pasado 16 de noviembre del corriente año.

No podría actuar de otro modo cuando de mi decisión depende, en parte, el futuro y la gobernabilidad de mi provincia. No podría actuar de otro modo si de mi decisión, hoy, aquí, depende empujar o no a mi provincia y a su pueblo a la desazón y al estancamiento.

Ya no es anecdótico, es una realidad y está contemplado explícitamente en el capítulo II, titulado “Compromisos asumidos por el Estado nacional”, que en el punto a) establece compensar a través de transferencias diarias y automáticas a las provincias que adhieran y cumplan con el consenso con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018, resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento a la asignación específica del impuesto al cheque.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Federico Pinedo.

Sra. Blas. – La compensación —continúa diciendo— será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial, en sus ámbitos urbanos y rurales.

Y en el punto c) del mismo apartado, donde condiciona la distribución de bonos entre las jurisdicciones que aprueben el consenso, sucediendo lo propio con el fondo federal solidario,

cuya distribución también se condiciona a la adhesión y al cumplimiento de este consenso.

Con estos argumentos y cumpliendo con mi responsabilidad como representante de la provincia, adelanto mi voto positivo, pero solicito al gobierno nacional que cumpla y honre sus compromisos. Las provincias vienen haciendo grandes esfuerzos para cumplir con sus objetivos, lo que en muchos casos no se acompañan con lo comprometido por la Nación, tal es el caso de obras de gran importancia e impacto social que se encuentran paralizadas, justamente porque se han dejado de transferir fondos.

Respecto a la reforma previsional, voy a referirme insertando lo que pensamos en cuanto a este proyecto de ley.

Nada más. Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora. Senador Pereyra: tiene la palabra.

Sr. Pereyra. – Gracias, señor presidente.

Vengo también a adherir, a acompañar con mi voto, a los dos proyectos de consenso fiscal y de responsabilidad fiscal de los órdenes del día 940 y 941, porque se trata de un consenso federal donde han participado veintitrés provincias y en el cual no cabe, por supuesto, ningún tipo de objeción.

Distinta es la situación de la reforma previsional. Se trata especialmente de un tema muy sensible que afecta a millones de trabajadores jubilados que no tienen una voz que los represente y que vienen siendo atacados por acatar lo que viene de distintos gobiernos del orden nacional.

Haciendo un análisis comparativo –no quiero entrar en el análisis profundo de los tres proyectos que se han manejado aquí– de lo que fue el proyecto original versus la actual situación de los jubilados, este sistema de movilidad se actualiza dos veces por año. Pero después se modificó este proyecto original en consenso con otros bloques en el Senado. Y, de cualquier manera, en esta comparación vemos el deterioro progresivo que va sufriendo el salario de los jubilados.

Este proyecto de consenso, el de 70-30, que es 70 por ciento a través de la inflación y 30 por ciento a través del RIPTE, vemos que tiene una pérdida real del salario. Y tomando como ejemplo el año 2017, analizando cómo

se hubiera actualizado hipotéticamente en este sistema y con el de movilidad, encontramos que los jubilados habrían perdido este año un 3,5 por ciento.

Seguramente va a continuar la pérdida progresiva de este salario, un deterioro progresivo, y a través de los años vamos a ver el salario del jubilado cada vez menor aún.

Todo tiene historia. El tema de los jubilados de la República Argentina también. Este Senado ha votado no hace mucho tiempo la reparación histórica de aquellos que reclamaban a través de la justicia una actualización de sus jubilaciones. Se los hizo renunciar a aquellos que realmente querían, era voluntario. Hubo 1.143.443 jubilados que se acogieron a esta modalidad para poder percibir sus salarios reales. Pero nos encontramos frente a algunos que han acordado y a otros que quieren acordar, que ingresaron al sistema y que no fueron convocados. Hay 305.846 jubilados que aún no fueron convocados por la ANSES para acordar sus salarios, su actualización salarial y sus respectivos retroactivos. Y ahí nos encontramos que los actuales beneficiarios representan menos de 48 por ciento de la meta de 2.400.000 personas que el titular de la ANSES se propuso alcanzar en julio de 2018, justo dos años después de la promulgación de esa ley.

Siguiendo con el tema de las jubilaciones, observamos la inequidad que existe en nuestro país con respecto a las jubilaciones especiales. Algunos jueces integrantes de la Corte reciben 340.000 pesos mensuales de jubilación. No tributan impuesto a las ganancias. Y así podemos seguir en el orden descendente del Poder Judicial y con los jubilados del Poder Ejecutivo: presidentes, expresidentes, exvicepresidentes.

Y en este sistema tenemos 7.200 beneficiarios que representan 737 millones de pesos mensuales, con un total de 10 mil millones de pesos anuales en este tipo de jubilaciones. Estos son privilegios. Si bien es cierto que son jubilaciones especiales, son privilegios que tiene un sector de los argentinos. Y de esto es de lo que estoy hablando: de la inequidad social que existe en el sistema jubilatorio.

Hay mucho para hablar. Tenemos las doce provincias que transfirieron sus cajas a la Nación, también con jubilaciones altísimas y que representan también un déficit para el sistema.

Entiendo que tenemos un déficit fiscal muy grande, que es generador de inflación en nuestro país y que todos los argentinos estamos dispuestos a combatir, pero, ¿por qué recae sobre los que menos tienen cuando debería recaer sobre los que más cobran, sobre los que más tienen? Estamos retocando jubilaciones para abajo, porque esta fórmula es retocar hacia abajo en aquellos que menos tienen.

Se podría echar mano, como quien dice, al Fondo de Garantía Sustentable. La fórmula actual de movilidad puede recurrir al fondo creado a tal efecto, cuyo crecimiento interanual fue del 14,2 por ciento en dólares a junio de 2017. Y digo “a junio”, señor presidente, porque no se ha cumplido con la comunicación al Senado de las actualizaciones que debe hacer la ANSES.

De esta manera, en vez de estar discutiendo el salario mínimo de 6.000 o 7.000 pesos, quizá podríamos estar discutiendo cómo formamos un piso para, a partir de allí, empezar a aplicar este tipo de reformas al artículo 32 de la ley 24.241, que sea un piso de lo que representa la canasta básica del jubilado, de 17.000 pesos. A partir de allí, sí que podemos empezar a trabajar con este tipo de actualizaciones, pero para eso hay que retocar las jubilaciones, estas especiales, mal llamadas “jubilaciones de privilegio”.

Señor presidente: esto se ha tratado. Ingresó a esta casa el proyecto del Poder Ejecutivo y sin ningún tipo de consenso se firmó el dictamen. Esto no es costumbre del Senado de la Nación, sino que se convoca a todas las personas interesadas, a las entidades intermedias, representativas —en este caso, de los jubilados y de los trabajadores— para hacer un debate necesario, para construir un consenso y ver de qué manera tratar este tema.

No puede ser que el jueves se convoca a las comisiones respectivas —a las que, incluso, yo falté porque acompañé al Poder Ejecutivo a la República de Chile para hablar de asuntos de gobierno, total, después, en las próximas sesiones se va a poder discutir este tema— y, luego, me encuentro con que se había firmado un dictamen sin ninguna participación de aquellos que tienen derecho a la voz, al reclamo, tal cual lo hemos hecho siempre en todas las consideraciones de proyectos de ley que se han venido tratando, convocando a aquellas entidades representativas

o a aquellos que quieren hacer su aporte, que es necesario porque no somos dueños de la verdad.

Por eso, señor presidente, no voy a acompañar este proyecto de reforma previsional, el 939, y sí voy a acompañar el 940 y el 941.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senador. Senador Aguilar, por favor, tiene la palabra.

Sr. Aguilar. — Muchas gracias, señor presidente. Es para referirme brevemente a las tres iniciativas que se están debatiendo.

Primero, me parece bien votarlas por separado porque creo que se pueden y se deben abordar por separado. En particular, hay una que dice mucho sobre el funcionamiento de la economía, que es la ley de responsabilidad fiscal, cuyos lineamientos generales compartimos. Creemos que es necesario que el gasto, tanto nacional como provincial, el gasto primario de las provincias y de la Nación evolucione de acuerdo o con el límite de los índices de inflación y, por lo tanto, se asegure con eso la estabilidad del gasto en términos reales, que a medida que la economía crezca, si lo hace, es lo que va a permitir disminuir en el tiempo la presión impositiva. Esto es lo esencial de esa ley. Es una ley que, en lo central, venía vigente en la Argentina y es una ley con la que compartimos lineamientos fundamentales.

No es así con las otras dos iniciativas: la del pacto fiscal o el pacto de consenso fiscal al que arribaron los gobernadores, prácticamente todos, y la ley de reforma previsional, la ley de reforma jubilatoria.

Sobre la ley de reforma jubilatoria, quisiera estar de acuerdo con lo mismo que dijo usted, señor presidente, cuando opinó respecto de lo siguiente: creo que en la Argentina hay legados comunes, legados que, por más que se hayan originado en un partido, hoy ya son patrimonio de todos los argentinos y que lo aportaron distintos partidos: el radicalismo a algunos de ellos, el justicialismo a otros.

Creo que una de las ideas centrales del peronismo, según la cual hay una sola clase de hombres: los que trabajan, los trabajadores, es una idea que se ha transformado en parte del legado común de los argentinos, esto que decía el general Perón, asumiendo que el hecho de trabajar, el hecho de esforzarse para, a partir

de allí, consumir lo que uno produce, es lo que genera la dignidad que nos es común absolutamente a todos.

Ahora bien, yo creo que los trabajadores lo son siempre. Es decir, son trabajadores mientras están activos y son trabajadores también una vez que están pasivos, porque se han jubilado, pero son esencialmente trabajadores. Y, adicionalmente, son trabajadores también cuando están desocupados, porque muchas veces el funcionamiento de la economía no les permite, justamente, poder trabajar.

Creo que, dado que son trabajadores en todas las circunstancias —estén desocupados, estén activos o estén pasivos, porque ya realizaron su esfuerzo a lo largo de la vida—, deben tener la oportunidad de acceso a los mismos derechos. Me parece que por esto, dado que a gran parte de los trabajadores no les podemos asegurar el 82 por ciento móvil porque tenemos una historia de largo funcionamiento bajo informalidad laboral, por lo menos deberíamos asegurarles la proporcionalidad. Es decir, no les podemos asegurar el 82 por ciento móvil, pero que las jubilaciones y los ingresos de los trabajadores desocupados, esencialmente la asignación por hijo, se muevan en la misma proporción en la que se mueven los salarios de los trabajadores activos. Me parece que este sería un principio de justicia básico para la Argentina. Es decir, cuando los salarios de los trabajadores aumentan, los salarios de los trabajadores pasivos o de los que estén jubilados ahora, que también aumenten en la misma proporción. Y cuando aumenten menos, que también lo hagan en la misma proporción.

No podemos asegurar el 82 por ciento. Sería bueno poder hacerlo para todos, pero no lo podemos hacer. Está claro que no lo podemos hacer y ojalá lo podamos hacer en algún momento; dependerá mucho de tener alta o plena formalidad laboral en la Argentina. Pero la verdad es que yo creo que las jubilaciones y el conjunto de asignaciones sociales que van a trabajadores desocupados deberían evolucionar *pari passu* con el índice de variación de salario. Es decir, no 70 por ciento de inflación y 30 por ciento de salario —30 por ciento RIPTE—, sino ciento por ciento RIPTE. En la proporción en la que aumenten los salarios, aumenten también las jubilaciones y, en particular, las jubilaciones

de los que menos tienen, porque esto asegura siempre, por la lógica de la negociación paritaria, que los salarios le ganen siempre por un poquito en la negociación colectiva o producto de la negociación colectiva a los índices de inflación. Esto es lo que iría asegurando la variación positiva del poder adquisitivo de los trabajadores y también la variación positiva en el poder adquisitivo de los jubilados. O sea, que me parece que ese sería el criterio a defender aquí. Bueno, no es eso lo que prima. De manera tal que por eso creemos que, si hay que modificar la movilidad jubilatoria, debería ser de acuerdo con el salario. Digamos que es lo que muchos legisladores han defendido en esta Cámara y también en Diputados, a lo largo de mucho tiempo.

En cuanto a la Ley de Consenso Fiscal, hay ahí cuatro o cinco puntos. Es una ley muy general, obviamente; son declaraciones muy generales. Pero, como son declaraciones generales, tienen también en muchos casos el carácter de principios ordenadores sobre los cuales se proyecta el país a mediano y largo plazo. Me parece que hay aspectos centrales que no están contemplados y que necesariamente deben estar en nuestro proyecto de país a mediano y largo plazo.

El de la jubilación es uno. A mí me gustaría que ese consenso fiscal dijera: “las jubilaciones van a evolucionar en proporcionalidad a los salarios”. Eso no lo dice, sino que habla únicamente de la inflación. También me parece que hay un aspecto que es central en cuanto al descongelamiento de lo que es el fondo del conurbano de Buenos Aires, que se financia con el impuesto a las ganancias, pero que, sin embargo, una vez que va a Buenos Aires, no se reparte entre los municipios. Me parece que eso fija también un precedente que es muy peligroso para los ingresos municipales de otras provincias a futuro. Es decir, que esto se financia con ganancias y, en definitiva, es coparticipación. Sin embargo, va a una provincia y después no se reparte entre los municipios. Me parece que eso vulnera un principio muy importante en lo municipal.

Hay otro tercer aspecto que es fundamental, que tiene que ver con el modelo de país federal, que en la reforma impositiva que se está discutiendo en la Cámara de Diputados tampoco

se hace y que yo creo que es directamente inadmisibles. No podemos votar más impuestos uniformes en la Argentina. Es inadmisibles que las empresas, las pymes del NEA, del NOA, de las distintas regiones de la Argentina, paguen los mismos impuestos, las mismas tasas impositivas que las empresas del centro del país. Me hubiera gustado que en esta negociación entre los gobernadores y el gobierno nacional se discutiera también un modelo de país federal, lo que quiere decir diferenciaciones impositivas por regiones en la Argentina. No es admisible que regiones que tienen a veces la mitad del PBI per cápita promedio del país, como las de algunas provincias del NEA o el NOA, o también de algunas provincias de la Patagonia, estén trabajando reformas impositivas que fijan el mismo nivel de impuestos para todas.

La Argentina, en el sentido productivo, social y de infraestructura, no es un solo país. Es un país muy distinto y la verdad es que apenas uno se aleja 500 kilómetros de la Capital Federal a veces retrocede 20, 30 o 40 años en términos de condiciones de vida, económicas, sociales y de infraestructura. En consecuencia, no se pueden votar impuestos uniformes en la Argentina. Las provincias que tienen un rezago relativo muy importante, porque el puerto les queda a ochocientos o mil kilómetros, porque la infraestructura es muy deficiente, porque el acceso al crédito es mucho más difícil, porque la calidad de la mano de obra se ha deteriorado mucho más, porque el tejido industrial y el desarrollo de proveedores ha caído muchísimo más a lo largo de las sucesivas crisis de los últimos 40 años, no pueden pagar los mismos impuestos que las grandes empresas del centro del país, que tienen toda la infraestructura cerca. Este principio tampoco está establecido en el consenso fiscal. Lo lamentamos y creemos que hay que rediscutirlo.

Después, otra cosa que está establecida en el pacto y que ya no se viene cumpliendo es la compensación de los déficits previsionales de las provincias que no transfirieron sus cajas. Recuerdo cuando se votó aquí la llamada ley de reparación histórica de las jubilaciones. Cuando lo tratamos en comisión, estuvo aquí el vicejefe de Gabinete, Quintana, y yo le planteé exactamente que hay provincias que no pueden armonizar porque no tienen la voluntad de

hacerlo o porque, en algunos casos, incluso lo tienen en leyes superiores, como la provincia del Chaco. Y que tienen derecho a que la Nación compense parte de sus déficits porque las provincias vienen compensando el déficit de la ANSES al retener la coparticipación.

Está bien, no todo el déficit, porque hay parámetros diferenciales, pero sí el déficit calculado de acuerdo con parámetros diferenciales. Y ya hubo un compromiso del gobierno nacional respecto a que se iban a compensar los déficits; sin embargo, no se cumplió.

Ahora hay otra vez promesas de que eso se va a hacer. Ojalá que efectivamente se cumplan, pero no alcanza con esas promesas; debería haber mecanismos automáticos porque ya las promesas se han incumplido antes. Y así como es justo que la Nación no pague las jubilaciones diferenciales en las provincias que establecen parámetros distintos, sí es justo que pague de acuerdo a los parámetros adaptados al nivel de 65 años o el déficit remanente. Esto es justo. No se viene haciendo para algunas provincias desde hace mucho tiempo y acá hay nuevamente promesas sobre cosas que ya no se han cumplido.

De tal manera que nos gustaría ver reflejados esos criterios en un consenso fiscal entre la Nación y las provincias, es decir, que las jubilaciones evolucionen de acuerdo a los salarios, que cuando vayan fondos por recaudación de impuestos nacionales a una provincia, que esos fondos se tengan que coparticipar sí o sí con los municipios o que haya diferenciaciones impositivas.

Y lo mismo vale para la ley de reforma laboral que se va a tratar en poco tiempo más en esta Cámara. La ley de reforma laboral tiene un capítulo de modificaciones sobre relaciones laborales —la CGT estuvo trabajando sobre eso—, pero después, el capítulo de blanqueo establece la baja de aportes patronales que empiezan en los 2.000 pesos y terminan en los 12.000 pesos.

Lo que se pretende votar otra vez es que le bajemos de la misma manera los aportes patronales a la pyme del Chaco o a la pyme de Santiago del Estero como a la gran empresa del centro del país. ¡No podemos votar ese tipo de cosas! No podemos votar impuestos uniformes entre regiones en la Argentina porque no hay posibilidad de desarrollo productivo ni de inversiones en las regiones rezagadas de la Argentina

si el sistema fiscal es uniforme como lo viene siendo desde hace mucho tiempo.

De tal manera que nos gustaría ver reflejados estos criterios en el consenso fiscal y, como no están, por esas razones y las precedentes, vamos a acompañar la ley de responsabilidad fiscal, pero no el pacto fiscal firmado ni tampoco la ley de reforma previsional o jubilatoria.

Muchas gracias presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias señor senador.

Tiene la palabra el señor senador De Angeli.

Sr. De Angeli. – Señor presidente: sin duda, para los que defendemos el federalismo, estamos ante un hecho histórico, un mojón para las provincias. Venimos de un país donde tenemos una constitución federal, pero donde han reinado gobiernos unitarios. Y tenemos un presidente como Mauricio Macri, un hombre que dice la verdad y que quiere devolverle el federalismo a las provincias. También quiero reconocer a mi gobernador de Entre Ríos, al contador Gustavo Bordet, que estuvo en la audiencia y fue también uno de los que dijo que no se sintió para nada presionado para este consenso fiscal. Una expresión que los del interior hace mucho que no escuchamos: consenso fiscal.

Hoy vemos a las provincias devastadas con una alta carga tributaria, donde los impuestos no van a donde tienen que ir –principalmente a educación, salud, seguridad e infraestructura– y donde hay provincias de dos clases: están los del interior profundo a los que esa masa de coparticipación no les llega, donde hay carencias. Tenemos mucha historia. Y cuando hablamos de consenso fiscal, hablamos de un gobierno nacional como el de Mauricio Macri, de veintitrés gobernadores que quieren llevar el federalismo en serio, que quieren el bienestar de los argentinos, que quieren el arraigo de los argentinos y no lo que ha venido pasando durante muchísimos años. Cuando vemos las ciudades grandes y los conurbanos, están llenos de comprovincianos que se han venido por distintos motivos, principalmente por necesidades han llegado acá.

Por eso, también voy a hacer uso de mis atribuciones para insertar, señor presidente, pero no puedo dejar de hablar del federalismo, de hablar de responsabilidad fiscal, de hablar

de que los impuestos que pagan los ciudadanos vayan donde tienen que ir. Y vuelvo a decir: educación, salud, seguridad, infraestructura.

Ayer, tuvimos el tercer seminario de caminos rurales. Sin duda, cuando hablamos de caminos rurales se habla de la producción. Pero no. Hablamos de que hay dos clases, sin duda, de ciudadanos. Los que no pueden ir a la escuela porque llovió y el maestro no llegó a la escuela. Ese chico vive en el lugar más profundo. Sin duda, con este pacto de responsabilidad fiscal los dineros van a ir a esos lugares donde se necesita. Eso es importantísimo.

Cuando hablábamos de una constitución federal y de gobiernos unitarios, no puedo dejar de pensar en las retenciones, en el impuesto aduanero. Nos criticaron ferozmente cuando se sacaron las retenciones del maíz y del trigo. ¿Sabe cómo se le devolvió a la Argentina? Con más producción. El trigo, el 23 por ciento; el maíz, el 20 por ciento. Y llegó a producirse hasta el 40 por ciento y el 38 por ciento respectivamente.

Por eso es importantísimo bajar la carga impositiva, para que haya más producción, para que haya más trabajo del bueno, para que haya trabajo genuino, trabajo privado, ese trabajo que defendía el senador Pereyra cuando hablaba de la justicia social; que tengan buenos sueldos, que el trabajador esté bien contenido a través de su obra social, sus aportes previsionales y no que tengan que ir por las provincias caras de impuestos, que el intendente tenga que ser el que tiene que darle el trabajo, el Estado.

Ese es el círculo vicioso en el que entramos durante muchísimos años, porque como no hay trabajo privado, hay que ir al trabajo estatal. Y ese trabajo estatal alguien lo paga. Lo pagamos nosotros, los contribuyentes. Y cuando no alcanza y se gasta más –como decía el senador Pinedo–, vamos a la emisión, porque –claro– necesitamos dinero para pagar los gastos. Y eso genera inflación. ¿Quiénes pagan y son los primeros perjudicados? Los más pobres, los más vulnerables son los afectados por la inflación.

Por eso tenemos un presidente que quiere poner, en una Nación con veintitrés gobernadores, un país en orden, un país donde los contribuyentes pongamos nuestros tributos y que se administren bien esos tributos, que se

administren bien los tributos a través de la responsabilidad fiscal con los gobernadores.

La verdad es que la semana pasada, cuando vi pasar a los gobernadores, en el ámbito del Senado, me dije: “Bueno, nuestros hijos, nuestros nietos van hacia un país en serio. Estamos plantando el árbol de la política de la benevolencia. No estamos armando una carpa solamente para la sombra de odio de mañana”. Sin duda va a pasar mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo para resolver el problema.

Sra. Negre de Alonso. – Pido una interrupción.

Sr. De Angeli. – Va a pasar mucho tiempo para resolver el problema. Va a pasar mucho tiempo, pero vamos a un país en serio, donde las provincias van a ser autónomas, donde van a tener autonomía y no van a tener que venir los gobernadores a pedirle al presidente de la Nación de turno auxilio financiero.

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador: la senadora Negre de Alonso le pide una interrupción.

Sr. De Angeli. – No. Después, senadora. Si me permite, puedo terminar, porque me puede cortar la inspiración. Le pido disculpas.

Yo me acuerdo –la historia cuenta–: 1861. Un caudillo, un hombre que antepuso la Nación a las cuestiones sectoriales y privadas: el general Urquiza. Levantó las tropas de Pavón para la unión nacional, para pedir un país en serio. Pasaron muchos años. Idas y venidas, inflaciones, golpes de Estado, gobiernos que no terminaban sus mandatos, todo lo que conocimos y vimos.

Ahora vamos a un país en serio y va a costar, nos va a costar a los argentinos. Pero nuestros hijos y nuestros nietos se van a sentir orgullosos cuando la historia cuente que a partir de un gobierno nacional y con el acuerdo de los gobernadores se logró un acuerdo fiscal para garantizar a los argentinos salir de la pobreza, a la vez que garantizar también la educación, la salud y la equidad.

Y eso se hace con austeridad y humildad: a eso estamos dispuestos. Hay un presidente, Mauricio Macri, que nos lleva por ese camino de austeridad y de humildad. Y hay veintitrés gobernadores que están totalmente de acuerdo en llevar eso adelante en cada una de sus provincias. Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Senadora Nancy González tiene la palabra.

Sra. González (N. S.). – Gracias, señor presidente.

En cuanto a lo que es el pacto y la responsabilidad fiscal, en realidad, voy a pedir la inserción en el Diario de Sesiones de lo que quiero decir al respecto. Lo único que voy a acotar es que me hubiera gustado que el gobierno hiciera una ley de coparticipación federal, como corresponde, y no que estemos con estos parches y estos sobornos y aprietes a los gobernadores. Estas leyes no solamente perjudican a las provincias en sí, sino que también perjudican a los municipios. En mi provincia, por lo menos, cuando el gobernador vino a firmar el pacto o consenso fiscal –como lo quieran llamar– no tuvo ninguna reunión con los intendentes para consultarles si estaban de acuerdo y si estaban dispuestos a soportar algunos perjuicios que estos pactos implican en los municipios.

El senador preopinante nos hablaba de un país federal o decía que iban a pasar a la historia por lograr un país federal. La verdad es que van a pasar a la historia por otras cosas. También hablaba de austeridad y de humildad para poder gobernar. Yo diría que para las leyes que hoy quieren sacar, realmente ustedes van a pasar a la historia por bajarles otra vez el sueldo a los jubilados y por afectar otra vez a las clases más vulnerables.

Sí me voy a referir, y lo voy a hacer haciendo un poquito de historia, porque por ahí no recordamos lo que nos ha pasado con nuestros jubilados a lo largo de la historia, a la reforma previsional que, realmente, afecta a los más vulnerables, que son, justamente, nuestros jubilados.

Por ahí también escuché a otro senador, que habló con anterioridad, que decía que había que equilibrar el déficit fiscal. Pues bien, si quieren equilibrar el déficit fiscal a costa de nuestros jubilados debo decir que, lamentablemente, muy poca imaginación tiene este gobierno o muy poco compromiso con nuestros abuelos. Lo podrían equilibrar no sacando el impuesto a la soja, no sacando el impuesto a las mineras. No sacando tantos impuestos que les sacaron a los más pudientes podrían equilibrar el pacto

fiscal y no poner otra vez a los jubilados como rehenes.

Y, haciendo un poquito de historia, les voy a contar que entre 1991 y 2002 nuestros jubilados sufrieron el congelamiento de sus jubilaciones, que cobraban 150 pesos. ¿Por qué cobraban 150 pesos? Porque el gobierno de la Alianza, señor presidente, les había hecho la quita del 13 por ciento a nuestros jubilados. Cuando asume la presidencia Néstor Kirchner, lo primero que hizo fue un decreto que les aumentaba las jubilaciones a nuestros abuelos en un 46 por ciento; pasa de 150 pesos a 220 pesos.

Desde el año 2003 al año 2008 se hicieron catorce decretos. Esos catorce decretos no eran para nombrar jueces, esos catorce decretos eran para aumentarles a los jubilados.

En 2008 se sancionó la ley 27.417, de movilidad jubilatoria, que voté siendo diputada, y, realmente, era una de esas leyes que vos votabas y se te inflaba el corazón al hacerlo, no porque les bajábamos el sueldo a los jubilados, sino porque les dábamos beneficios...

—Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). — Disculpe, senadora.

Señores senadores: les pido que hagan silencio, por favor.

Sra. González (N. S.). — Señores senadores: estoy hablando. (*Risas.*)

Sr. Mayans. — Perdón, señora senadora. Tiene razón.

Sra. González (N. S.). — No, por favor.

Esa ley de movilidad jubilatoria —repito— brindaba dos beneficios a nuestros abuelos; dos aumentos: en mayo y en septiembre.

Les cuento a todos que entre 2003 y 2015 la jubilación mínima aumentó el 2.766 por ciento. Las jubilaciones le ganaban a la inflación. En 2016, las jubilaciones perdieron un 10 por ciento del poder o nivel adquisitivo.

Gracias a la moratoria, en nuestro país hubo 3 millones de jubilados nuevos. La ley de reparación histórica que se votó —que algunos votaron— en este Senado sacó la moratoria y la reemplazó por la pensión universal para adultos mayores, por la cual les dan el 80 por ciento de la mínima y por la cual las mujeres, en vez de

jubilarse a los 60 años, se tienen que jubilar a los 65.

Sr. Mayans. — Próximamente será a los 80.

Sra. González (N. S.). — En la ley de movilidad jubilatoria que votaron acá, senador. De esa estoy hablando y por la cual se tienen que jubilar a los 65 años las mujeres.

Hoy, gracias a la ley de movilidad jubilatoria que votamos en 2008, la mínima es de 7.246. ¿Saben cuánto estarían cobrando los jubilados hoy de mínima si se hubiera aplicado la ley que el Ejecutivo mandó para que votemos hoy? Cobrarían 5.576 pesos. Y cobrando eso siempre hubo sustentabilidad del sistema; el sistema nunca se cayó.

¿Y saben por qué se pudo hacer esto? No se crean que fue magia lo que se hizo con los jubilados. No, no fue magia; fue decisión política. Fue decisión política que se basó en tres ejes fundamentales: en el recupero de las AFJP, en el aumento del empleo registrado —de 2003 a 2015 se crearon 3 millones de puestos de trabajo nuevos— y en la mejora de la recaudación de aportes y contribuciones patronales.

¿Qué busca el proyecto en análisis? ¿Se lo preguntaron? Destruir todo lo que se logró hasta ahora. Destruirles a los jubilados todo lo que se logró hasta ahora.

Les voy a mostrar un cuadro —creo que todos lo deben haber visto—, porque también lo que tenemos últimamente son los rimbombantes títulos de los diarios y cuando se cambió la fórmula que originalmente había remitido el Poder Ejecutivo querían hacerle creer a la gente que se había hecho un cambio sustancial. Pero no fue así. Solamente fueron 43 pesos de diferencia, un importe que no sirve para comprar la tirita de Bayaspirina que los abuelos deben tomar todos los días.

Con lo que tratan de aprobar hoy, los jubilados van a cobrar una mínima de 7.660 pesos. Si hubiese seguido con la movilidad como es hasta ahora ganarían 8.200 pesos de mínima.

¿Saben qué me preocupa del actual proyecto? Que es un caballito de Troya. ¿Y para qué? Para desfinanciar a la ANSES y volver a las AFJP, que es a lo que aspira el actual gobierno.

Otra de las grandes mentiras que le quieren mostrar a la gente tiene que ver con el 82 por ciento móvil. El 82 por ciento móvil es para un

universo muy chiquito de jubilados. Es para 600 mil jubilados que cobran la mínima, sobre 7 millones de jubilados. El 82 por ciento móvil no lo van a poder cobrar aquellos que se jubilaron por moratoria.

Entonces, no le mintamos más a la gente. Ya en su oportunidad algunos no votaron el 82 por ciento móvil, porque sabían que el sistema no era sustentable. Dejémonos de titulares en los diarios y díganles la verdad a la gente y a los jubilados, que son los que van a sufrir todo esto.

Por último, les leeré algo –permítanme que lo haga– que dijo Néstor Kirchner a Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo y pretendía bajarle el sueldo a los jubilados, cosa que efectivamente hicieron.

Néstor Kirchner decía en ese momento: “Colocar como variable de ajuste del gasto del Estado a los jubilados me parece un acto de injusticia soberana, una falta de creatividad, de decisión y de imaginación que la clase política argentina no se puede permitir”.

Y realmente creo que como políticos y por el mandato que nos dio la gente, no podemos permitir que se baje el sueldo a los jubilados. Pero acá, como no hay creatividad, ni imaginación, ni decisión, le van a bajar el sueldo a los jubilados porque este gobierno viene por los que menos tienen y por las clases más vulnerables.

Es por ello que nunca votaría afirmativamente un proyecto que le baje el sueldo a nadie; ni a los jubilados ni a los trabajadores.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Ruego a los señores senadores que se ajusten a los diez minutos.

Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.

Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: he escuchado hoy hablar de que estamos atacando a los jubilados. He escuchado hoy decir que no tenemos imaginación. He escuchado hoy decir tantas cosas.

Mire, presidente, vamos decir las cosas como son: 1.158.116 jubilados van ya teniendo su reparación histórica y 457 mil salieron ya de cobrar la mínima. El porcentaje promedio que han tenido de aumento en sus haberes ha sido de un 35 por ciento. Además, hay 389 mil abuelos de más de 80 años que han tenido todavía mayor promedio de aumento en sus haberes.

Entonces, ¿de qué estamos hablando, señor presidente? La verdad es que, lejos de aprietes, parches y cosas, como se han calificado aquí, hoy yo de lo que quiero hablarle, presidente, es de consenso. De eso quiero hablar.

Sabemos que el desafío de los grandes consensos es lograr las coincidencias en contextos que son de diversidad. Que a veces, cuando uno arranca la búsqueda del consenso, lo que encuentra son caminos que parecen irreconciliables. ¡Y vaya que la historia nos ha demostrado, a lo largo de todo el mundo, cómo se ha avanzado en la humanidad cuando se han encontrado puntos de consenso en las cosas que parecían irreconciliables!

Para poner algún ejemplo enorme, voy a hablar del *apartheid*, de Mandela, de los acuerdos de paz de todo el mundo, del último de aquí, de Cartagena, también de la Moncloa y del que hoy estamos tratando acá.

Hoy venimos a ratificar un consenso alcanzado. Por eso, no puedo tolerar que nos digan que hemos tenido un trámite exprés o que no se ha escuchado a nadie. Hemos tenido aquí a tres ministros, a quien está al frente de la ANSES y a los gobernadores. Y lo que estamos haciendo es ratificando su consenso.

Y cuando yo ratifico un consenso, ratifico el consenso en pleno, porque siempre en un consenso hay cosas que uno cede y cosas que uno toma. Por eso, es fácil hoy decir “yo ratifico el consenso, pero tal cosa no la ratifico”. Cuando ratifico el consenso, ahí también está incluido el tema de la movilidad jubilatoria. Por eso, los llamo a los senadores que dicen “ratifico una cosa sí, pero la otra no” a que tomen en cuenta lo que están diciendo.

En la Argentina, señor presidente, ya hemos aprendido que nada se logra solo. Nada se logra cuando cada uno quiere jugar al Antón Pirulero y cree que atendiendo a su juego y cerrando la frontera de su provincia va a salir adelante. Somos una única y gran Nación, señor presidente, y hasta que eso no lo entendamos todos, no vamos a poder alcanzar lo que deseamos, que es bajar definitivamente la pobreza.

Quiero recalcar también la vocación de encontrar estos consensos fundamentales de casi todas las provincias argentinas, porque

veintitrés sobre veinticuatro han encontrado estos acuerdos.

Borges decía que los seres humanos tenemos la incapacidad de predecir el futuro y que, por lo tanto, lo que hacemos en el futuro es concebirlo como una prolongación de nuestro presente. Pero sabe, señor presidente, muchos se sobreponen a esto. Imaginan el futuro que quieren, un futuro mejor, y se juegan la vida para conseguirlo y para inducirlo.

Así, hace más de doscientos años, en los albores de la Revolución de Mayo, ya se veían dos tipos de políticos claros: unos que eran pasivos, indiferentes, centralistas y otros que estaban organizando el futuro. Los primeros creían, por ejemplo, que Belgrano tenía que venirse a Córdoba, replegarse en Córdoba, y que San Martín tenía que abandonar la idea de irse al Perú. Pero estos dos eran constructores de futuro y, gracias a ellos, nos legaron la patria que hoy tenemos.

Hoy, con un universo enorme de diferencia con aquellos prohombres –no intento, ni siquiera, ponerme cerca–, lo que estamos haciendo acá nosotros es tener también las mismas ganas de hacer lo que hay que hacer para mirar el futuro. De hacer lo que hay que hacer para alcanzar los acuerdos necesarios que saquen de la postración al 30 por ciento de los argentinos que aún esperan que cada uno de nosotros lo hagamos. Es lograr tener el desarrollo económico, social, institucional. Y para eso sirven los consensos.

La democracia sin duda se basa en disensos y consensos, pero son los puntos de consenso con los cuales a lo largo de la historia del país hemos dado los pasos adelante que nos han permitido realmente avanzar; esos pasos de consenso que nos den sustentabilidad pública, que atraigan inversiones, que nos den seguridad jurídica, que nos den competencia y una salida definitiva de la pobreza.

Por eso los gobernadores han tenido calificaciones de las mejores con este acuerdo. Por eso es que me rebelo cuando escucho por ahí que se habla de apriete. Alguno de ellos calificó a este consenso como el consenso de la responsabilidad. Otro dijo que era el consenso de la sensatez. Otro que era un acuerdo de sentido común. Otro que era un acuerdo que permitía romper laberintos fiscales. Finalmente uno dijo que era un acuerdo de futuro. Ahí me quedo.

Esta Argentina de la grieta, esta Argentina de las heridas abiertas, esta Argentina de los grandes desafíos necesita o requiere de todos nosotros que hagamos dos aportes: el primero es la creación de consensos sólidos y, el segundo, el respeto por las instituciones, pero no solo para curar las heridas que tenemos, sino, fundamentalmente, para construir un futuro mejor y que de una vez por todas dejemos de ser uno y seamos todos juntos.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la senadora Odarda.

Sra. Odarda. – Adelanto el voto negativo al paquete de reforma de los tres proyectos que están en tratamiento porque, en primer lugar, los considero absolutamente regresivos en materia de reconocimiento de derechos constitucionales y, también, por supuesto, perjudiciales para millones de trabajadores pasivos y activos; hablo de los jubilados y de los trabajadores que hoy están en actividad.

Soy autora, señor presidente, de uno de los tantos proyectos que se han presentado en este Senado de la Nación respecto a garantizar a los jubilados, a nuestros abuelos, el 82 por ciento móvil. Desde que soy senadora jamás pudimos tratarlos. Soy autora de proyectos de ley relacionados con la baja de la edad jubilatoria docente, con la baja de la edad jubilatoria de los trabajadores de la salud, con la baja de la edad jubilatoria de los trabajadores del empaque, de nuestras trabajadoras en general del empaque, porque la mayoría son mujeres. Por lo tanto, todos nuestros proyectos van en sintonía absolutamente contraria al proyecto que hoy estamos tratando.

Considero también que este paquete de reforma debió ser tratado en conjunto con otros proyectos que seguramente vamos a tratar en los próximos días, como los proyectos de reforma laboral y de reforma tributaria, porque todos tienen que ver con todos. Como decía al principio, significan un cercenamiento de derechos de nuestros trabajadores, de nuestros abuelos, de conquistas que han logrado en años de lucha.

Este “ahorro”, entre comillas, que se va a hacer en realidad es el dinero que les corresponde a nuestros jubilados por años dedicados al crecimiento y sostenimiento de nuestro país.

Por eso, cuando se habla de que esta resolución respecto del fondo del conurbano es una gran noticia, me pregunto si realmente lo es. Lo digo con autoridad porque fui una de las primeras que me presenté en la Corte Suprema de Justicia para pedir que se frene una sentencia que para nuestra provincia iba a implicar un perjuicio de aproximadamente 1.800 millones anuales, que equivalen a la mitad del presupuesto de salud. Y realmente iba a ser un gran costo para la provincia. Pero, ¿qué me encuentro? Que en este proyecto que estamos tratando hablamos de que justamente el fondo del conurbano se va a resolver gracias a nuestros abuelos. Por lo tanto ese ahorro de 97 o 100 millones de pesos que se prevé va a ir prácticamente en su totalidad —o en gran parte— a manos de la provincia de Buenos Aires y eso atenta, por supuesto, contra el federalismo y las provincias argentinas.

También nos encontramos con que este acuerdo de consenso implica renunciar a las causas judiciales.

En el caso de la provincia de Río Negro, son dos causas judiciales presentadas en el año 2015. Causas judiciales que son absolutamente legítimas. Porque cuando se habla de la devolución del 15 por ciento, que creemos correcta, lo que se está haciendo en realidad, más que devolución, es la retracción de ese 15 por ciento que las provincias, en forma ilegal, debían pagar a la Nación, sobre todo para sostener el régimen de las AFJP. Eso comienza a reducirse en forma gradual, pero nadie habla de los diez años de retroactivo que les deben a las provincias; ese 15 por ciento que, sí, las provincias que fueron a juicio lo reclaman, pero a las provincias que no fuimos a juicio, que no fuimos a la Corte, como en el caso de nosotros, les deben una cifra no inferior a los 5.415 millones de pesos, más intereses.

Eso equivaldría, de acuerdo incluso a la respuesta del propio jefe de Gabinete, a diez años de retroactivo de ese 15 por ciento que nos dedujeron de nuestra coparticipación en forma ilegal, de acuerdo a la sentencia de la Corte, durante diez años.

Si prosperara uno de los tantos proyectos que también se encuentran en la Comisión de Coparticipación Federal y en el que lamentablemente no hemos podido avanzar, quizá hubiéramos podido compensar esa acreencia que tiene Río

Negro con la Nación por estos diez años de retroactivo con la deuda que tiene Río Negro con la Nación y así, por supuesto, esa espada de Damocles que existe en la cabeza de todos los gobernadores o del pueblo de cada provincia por la deuda con la Nación, quizá se vería aliviada.

Sin embargo, esto no ocurre; los gobernadores firmaron la renuncia a esas causas judiciales anteriores y las que van a venir, respecto a la coparticipación, y eso entiendo que es muy grave, sobre todo para el pueblo de las provincias. Porque cuando se habla de que el proyecto para ratificar el pacto fiscal, por ejemplo, es un proyecto importante para la provincia, recordemos que las provincias no son entelequias, no son una cáscara vacía. En las provincias vive gente, en las provincias viven nuestros abuelos, los jubilados, a los que ahora lamentablemente vamos a perjudicar con esta ley que vamos a votar en minutos más.

Esta reforma también perjudica la autonomía y el federalismo, porque toca impuestos provinciales que son el corazón de los impuestos genuinos que tiene cada provincia. Por ejemplo, el impuesto a los ingresos brutos. En algunas provincias quizás el impacto es menor; en nuestra provincia, el impuesto a los ingresos brutos es casi el 80 por ciento de la recaudación propia.

También, de acuerdo a muchas declaraciones que hemos leído en estos días, esto abre la puerta para modificar regímenes especiales, que no son jubilaciones de privilegio.

Se ha hablado, por ejemplo, de que la jubilación docente es un salario de privilegio. Yo lo niego absolutamente.

Se ha hablado de regímenes especiales, como tienen los trabajadores judiciales u otros por la insalubridad del medio de trabajo donde han tenido que prestar servicios o de logros, como el caso de la jubilación docente después de años de lucha. Esas no son jubilaciones de privilegio, son regímenes especiales. Y creo que este tipo de leyes puede derivar en modificar esos regímenes especiales como también, por ejemplo, el plus por zona austral o zona desfavorable que con tantos años de reclamos hemos logrado los trabajadores y los jubilados de la Patagonia.

Otro reclamo que siempre hago en esta banca es por los jubilados de la Policía de Río Negro, quienes tampoco cobran el plus de zona austral.

Esa es una discriminación que hay que remediar de alguna manera, pero hasta ahora no encontramos la voluntad política para reivindicar a estas miles de familias rionegrinas que la padecen.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su horario, señora senadora.

Sra. Odarda. – Bien.

Pero sí, señor presidente, déjeme decir que vivimos en una Argentina que todavía garantiza privilegios que son inadmisibles. Quitamos a los jubilados por un lado, pero por el otro regalamos a las mineras, con la eliminación de las retenciones, más de 200 millones de dólares. Y sin embargo quitamos el subsidio en la luz y en el gas, por ejemplo, a nuestros fruticultores, a nuestros productores pequeños y medianos, a los usuarios, a las empresas que dan trabajo, a las pymes.

Quiero decir también que, cuando hablamos de los 70 años de edad jubilatoria, estamos hablando de una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Y nosotros ya vivimos la década de los noventa. Creo que todos la hemos padecido: despidos, pobreza, cierre de ramales ferroviarios, extranjerización de la tierra, privatizaciones, entrega del patrimonio público a sectores privados. Y no queremos de ninguna manera volver a eso.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señora senadora.

Sra. Odarda. – Por eso, para finalizar, quiero decir que nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, están pasándola muy mal porque más de 3 millones de ellos cobran esos 7.600 pesos que, como todos sabemos, ni siquiera responden a la canasta básica de alimentos y, menos, a la de los jubilados.

Por ejemplo, los medicamentos han aumentado el 170 por ciento. Y el 82 por ciento es solamente para aquellos que cobran el haber mínimo, para lo cual –hay que decirlo con todas las letras– deben cumplir con 30 años de servicio y 30 años de aportes.

Sr. Presidente (Pinedo). – Señora senadora: se pasó de su tiempo.

Sra. Odarda. – Sí.

Por eso quiero finalizar solamente diciendo que, si vamos a seguir profundizando este tipo de proyectos respecto de nuestro sistema previsional, temo que estemos conduciéndonos a

un nuevo sistema de AFJP que tanto daño ha hecho a la Argentina y a la destrucción de la jubilación pública.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la señora senadora Labado.

Sra. Labado. – Buenas tardes, señor presidente.

Voy a explayarme respecto del orden del día 939. No voy a manifestarme respecto del tema de responsabilidad fiscal y del consenso fiscal. Creo que la gobernadora de nuestra provincia, con la responsabilidad que tiene de conducir los destinos de la provincia de Santa Cruz, ha firmado el consenso fiscal. Es exclusiva responsabilidad de ella su aplicación, así que no voy a referir a eso.

Me voy a referir –creo que es competencia exclusiva de los senadores– a la ley de reforma previsional.

Claramente, lo que se está haciendo –y ya lo han manifestado algunos senadores– es modificar la ley de movilidad; una ley de movilidad que le había dado, por varios años, sustentabilidad no solo al sistema, sino también garantías a los jubilados. Hoy, con esta fórmula que se quiere aplicar –modificada–, lisa y llanamente los jubilados, sumen como sumen, hagan la cuenta que hagan, van a percibir menos en sus haberes.

También quiero manifestar que debemos tener algunos conceptos claros, porque cuando se anunció esta reforma y estos paquetes de leyes que llegaron tanto al Senado como a la Cámara de Diputados se dijeron algunas cosas, como, por ejemplo, que había trabajadores que no habían aportado. En realidad, no hay trabajadores que no aportaron: hay patrones que no aportaron. Esa es la verdadera palabra. Acá hay empleadores que no aportaron. No fueron los trabajadores los que no aportaron. Fueron los empleadores.

Después, también se ha dicho que se van a dejar sin efecto las jubilaciones de privilegio y, en realidad, no hay jubilaciones de privilegio, sino jubilaciones diferenciadas.

Hay una gran diferencia entre aquellas jubilaciones de privilegio y las diferenciadas, que se relacionan con la actividad que cada uno de los trabajadores desarrolla y conforme a los

convenios colectivos de trabajo que cada uno ha conseguido con esfuerzo, con sacrificio, con lucha y, también, con decisión política de algunos gobiernos, específicamente de los gobiernos nacionales y populares.

Esta fórmula que se quiere aplicar o este régimen que hoy se quiere llevar adelante tiene también, creo, algunas..., no fallas, pero sí algunas cosas que no están siendo contempladas. Por ejemplo, existe un fallo de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social que le da rango de jubilación a aquellos jubilados –digamos así– que en la época de las AFJP quedaron incluidos en lo que se denominaron “rentas vitalicias”. Hay ciento veinte personas jubiladas con esas rentas vitalicias, que también quiero aclarar que no son de privilegio, pues la renta vitalicia significa “hasta que dure la vida”. Por lo tanto, estas personas, por lo que les queda de vida, continuarán percibiendo un haber, que es mínimo, que en algunos casos no supera ni llega al 50 por ciento del haber mínimo vital y móvil. Las rentas vitalicias no están siendo contempladas en este proyecto y hay un fallo de la Corte que les da el rango para que sean incorporadas al sistema.

Otra de las cuestiones que me gustaría manifestar acá es el aumento de la edad jubilatoria, que ya se había aumentado en la mal llamada “reparación histórica” –para mí, mal llamada “reparación histórica”–, porque hoy nos encontramos, nuevamente, con otro aumento de la edad y, también, con la posibilidad de opción del trabajador, es decir: si se quiere jubilar o no.

La verdad es que cuando yo juré como senadora lo hice conforme a las convicciones que he tenido durante toda la vida, las convicciones con las que me formé políticamente, que tienen que ver con la formación política que nos legaron Perón y Evita, y en virtud de eso, creo que me es imposible hoy poder acompañar proyectos que tiendan a bajarle el sueldo a los trabajadores y a los jubilados.

La verdad es que hoy es mi última sesión y hubiera querido estar votando leyes que sigan generando derechos, que sigan beneficiando al pueblo argentino y no tener que estar hoy tratando de defender o de que algunos senadores –que tienen, tal vez, el mismo ADN político que el mío– entiendan que estamos bajándoles el sueldo a los jubilados.

En esa plaza, ahí enfrente, hoy hay miles, miles de Norma Plá nuevamente. No pensaba volver a verlos. Lamentablemente, hoy, Norma Plá está nuevamente en la plaza.

Creo que esas son cuestiones en las que nosotros tenemos que pensar que hemos retrocedido. Y hemos retrocedido en estas cuestiones de la marginación, de que cada vez nuestros ancianos, las personas más vulnerables, están cada vez peor. No se está concretando acá el hambre cero. No se está concretando acá lo que se dijo en algún momento y que se viene diciendo permanentemente en este gobierno de la generación del empleo. Todo es para generar empleo. Todo es para mejorar la recaudación. Todo es para achicar el gasto. Todo es para vender un discurso que, en la práctica, a la gente no le sirve. La gente está cada vez peor. La gente no tiene para comer. La gente no tiene para comprar alimentos, no tiene para comprar remedios.

Los que caminamos la calle sabemos perfectamente que esa es la situación hoy de muchos argentinos. Yo ya, alguna vez, se los he dicho: ustedes tienen como gobierno una responsabilidad histórica de hacer las cosas mejor de las que las hizo nuestro gobierno. Pero, obviamente, creo que no va a ser así y la gente, tal vez, también lo haga sentir en algún momento, y apelamos a la memoria de la gente para, en el futuro, cambiar esta situación.

Permítame, señor presidente, también, como dije hace un momento, esta es mi última sesión ordinaria y no quiero dejar de agradecer; agradecer al personal de la casa, desde el personal de seguridad al de maestranza, todos, todos, no quiero nombrar a uno porque sería injusto no nombrarlos a todos. Así que mi agradecimiento a todos los que han colaborado para que nuestra gestión se haya realizado conforme –vuelvo a reiterar– a las convicciones con las que hemos jurado hace seis años. A ustedes, a mis pares, más allá de las diferencias políticas, el respeto con el que nos hemos tratado, la deferencia con la que nos hemos tratado. A mis compañeras y compañeros agradecerles infinitamente lo que hemos podido concretar, muchas veces, también con algunas diferencias internas, pero con el afecto de siempre. Agradecida. Nada más, señor presidente. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Muchas gracias a usted, señora senadora.

Senador Ruperto Godoy.

Sr. Godoy. – Gracias, señor presidente.

La verdad es que vamos a abordar estos tres temas que son más que importantes. Obviamente, está el consenso fiscal, como bien se ha dicho, que fue firmado por los gobernadores, y el tema de la reforma jubilatoria, la reforma previsional y la responsabilidad fiscal.

Lo escuché a usted en su exposición y la verdad es que uno puede acordar en algunas cuestiones, porque nadie desconoce y pretende que en cada una de nuestras provincias podamos lograr la solvencia fiscal, podamos lograr los equilibrios desde el punto de vista financiero.

Debo decirles que en nuestra provincia, San Juan, tenemos equilibrio financiero y hemos logrado una solvencia fiscal importante. Pero me parece que cuando se planteó el pacto fiscal quizá hubo un sesgo unitario, como que algo se les quería imponer al resto de las provincias, pensando que en las provincias no hay voluntad, no hay decisión, no hay innovación para poder ir mejorando las situaciones y que eso se traduzca en un progreso y en una mejor calidad de vida para cada uno de los ciudadanos de nuestras provincias.

Me parece que tienen una visión que se asemeja mucho, que es muy parecida, a la que había cuando se firmaban reiterados pactos fiscales. Todo lo que hoy se hace no es nuevo, no es novedoso. Ya hemos visto, ya hemos sido testigos de los pactos fiscales que en distintos momentos –no muy lejanos– se firmaron. Pero son pactos fiscales que tienen que ver con esta mirada de ajustar, de achicar gastos, y no se dan cuenta de que este es un país que no es armónico, que no está equilibrado, de que hay diferencias entre nuestras provincias y regiones. En el caso nuestro, somos parte de provincias que han estado postergadas, que recién después de doce años lograron recuperarse, progresar, mejorar la infraestructura social y también la infraestructura productiva.

Pero eso tiene que ver, fundamentalmente, con una presencia del Estado. Si no hay un Estado presente que tenga herramientas, es imposible que nuestras provincias pobres, nuestras provincias postergadas, puedan lograr

niveles altos de desarrollo, de crecimiento, y que puedan mejorar la calidad de vida de su gente.

Entonces, no es la lógica exclusivamente del mercado, no es la lógica del eficientismo la que nos permitirá nuestro crecimiento. Y no se deberían manejar estas variables que se establecen en los pactos fiscales: las del ajuste, las del achique, las de decir que hay que bajarles el sueldo a los empleados públicos. No. Me parece que la lógica y las variables deben ser otras: cómo nosotros promovemos el crecimiento, cómo tenemos en cuenta las necesidades básicas insatisfechas, cuáles son los déficits que tenemos en infraestructura social.

Entonces, es cierto que lo han apoyado los gobernadores, obviamente, en un contexto complejo, en un contexto delicado. Pero lo que nos preocupa a nosotros, si uno ve el contexto de la reforma, es en qué marco se da. Por ende, uno se tiene que remontar a cuando asumió este gobierno, que ya lleva dos años. En cuanto al marco, al contexto –porque lo hemos vivido, porque hemos sido testigos aquí de las distintas iniciativas, leyes y decretos que impulsó este gobierno–, vemos que hay una profunda transferencia, en todas las acciones, de recursos de los sectores populares a los sectores más concentrados de la economía. Todas las acciones están direccionadas en ese sentido.

Obviamente, debo decir que se remiten a las recomendaciones de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Esto no es, como puede decirse: “¡Uy, el discurso progresista que apela al Fondo!”, no. Lo digo con datos objetivos: el comunicado del Fondo Monetario Internacional dice claramente qué es lo que tiene que hacer la Argentina en este tiempo. ¿Por qué lo tiene que hacer? Por el nivel alto de endeudamiento que tiene la Argentina. Y, obviamente, comienza a haber preocupación por parte de los sectores acreedores, pues los sectores acreedores quieren cobrar sus acreencias. Y, a partir de cobrar sus acreencias, comienzan a exigir y a condicionar las políticas y las herramientas económicas que tiene un país. Entonces, ¿qué sucede? Se pierde autonomía y se pierde independencia.

Entonces, uno ve claramente estos dos contrastes que hay: una decisión, por un lado, para favorecer a los grupos concentrados, para garantizarles mayor rentabilidad, para garan-

tizarles mayores ganancias y, por el otro lado, los sectores postergados de siempre, a los que se perjudica. ¿Con qué? Bajando el salario y, en este caso, perjudicando ostensiblemente al sector de los jubilados.

Acá hay una decisión que tiene que ver con el sentido de las políticas de este gobierno. Y esta decisión –que es avanzar en los verdaderos objetivos– es una distribución inequitativa del ingreso. ¿A los fines de qué? De generar mayores ganancias al sector empresario y mayor rentabilidad. ¿A costa de qué? De menores salarios y menores ingresos por parte de los jubilados.

La verdad es que conocemos la historia. Porque bien lo escuchaba, senador Pinedo: usted habla de que toda esta baja en la presión impositiva –que no es la más alta del mundo, hay otros países aún más desarrollados que nosotros que tienen presión impositiva más alta– va a generar más inversión y esta inversión va a generar más trabajo; esta inversión va a generar más empleo y mejor calidad de empleo. ¿Quiere que le diga una cosa? ¡Esto queda exclusivamente en la teoría, porque las experiencias empíricas que hemos tenido nos dicen lo contrario!

¡Ya lo vivimos en la década del 90! Hicimos casi lo mismo que estamos haciendo ahora, con pactos fiscales y con disminución de los haberes de los jubilados. ¡Se les bajó el 13 por ciento a los jubilados porque había que achicar el sistema! ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue más desocupación, menos empleo, y más pobreza e indigencia en la Argentina. Entonces, no es cierto que esta teoría que esbozan se pueda aplicar a la realidad y que dé resultados que favorezcan y generen el progreso de la mayoría de los argentinos. ¡No es verdad!

Y tenemos este tema de la reforma previsional. ¡Sí! Se ha tratado en forma exprés. ¡Sí, se ha tratado! Porque con una reunión no basta. Con escuchar a los ministros, que vienen con definiciones políticas claras, no basta. No basta para que hayamos abordado de esta manera tan rápida y tan sencilla el tema previsional, un tema muy caro para los argentinos porque los jubilados han vivido por mucho tiempo postergados, sin posibilidades de progresar, sin posibilidades de mejorar su calidad de vida. Entonces, se trató de manera exprés. ¡No vinieron los especialistas! Y ahí vemos que los jubilados no tienen representación corporativa, no tienen gremios

que los defiendan. ¿Quién los tiene que defender y proteger? ¡El Estado! Y hoy el Estado está ausente. Entonces, hay que apelar a diputados y senadores para que, sentados en sus bancas, puedan defender el interés de los jubilados, que es un sector muy desprotegido.

¡Entonces, me parece que esto de cambiar la fórmula es, en definitiva, bajar el ingreso de los jubilados porque necesitan, como han dicho los funcionarios, hacer un ahorro de 100 mil millones de pesos! Y en vez de hacerles pagar el sacrificio y el esfuerzo a los que están en la timba financiera, a los que están en la especulación financiera, a los que endeudan el país para garantizar la fuga de capitales, ¿a quién le generamos el costo? ¡A los pobres jubilados! ¡A los pobres jubilados que no tienen quién los defiendan porque el Estado no está presente!

Entonces, le quiero decir que por mi parte voy a votar en contra de la reforma previsional. Y este no solo es un mandato que tenemos como legisladores, sino también es un mandato moral, un compromiso moral con este sector que está desprotegido. ¡Porque no puede ser este contraste que tenemos en la Argentina, donde los trabajadores tengan que estar en la calle reclamando para que no les recorten derechos, para que no les quiten derechos, mientras en la city se juegan las LEBAC al 28 o 29 por ciento! ¡Seguimos endeudando el país!

¡Entonces, estos son los dos países donde no puede haber conciliación, donde no puede haber consenso porque los intereses son distintos del interés nuestro, como partido histórico! ¡Por nuestras raíces, por Perón, por Evita, por Néstor y Cristina, nuestro interés es defender a los que menos tienen! ¡Por eso hoy vamos a votar en contra de la reforma previsional!

Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. – Señor presidente: bueno, escuchamos discursos... Vamos a extrañar a algunos senadores.

Hay un contraste, porque lo que estamos por votar acá es un consenso de veintitrés gobernadores con el gobierno nacional. De hecho, entre lo que se expresó y lo que se expresa hay

un contraste acá mismo con lo que ocurre, es decir, cada uno interpreta el país como quiere.

Nuestra gobernadora de Catamarca ha firmado. El ministro de Economía de la provincia ha explicitado, en días pasados, en qué beneficia y en qué compromete a la provincia de Catamarca. En la mañana de ayer, la gobernadora y los ministros han tenido una reunión con todos los intendentes y, a partir de allí, la explicación de esto.

Esta firma implica los tres temas. Así que quiero adelantar que voy a votar en forma positiva en estos tres temas, y los legisladores de Catamarca, en este aspecto.

Hemos escuchado a los gobernadores. Acá se hacía referencia a dos o tres palabras que salieron de esa reunión. Una era la palabra “sensatez”, la otra era la palabra “responsabilidad” y la otra, por cierto, la palabra “consenso”. Y, frente a alguna anomalía, quedó muy claro que no se trataba la palabra consenso como adhesión, sino la palabra consenso en todo el sentido y aún en letra fina.

Uno se anima a decir esto porque, de aquel convenio que sale del Ejecutivo al que hoy realmente estamos por votar, no hay ningún artículo que no haya sido modificado. O sea, “consenso” como una cuestión activa, de interacción, de: “Te escucho y veo en qué manera puedo modificar”. Esto me parece que hay que rescatarlo, hay que rescatarlo de un modo –diría– hasta histórico, porque a los argentinos, por lo que acá vemos también, nos cuesta mucho lograr consenso, nos cuesta mucho interactuar, nos cuesta mucho escucharnos y entender que el otro, aunque piense distinto, también algo de verdad debe tener.

Yo no voy a entrar en la letra fina de acá, pero no porque crea que no sea importante –creo que ya muchos se han referido–, sino que me parece, casualmente, por lo que escuché recién, que esto hay que contextualizarlo. Hay que contextualizar en qué situación venimos a aprobar esto acá y en qué contexto se ha venido dando esta situación de la reunión de los gobernadores. Porque el presidente Macri no solo lo planteó, sino que lo dijo en campaña –y esto es importante– y las cosas que se han hecho, previo a esto, cambian notablemente lo que era la Argentina del año 2015.

Primer tema: se eliminó el cepo cambiario, que permitió que los argentinos podamos hacer nuestras transacciones en moneda extranjera de las distintas maneras en nuestros comercios sin distorsiones ni restricciones.

El segundo tema, previo a esto, fue el de tomar los acreedores en *default* y, en verdad, acatar los fallos judiciales. No acatábamos aquellos que eran contrarios a nosotros, de manera tal que esto perjudicaba, en forma clave y directa a las finanzas públicas, pero también encarecía extraordinariamente la situación de los sectores privados encareciendo el crédito en un país que se encuentra en esta situación. De hecho, eran golpes directos a la economía argentina.

El tercer tema que este gobierno tomó fue el de sincerar el INDEC. En cualquier economía de mercado, tanto lo comercial como lo social, si no tenemos números claros, no podemos hacer el más mínimo diagnóstico.

Me parece que estos son los elementos que fueron produciéndose previamente.

Y otra cuestión: ingentes esfuerzos para tratar de romper aquel inmenso déficit energético que el país recibió. No hace falta ser un economista para saber que, con ese déficit energético, teníamos problemas de comercialización, problemas de industria, problemas de servicios. Pero otra cosa más grave: como ese déficit nos dejaba importando una determinada cantidad de combustible que todavía estamos pagando, era la huida de las divisas. No es posible mantener esa situación en el tiempo.

Acá, en varias sesiones, hemos dado hasta la cifra de los miles de millones de dólares que se nos iban en ese tipo de actos. Pero esto ha sido, diríamos, lo primario del gobierno, lo de los primeros meses, y me parece que ahora estamos frente a algo que no siempre los gobiernos hacen y que es la reforma de las medidas de segundo grado, que son las que se hacen en el entretiem po, es decir, cuando vamos a ir a la elección de medio tiempo. Y yo creo que acá es donde se inscribe lo que estamos por trabajar, es decir, reducir gradualmente el déficit fiscal. Pero no sirve si reducimos el déficit fiscal solamente desde la Nación, sino que también tiene que ser desde las provincias, o sea, algo que haga que realmente impacte midiendo al déficit fiscal desde el producto bruto.

Reducir y eliminar los impuestos distorsivos. Esto hace a la producción, hace al crecimiento, hace a algo que es clave: la cuestión de empleos, de lo que acá se habla. Es decir, son distorsiones que hay que corregir.

Yo acá lo escuchaba recién al senador Aguilar y me pareció extraordinario este planteo de la no uniformidad de los impuestos en un país tan distinto como el nuestro, tan asimétrico. Me parece que serían atendibles en algún momento ese tipo de cuestiones, pero le hago una reflexión previa: ¿en este país jamás se habló de impuestos, jamás se habla de impuestos! Y veo que en países como los Estados Unidos no hay campaña electoral donde el primer tema no sean los impuestos. ¡Cómo no vamos a saber qué asigno, de dónde lo saco y dónde lo pongo! entonces, me parece que es muy bueno que esto se esté hablando acá.

Otro tema que está dentro de esta reforma de segundo grado es disminuir la litigiosidad existente y darnos la previsibilidad que como país estamos necesitando. Acá, el desistimiento de más de cincuenta juicios entre las provincias y la Nación es un tema muy importante. En todo esto hay un sacrificio, puesto que son los 80 mil millones de pesos en bonos, con su capital y con sus intereses, que están para que esto se produzca.

Está el tema de la resolución vía acuerdo político de los fondos del conurbano bonaerense, en donde lo que reclamaba la provincia de Buenos Aires queda contemplado y sin perjuicio para el resto de las provincias, según nos expresaron aquí los señores gobernadores.

El otro tema es disminuir lo que llamamos la industria del juicio. También el tema de la posibilidad del revalúo fiscal, ese absurdo de que las empresas –diríamos– no podían poner la inflación en sus balances y esto seguramente llevaba a una situación muy dura y muy difícil; la restitución a la masa de impuestos de coparticipación del 15 por ciento del impuesto a las ganancias que iba al ANSES, que en el año 2009, cuando esto se estatizó, debería haber vuelto a nuestras provincias y no volvieron hasta diciembre de 2015. Que hoy esté allí me parece que no es una cuestión menor.

Por otro lado, está la reparación histórica. Acá han hablado mucho de los jubilados, pero esto de que los jubilados no sabían cuánto cobra-

ban, que estaban mal hechas las liquidaciones, que debían apelar a juicios para ver si podían cobrar –vos diste unas cifras que realmente son importantes–, es parte del...

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Castillo. – Ah, bueno.

Me parece que todos estos temas son para darnos previsibilidad y en este contexto. Porque es muy fácil gobernar no reconociendo fallos, dejando afuera a la masa, etcétera. En verdad, en forma compulsiva, el Estado no cumplía con sus obligaciones y así se producía una cuestión fiscal no real o algo que es “pasivos ocultos” que, cuando se lo tiene que reconocer, siempre es mucho más caro que si lo hubiéramos reconocido cuando devenga la obligación. Y esto lo paga siempre el Tesoro nacional.

Entonces, a mí me parece que este gobierno, en un marco de coherencia, ha hecho todos estos caminos de buena manera, pero los que estamos acá y que hemos sido protagonistas durante muchos años de estas cuestiones –porque hacemos referencias históricas–, por lo menos, deberíamos haber aprendido lo que no debemos hacer. Y esto creo que es muy importante.

Como usted me apura, señor presidente, voy a ir llegando a algo con lo que me parece que voy a dar término: que esto va a servir en la medida en que nosotros podamos controlar el cumplimiento de estos acuerdos y creo que para el cumplimiento de estos acuerdos –que son graduales, a determinada cantidad de años y que está ligado también a esto de que se empieza a notar con algún crecimiento económico–, este Senado tiene mucho que hacer. Me parece que ese cumplimiento, ese ver los números, esto de ver cómo llevamos adelante lo que hoy estamos firmando es muy importante y que este Senado tiene una gran responsabilidad para llevarlo adelante.

Con esto digo que vamos a acompañar los tres proyectos de ley.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Senadora Negre de Alonso: tiene la palabra

Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.

La verdad es que escuché muchas cosas. Escuché del miembro informante por el ofi-

cialismo que era imprescindible votar este paquete de leyes porque el pacto fiscal se estaba venciendo, pacto en virtud del cual se enviaba el 15 por ciento a las provincias. Escuché decir que las provincias estaban endeudadas: entonces, que sí o sí había que firmar esto. Escuché decir que había un bono de compensación que era suficiente. Escuché decir al senador Rozas que los gobernadores se obligaron a que los senadores y diputados votaran. Y escuché decir al senador por Entre Ríos que el gobierno del presidente Macri era muy benevolente con nosotros, las provincias, porque nos daba estas compensaciones.

Creo, señor presidente, que estamos partiendo de un concepto absolutamente errado de federalismo.

Yo respeto profundamente a los señores gobernadores que han votado, que han hecho este acuerdo. La verdad, es una cuestión ajena a la provincia de San Luis. La provincia de San Luis no votó. Pero quiero dejar algunas cosas claras, porque en estos casi diecisiete años de senadora siempre he defendido el federalismo. Entonces, lo que yo estoy escuchando son discursos absolutamente unitarios.

El Congreso, los legisladores nacionales, no somos súbditos de los gobernadores. A los senadores y diputados nacionales nos votan los pueblos de nuestras provincias y representamos a las provincias, lo que no significa que uno pueda compatibilizar con su gobernador en defensa de las provincias, cualquiera sea la posición política e ideológica que ella tenga.

¿Y cómo digo esto, señor presidente? Y lo digo con todo respeto. La verdad es que considero que, a mi criterio, este consenso que se ha firmado es sumamente cuestionable desde el punto de vista federal.

Mire, presidente: yo escuché a algún senador o a alguna senadora que dijo...

—Murmullos en el recinto.

Sra. Negre de Alonso. — Por lo menos en la redacción, posiblemente.

Habla de compensar con transferencias diarias y automáticas a las provincias que adhieran y cumplan al consenso en virtud de la eliminación del artículo 104. En realidad, nosotros, que hicimos el juicio a la Corte, no tenemos la detracción del 15 por ciento, no la tienen otras

provincias que hicieron juicio y el resto firmaron con el presidente Macri una devolución progresiva a través de los años. Pero, además, ¿qué es lo que le garantiza al estado provincial que esta transferencia automática va a ir a cada jurisdicción? ¿Y cuál es el monto? Porque no está establecido cuál es el monto. No está garantizado que ese monto vaya a respetarse.

Después dice: “Distribución de los recursos del Fondo Federal Solidario solo entre las provincias que participen de este acuerdo”.

Después dice: “Determinar el valor fiscal de los bienes inmuebles. Disponer de un organismo federal que cuente con la participación de las provincias y de la CABA, que determine los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones para evaluar los inmuebles fiscales”.

A ver: nosotros hace muchos años que no revaluamos los campos. En momentos difíciles, el gobierno provincial apoyaba sin revaluar el impuesto a la propiedad de los campos. Cuando ha habido sequías, cuando ha habido efectos de El Niño, de La Niña, etcétera, el gobierno ha ido acompañando.

A su vez, como decía el señor senador por el Chaco, no es igual la situación de Buenos Aires que la de San Luis o la de las provincias del Norte. ¿Qué es esto de que se va a unificar? Además, se trata de una atribución exclusiva y excluyente de nuestros legisladores provinciales. Los gobernadores no podrían resolver esto.

Luego alude al impuesto inmobiliario y se refiere a adaptar para el cálculo y determinación de evaluaciones fiscales de los inmuebles alícuotas entre el 0,5 por ciento y el 2 por ciento. También refiere a no incrementar las alícuotas del impuesto a los sellos, a las transferencias de inmuebles y a los automotores. No incrementar.

También se indica la abstención de nuevos procesos judiciales y algo más, que me llama poderosamente la atención. En realidad, desde nuestro lugar, en la provincia de San Luis, nunca hemos votado leyes de delegación legislativa. Fíjense que en el punto 6, “Implementación”, se indica que dentro de los 30 días los Poderes Ejecutivos elevarán a los Poderes Legislativos proyectos de ley para aprobar este consenso, modificar las leyes y autorizar a los Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin. A ver: el

governador se compromete a que su Legislatura le va a votar una ley donde le delega facultades.

Mi gobernador fue absolutamente claro –el gobernador de la provincia de San Luis– sobre cuáles eran los motivos por los que no acompañó el consenso. Y, consecuentemente, los senadores de San Luis tampoco vamos a votar el proyecto en consideración. De todas maneras, sí quiero hablar de federalismo, porque acá se han hecho realmente discursos muy encendidos sobre ese tema.

Señor presidente: el federalismo lo establece la Constitución. Las provincias son el producto de pactos preexistentes. ¡Nacimos antes que la Nación Argentina! Nosotros tenemos un derecho originario a nuestra autonomía y en la Constitución solo delegamos algunas facultades, pero no delegamos la facultad de dictar impuestos provinciales. El gobernador habló de un 35 por ciento y una senadora habló de un 80 por ciento. ¡Esa es la autonomía! ¡Eso es lo que decía el general Perón!: “No hay soberanía política sin independencia económica”. ¡Y nosotros somos independientes económicamente!

Lo que se pretende con este consenso fiscal y con este bono de compensación –el ministro Dujovne lo dijo claramente: 80 mil millones repartidos por coparticipación– es que San Luis, que tiene un 2,3, reciba unos 1.840 millones de pesos. Es decir, 11 mil millones contra 1.840 millones. ¿Qué facultad tiene un gobernador de renunciar a un activo provincial? Ninguna. Además, aquella cifra se va a dar con un año de gracia y en cuotas. ¿Cómo la provincia de San Luis, que tiene 11 mil millones de capital –la Nación presentó una planilla de liquidación de 15 mil y San Luis de 17 mil–, va a cambiar por 1.840 millones? ¡Volvemos a lo mismo, presidente! ¡Volvemos a lo mismo! ¡No se reconocen y no se cumplen los fallos de la Corte!

Ustedes ponen, señor presidente, que el 31 de marzo de 2018 van a establecer cuál es la financiación o las cuotas que se van a pagar a quienes tienen juicios firmes de la Corte y que no hayan firmado, que somos solo nosotros. Hay que pagar como corresponde: todo al contado, como dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Cómo vamos a renunciar a casi 15.000 millones de pesos? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Entonces, esto es lo que pasa. ¡Que en el ADN no entienden que

estamos en un país federal! ¡En el ADN tienen el unitarismo metido acá adentro! No tienen ni un ministro de las provincias. Ni un ministro nacional tienen. Solo piensan en que la perfecta es la Nación.

Las diferencias regionales: acá hablaba el senador por Entre Ríos del aporte que ellos hicieron. Nosotros también hicimos aportes a la campaña. ¡Nosotros fuimos la provincia que porcentualmente más granaderos aportó a la campaña de San Martín! ¡No nacimos de un poroto! ¡Trabajamos la gesta libertadora igual que todas y cada una de las provincias argentinas! ¡Pero acá tenemos una concepción unitaria, todo es unitario! ¿Quiénes son los culpables del déficit fiscal? Las provincias. ¿Quiénes son los culpables? Los malos gobernadores. ¿Quiénes son los culpables de que la Nación esté así? Las provincias argentinas. ¿Quiénes son los monjes negros de la República Argentina? Los gobernadores de provincia.

Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿Y dónde está el respeto por nuestras autonomías o nuestra división de poderes en este consenso? Disculpenme. Lo digo con mucho respeto, pero tengo autoridad moral. ¡Diecisiete años defendiendo en este Congreso! La ley anterior de responsabilidad fiscal la voté, porque compensaba la deuda del corralito con mi provincia. Logramos que se incorporara ese artículo. Algunos de ustedes estaban y lo recordarán. ¡Pero hace diecisiete años que estoy peleando por el federalismo! ¡Si no, modifiquemos la Constitución! ¡Muy simple! Vayámonos a una Constitución como la de Chile.

Con mucho respeto al senador por Entre Ríos, a quien aprecio y le tengo mucho afecto, quiero decirle que yo no necesito la benevolencia. ¡Yo necesito que se respeten mis derechos, el derecho de mi provincia, las garantías constitucionales que mi provincia tiene! ¡No necesito la benevolencia del gobierno nacional!

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señora senadora.

Sra. Negre de Alonso. – Tengo 20 minutos, presidente. Me dice el presidente de mi bloque que en la reunión de labor no se acordó nada. Continúo.

Dice que los gobiernos provinciales no podrán incrementar la relación con cargos

ocupados en el sector público existentes al 31 de diciembre de 2017, salvo que tengan superávit financiero. Yo le pregunto a mis colegas senadoras y senadores: ¿qué pasa si les faltan médicos? ¿Qué pasa si les faltan maestros? ¿Qué pasa si tienen problemas de seguridad y necesitan nombrar policías? Ustedes saben que es causal de intervención federal no garantizar la seguridad o no garantizar la educación. Y resulta que ahora, si no tienen superávit fiscal, las escuelas quedarán sin maestros, las calles sin custodia y los hospitales sin médicos, porque a esto se han comprometido los gobernadores en la ley de responsabilidad fiscal.

No me falta mucho. No se preocupe, señor presidente. No me falta mucho.

Otra cosa más, con relación al impuesto a los créditos y débitos bancarios. El senador Rodríguez Saá decía –esto me olvidé de decirlo– que había que mandar a Coparticipación porque aquí se modifica y se le saca la coparticipación a las provincias del impuesto a los créditos y débitos bancarios para enviárselo a la ANSES. ¡Pero no nos equivoquemos! Se descuenta de ganancias, se descuenta de ganancias. Entonces, ¿toca o no toca fondos coparticipables, si el impuesto a las ganancias es un impuesto coparticipable?

–La señora Elías de Perez formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Sí, señora senadora. ¡Está acá y tengo derecho a hablar! Es el consenso fiscal y estoy haciendo uso de mi derecho...

–La señora Elías de Perez formula manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – ¡No, no, no, senadora! Le pido que no me interrumpa. Y déjeme hablar porque es así. Acá está...

Sr. Presidente (Pinedo). – Yo le voy a pedir, señora senadora, que se dirija a la Presidencia, por favor. Porque si no, todo esto se transforma...

Sra. Negre de Alonso. – Le pido disculpas. Tiene razón. Le pido disculpas.

También dígame a la senadora que me pida una interrupción a través suyo y se la doy.

Y, después, voy a la reforma previsional. Mire, presidente: “El papa Francisco pidió que los ancianos no sean víctimas de la cultura del descarte”, título. Permiso para leer: “Cuántas

veces se descartan los ancianos con actitudes de abandono que son una verdadera eutanasia escondida”, exclamó el Pontífice, quien añadió: “Esta cultura del descarte es fruto de un sistema económico en cuyo centro no está la persona humana, sino el dinero”.

Oscar Ojea, el obispo que hoy es presidente del Episcopado, ha hecho una declaración expresa sobre esta ley. Dijo que para la Doctrina Social de la Iglesia el trabajo no es una mercancía, sino que hace a la dignidad de la persona, es el gran ordenador de la vida.

En este sentido –lo digo por algún senador que dijo que los curas se vayan a tratar las cuestiones espirituales–, al describir la misión de los obispos y sacerdotes aclaró: “Nuestro lugar como pastores es estar junto al pueblo y de un modo particular frente a nuestros hermanos los pobres”.

Presidente: si no se va a perjudicar a los jubilados, ¿entonces para que se les saca y se modifica? Si no se van a financiar con el dinero de los jubilados, ¿por qué los 65.000 millones? ¿Por qué modifican la cláusula de movilidad?

Me hicieron muchas cuentas. Algunos de mis asesores dicen que la postura del gobierno es más favorable que la postura que plantea el senador Pichetto. Por supuesto que la postura de movilidad actual es muy superior. No voy a ingresar en eso.

Hay un dato objetivo: se va por un monto de dinero claro sobre las jubilaciones. Ese monto de dinero claro de las jubilaciones impacta sobre nuestros mayores. La cultura del descarte que dice el papa Francisco.

Voy a reconocer que sí hay jubilaciones de privilegio –no estoy hablando de los regímenes especiales–, como por ejemplo del Poder Judicial: no pagan impuesto a las ganancias, se jubilan con el 82 por ciento móvil. En este recinto varios de los que estamos acá –lo veo al senador Mayans– votamos la derogación de la ley de privilegio de los legisladores nacionales. De manera que nosotros no seremos jubilados de privilegio –lo aclaro–, pero sí hay regímenes de privilegio. Quiero ver que los jueces empiecen a pagar el impuesto a las ganancias de una vez por todas y que se reduzcan las jubilaciones de privilegio de los que más tienen, no de los traba-

jadores que tienen regímenes que mencionaron distintos senadores y senadoras que hablaron.

Por la Argentina, por el Estado federal, por mi provincia, que me eligió para estar acá, voy a votar en contra las tres leyes.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora. Senador Mayans.

Sr. Mayans. – ¿Por qué estamos discutiendo todo esto? Alguien una vez dijo: “Es la economía, estúpido”. Este es el problema que tenemos. El problema que tenemos es el plan económico del gobierno, un plan liberal, y está bien porque es la visión del gobierno. Obviamente nosotros no compartimos esta visión.

Los resultados de este plan están a la vista. El resultado es malísimo. Se le mintió mucho a la gente. Antes del 22 de octubre se decía que todo estaba bien, que bajamos la inflación, que estamos creciendo. Entonces, si está todo bien, ¿para qué se va a cambiar todo? Si está todo bien, habría que seguir el rumbo y ya está.

Lo que pasa es que no está nada bien y, entonces, ahora se presenta este plan porque el Estado nacional tiene un déficit que es prácticamente insostenible. Sí, ustedes, de 3,5 a casi 8 puntos ahora. Ese cuento que hizo el presidente en la primera sesión de que estaba en 7 puntos fue una mentira alevosa. Para saber el déficit es muy sencillo: es recursos menos gastos. Bueno, en todos los medios nacionales estaban hablando de 3; 3,2; 3,5.

Al presidente, lógicamente, asesorado por algunos brillantes, le dijeron: “Tenés que decir que es de 7 puntos, así tenemos margen de mentir un poquito”. Como venía de ganar..., pero dijo una mentira grande como una casa. Ahora está pasando y casi se está arrimando al 8 por ciento el déficit. Este es un gran problema.

El otro problema es que el plan económico causó daños a la economía nacional y a las economías provinciales. Y también hay provincias que antes no tenían tantas dificultades y que ahora sí tienen graves dificultades. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Un gran esfuerzo que tenemos que compartir entre todos.

Yo estoy de acuerdo en el esfuerzo, porque en el año 2001, peor país como el que recibimos en ese momento, yo no creo que vuelva a pasar eso. Peor país que ese...

Era 168 por ciento la relación deuda-PBI, que lo recibió acá el... Prácticamente ya el país estaba en *default*. Lo que hizo Adolfo fue nada más anunciarlo, porque ya la deuda era impagable: 168 por ciento –cuando se fue nuestro gobierno, la relación deuda-PBI era del 39 por ciento–. El problema laboral, 26 por ciento; pobreza, 56 por ciento; indigencia, más del 20 por ciento. Esa fue una situación límite. Por eso, cuando se inventa el tema de los planes, se anuncia un millón de planes como para sostener la situación. Yo me acuerdo que en todo ese tiempo era insostenible la situación.

Allá hablaban de un déficit energético. ¿Déficit energético? ¡Por favor! ¡No saben ni lo que dicen! ¿Sabe cuánto era el consumo del país en 2001? Yo les digo porque esas cosas las tengo en la cabeza: 13.000 megavatios. Cuando nosotros nos fuimos era de 26.000 megavatios. Para que se den una idea de lo que creció el país, ¡26.000 megavatios! Semejante crecimiento del PBI nacional, ayudado justamente por el consumo de la economía popular. Y cuando nosotros nos vamos también dejamos más de 15.000 millones de dólares en recaudación.

De manera que, en todas estas cosas que se hacen, se crean la fantasía, apoyados obviamente por los grupos que están acompañando estas decisiones de gobierno... Y entonces venimos con este plan... Ahora, ¿vale la pena todo esto que se va a hacer? ¿Se va a corregir con esto? Esta es la pregunta. ¿Dentro de un año vamos a estar mejor con esto?

Volvemos a decir que el problema es el plan económico: devaluación, tarifazo, apertura indiscriminada de las importaciones, Banco Central libre e independiente, es un problemazo.

Fíjense el problema que tenemos. El Banco Central ya emitió deuda por casi 61.000 millones de dólares. Y está al 30 por ciento de intereses prácticamente. No puede controlar la tasa el Banco Central. Porque miente el presidente del Banco Central cuando dice que tenemos prácticamente la inflación controlada. Diría, en la jerga popular: ¡Minga que va a estar controlada!, porque si tenés 61.000 palos de LEBAC, superaste la base monetaria y ahora tenés 1 billón... LEBAC, ¿qué quiere decir?: pagarés, deuda.

Ahora, partamos de esta base: si el Banco Central, que es el banco madre, es la madre de

todos los bancos, está pagando tasas del 30 por ciento... No existe economía en el mundo en que se paguen las tasas al 30 por ciento, prácticamente, en dólares. Por eso es que cada cinco pesos que entran en la Argentina, cuatro van al sistema financiero.

El año pasado —insisto en esto, porque acá tenemos que buscar la solución del problema— 12.000 millones de dólares pagó el Banco Central en concepto de intereses. Y este año van a ser 14.000 millones. Estamos hablando de 26.000 millones de dólares, una transferencia espectacular del sector público a los banqueros. Y, bueno: a ellos. ¡Impresionante! Ahora, una deuda que nos dejan a nosotros, una tasa imposible de pagar y una tasa que no hace posible... Allá, no sé, el senador Luenzo, que está a cargo del tema industria, ¿a quién le conviene invertir en una pyme o en una micro si, sin trabajar, estos señores ganan el 30 por ciento en dólares? ¿A quién le conviene hacer eso? A nadie le conviene, porque sin trabajar esta gente lleva esa plata.

El otro problema que tenemos es el manejo irresponsable en el tema de la deuda. Ya en todo este tiempo la Secretaría de Finanzas nos ha endeudado en más de 80.000 millones de dólares. Sumen eso al Banco Central y estamos hablando de casi 140.000 millones de dólares. ¿Y cuándo vamos a producir eso nosotros? ¡140.000 millones de dólares en dos años, señores! Hablemos de las cosas como son.

La balanza comercial, que es de donde se tiene que nutrir el Estado para generar las divisas: 6.000 millones de pérdida. ¿Saben por qué? Porque, obviamente, si el mercado está abierto, no se puede competir contra la industria china. La industria nacional no va a competir contra eso.

Yo vivo en una provincia que es lindante con el Paraguay. Es impresionante el paso que hay y también la diferencia de precios. Antes venía toda la gente de Paraguay a comprar y no preguntaban por impuestos, ni nada. Llenaban los hoteles. Venían de compras. Nadie preguntaba cuánto era el IVA, nada; venían y compraban. ¿Qué cambió? El plan económico. Pregunten a todas las provincias que son limítrofes cómo está el tema de los precios.

El otro tema es la concepción del tema energético. Este gobierno toma el tema energético como un negocio. Un negocio para unos pocos. Un tarifazo impresionante. Y, ahora, terminadas

las elecciones, vienen el gas y la luz... Me estaba diciendo un mozo que estaba acá que tuvo que pagar 4.000 pesos de luz. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el esfuerzo? Ahí está nuestro problema.

Entonces, no va a ser un gran esfuerzo. Se pedirá a los jubilados, debido al déficit... ¿El planteo cuál es? El Estado nacional dice: no podemos seguir gastando más. Es correcto. Pero el tema es cómo crecemos económicamente. Si seguimos en la economía especulativa, no vamos a resolver el problema, no vamos a estar mejor el año que viene. Está superando ampliamente —esto es un diagnóstico real— el concepto de pago de intereses solamente de lo que la Argentina puede producir. Porque el país está metido en usura. Entonces, para arreglar esta situación llaman a todos los gobernadores y les dicen: “Tenemos que arreglar todos”. Yo, si fuese gobernador, también diría que no. Fíjense cómo queda el tema del artículo 104, que se sacan los temas de ganancias y del cheque. Dice que se va a compensar automáticamente, aunque nadie explica cómo. Yo dudo.

¿Qué va a pasar con San Luis? No van a cobrar más, porque, como no firmaron, no cobran directamente. No van a cobrar porque no firmaron el pacto. Al no pertenecer al pacto, serán debidamente sancionados no cobrando ni un peso. Esto va a pasar. No van a cobrar nada. Porque no firmaron y no cumplen el pacto. Y esto, rompiendo un principio básico de igualdad entre los estados provinciales. ¿Qué clase de ley es esta donde el Estado dice que una provincia va a cobrar el impuesto y otra no porque se porta mal? Se porta mal porque ganó un juicio y el Estado no le devuelve la plata. Ellos tienen razón en eso que están diciendo.

Sr. Presidente (Pinedo). — Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Mayans. — Otra vez mi tiempo. Bueno.

El otro problema es el tema previsional. Baspilbaso no aparece por el Congreso. Hizo un manejo del tema de los fondos de la ANSES, del Fondo de Garantía Sustentable, que era de 80.000 millones de dólares cuando dejamos nosotros. Será que estaba bien manejado.

Lo que hizo con las acciones de Petrobras, un desastre, un negociado tremendo. Estamos hablando de más de 250 millones de dólares, no de tres pesos. Con relación a la deuda, el

secretario de Finanzas metió una empresa *offshore*, porque es el director técnico de la evasión. Él juntaba firmas para evadir y llevar afuera. Y esa misma empresa ahora la pusieron a cien años para los intereses de la República Argentina. Una verdadera vergüenza. No viene acá a explicar el tema de la deuda.

Entonces, yo creo que hay otros pasos. Bueno, se dio esto. ¡El 60 por ciento votó en contra de esto! Entonces, llamaron al consenso. ¡Obviamente, los gobernadores no se van a negar al diálogo! ¡Pero no estamos yendo al problema, no estamos yendo al problema!

Basavilbaso no nos está explicando qué pasó con el Fondo de Garantía Sustentable de la ANSES. Hasta ahora no lo está explicando. Tiene que venir acá. Vino una vez el año pasado y no ha venido este año. Dice: “Tengo todo en Internet”. ¡No, señor! ¡No es cierto! ¡Usted tiene que venir acá! ¡¿Usted qué tiene, coronita?! ¿Es el dueño de qué, de la ANSES? ¿Usted es patrón de estancia, que maneja por su cuenta esto? Venga al Congreso y rinda los fondos de la ANSES, para saber qué está haciendo con los fondos de la ANSES. ¡Explíqueles a los señores senadores, a los señores diputados que son miembros de la comisión bicameral con detalles y con comprobantes qué está haciendo de las acciones que tiene la ANSES para los jubilados! Ahora le falta plata. Bueno, esta es la situación por la que estamos pasando.

Entonces, obviamente es un contexto sumamente difícil. Hay gobernadores, en el caso del mío, mi gobernador ha firmado el pacto. Y hay cosas que, obviamente, nosotros vemos que hay una situación altamente difícil para el gobernador y, obviamente, respetamos esa situación. Pero también es cierto que está a un lado el interés de la gente, en el caso, por ejemplo, del sistema previsional. Si está todo bien, ¿por qué le van a descontar a los jubilados? Si está todo tan bien, si ganan tanta plata, si el poder adquisitivo... Mire, la canasta básica familiar hoy, acá, en Buenos Aires, está en 17.000 pesos. Ese es el problema que tenemos. Lástima que tenemos un corto plazo.

Yo, sinceramente..., ojalá que, aunque sea una parte de este programa, el gobierno nacional cumpla. La provincia de Buenos Aires va a salir muy beneficiada, va a ser la más..., porque, obviamente, es del gobierno. ¡Nosotros

no recibimos un solo peso de ayuda del Tesoro en dos años de gobierno! ¡Un solo peso! Nos deben 300 millones del tema de la caja y hasta ahora nos dicen que van a ver si nos mandan.

Bueno... todo está por cumplirse. Y, gracias a Dios, somos un estado que no tenemos déficit, no tenemos deuda, no hace falta que reordene-mos el estado. Lo hemos hecho. Entonces, tenemos una situación verdaderamente compleja.

Y yo digo que, en algún momento, tomaremos el toro por las astas, llamaremos al secretario de Finanzas para que explique el tema de la deuda, vendrá Basavilbaso a explicar el tema de la ANSES y el presidente del Banco Central va a decir qué va a hacer con los 61.000 millones de dólares que tiene ahí guardados en pagarés. Y ahí sí yo creo que, si una vez nosotros decimos: “Bueno, definimos una cuestión económica, el plan económico, la economía”, a lo mejor, tenemos una esperanza de poder recuperarnos.

Entonces, yo creo que esto es “peor el remedio que la enfermedad”. Ese es el lema acá. Entonces, obviamente, estando los gobernadores que estuvieron presentes, que dijeron: “Bueno, esto es lo que se puede hacer”, la situación es altamente complicada.

Ojalá, presidente, que podamos trabajar con la presencia de estos funcionarios rindiendo cuentas de lo que han hecho con el tema de la deuda, de lo que han hecho con el tema de la ANSES, de lo que están haciendo con el Banco Central, porque acá no solamente está en juego nuestra generación, sino las generaciones de muchos argentinos que vienen.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Senadora Sacnun.

Sra. Sacnun. – Presidente, el artículo 1º de la Carta Magna establece que la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal.

Esta modalidad, que el constitucionalismo moderno conceptúa como forma de Estado, se constituyó después de zanjar cuatro décadas de guerras civiles en la República Argentina y de incorporar los pactos preexistentes al preámbulo de nuestra Constitución, esos pactos preexistentes que fundaron este sistema federal de gobierno.

Cuando uno advierte este consenso fiscal al que se ha arribado, por supuesto, no podemos no estar de acuerdo con que los gobernadores de la República Argentina dialoguen con el gobierno nacional, pero, en mi caso, escuchar en su momento al presidente Mauricio Macri decir que si el juez Griesa decía que había que pagarle a los fondos buitres, había que pagar rápidamente y de contado y, ahora, después de dos años de una sentencia firme a favor del estado de la provincia de Santa Fe, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de noviembre de 2015, incorporan dentro de este consenso fiscal el pago de la deuda que tienen con la provincia de Santa Fe como una cláusula, como una concesión que da el Estado nacional de que, en el mes de marzo de 2018, vamos a ver cuánto nos pagan y cómo nos pagan a los santafesinos.

A esto quiero sumarle algo más, un audio que estuvo circulando —creo que todos pudimos escucharlo— del presidente Macri, diciéndole a los gobernadores que a la hora de acordar paritarias con el sector público de sus provincias, estas paritarias se acordarán a la baja para que no disciplinen al sector privado. ¿Qué quiero decir con esto? Que, seguramente, los santafesinos, como otras provincias, tenemos en ciernes un conflicto con nuestros maestros, con el sector público de la administración pública de la provincia, porque también en este consenso fiscal se incorpora un profundo ajuste de las administraciones públicas. Decía que tenemos en ciernes un conflicto con los maestros, conflicto con la salud pública, con médicos, enfermeras, con los judiciales, porque justamente se trata de disciplinar a la baja las paritarias que se tienen que abrir en el año 2018.

A esto hay que sumarle también otra cuestión que me parece que no es menor y que se incorpora al consenso fiscal, que tiene que ver con la transferencia de 20.000 millones de pesos del banco público que se van a destinar a las utilidades de liquidaciones anuales del Tesoro nacional. ¿Qué significa esto? Que el Banco de la Nación Argentina también va a tener un fuerte ajuste, que seguramente va a recaer en su personal, pero que también tiene que ver con este modelo económico que se ha puesto en marcha, que no ve a la banca pública como a una de las fuentes de apalancamiento del motor económico

de este país para la pequeña y mediana industria, para el pequeño y mediano comerciante, para el pequeño y mediano productor.

Decíamos, en su momento, cuando me tocó ser miembro informante de la minoría y no votábamos la Ley de Reparación Histórica, que ese era el principio del fin del sistema público, de reparto y solidario en la República Argentina. Y hoy se le está dando el tiro de gracia, como vengo diciendo, a este sistema público, solidario y de reparto.

En aquella oportunidad, se incorporaba la edad de 65 años para que las mujeres pudieran acceder a esa pensión universal. Hoy se incorpora la edad de 70 años. Lentamente vamos cumpliendo con lo que el Fondo Monetario Internacional le ha sugerido a la República Argentina en materia previsional.

La verdad es que no podemos no estar de acuerdo con que es necesario abordar la problemática del déficit fiscal en la República Argentina. Por supuesto que sí, porque creemos que debemos tener una economía ordenada. Pero el déficit fiscal también se está provocando por las decisiones en materia de política macroeconómica que ha tomado este gobierno nacional: la apertura del ciclo de endeudamiento en la República Argentina, el endeudamiento y los intereses siderales que están azotando a nuestra economía, pero también la decisión política que se ha tomado en materia de retenciones. Quitar las retenciones a las mineras ha generado también en la República Argentina un profundo déficit fiscal. ¿Cómo lo van a tapar? Quitando los subsidios a las tarifas. Esto también perjudica a la pequeña y a la mediana industria, esto también perjudica a la economía familiar, esto también perjudica al entramado productivo, en mi provincia y en todas las provincias de la República Argentina.

¿Cómo van a tapar ese déficit? Asolando la economía de los más débiles: Hood Robin. Al revés: les sacamos a los pobres para concentrar cada vez la riqueza en menos manos. Les sacamos a los pobres para que cada vez la economía argentina se endeude más y destruya el aparato productivo: la pequeña y la mediana industria, los pequeños productores de las economías regionales, los pequeños comerciantes.

La verdad es que es muy triste estar sentada en una banca y, en lugar de estar trabajando en

aras de avanzar en materia de derechos sociales, económicos, políticos, culturales, tener que estar defendiendo los derechos conquistados para que no se avasallen.

Yo quiero decir, en cuanto a esta reforma previsional, que claramente es una reforma inconstitucional, es una reforma que vulnera los derechos adquiridos, es una reforma que pretende una aplicación retroactiva de la ley con esta nueva fórmula que se pretende instalar para establecer el reajuste que por derecho les corresponde a los jubilados. Es una reforma inconstitucional también porque modifica el haber inicial al que tienen derecho los trabajadores a la hora de acceder a sus jubilaciones y es también una norma inconstitucional porque afecta la progresividad de los derechos que forman parte de nuestra Carta Magna y que constituyen parte de los derechos adquiridos por la sociedad argentina.

Por todo esto, señor presidente, no voy a acompañar este paquete de medidas regresivo para un gran número de jubilados, para un gran número de menores de 18 años, quienes verán afectadas sus asignaciones universales por hijo, y también para los trabajadores que están, como vulgarmente se dice, “en blanco”, los que verán afectadas sus asignaciones familiares.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora. Senador Solanas, tiene la palabra.

Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.

Se han dicho ya demasiados argumentos críticos respecto de este típico paquete de ajuste neoliberal: reforma tributaria atada a la reforma laboral y a la reforma previsional.

No voy a abundar en argumentos que ya se han dicho y me sumo a todas las críticas que me han antecedido. Lo que más me preocupa es que da la impresión de que estamos sesionando, realmente, de espaldas a la realidad del país, de espaldas a la plaza que hemos tenido hoy acá enfrente, en un país con un gobierno sordo; sordo y soberbio.

Por momentos su desorientación da la idea de que estamos ante una nueva patrulla del desierto desorientada y perdida que a lo único que atina es a volver a las fórmulas de ajuste. Hoy intentamos votar –y votar así, en un debate

expresé que sinceramente es irresponsable– este paquete de leyes.

Por supuesto, que a nadie le queden dudas de mi voto negativo. No es serio y no es responsable tocar temas como meter de nuevo la mano en el bolsillo cuasi vacío de los jubilados para resolver los problemas del déficit fiscal.

¿Frente a qué país estamos? ¡Un país que se endeuda en dólares para cambiarlos a pesos y financiar el déficit! Y con altas tasas, porque acá no estamos tomando al dos, al uno o al tres por ciento. Acá se ha dicho claramente: 140, 150. Más de 320 mil millones de dólares de endeudamiento tiene hoy la Argentina, sin contar las deudas que han tomado las provincias ni las empresas del Estado. Este es el país real.

Entonces, que se vuelva a insistir, que vuelvan a ser la moneda de ajuste los jubilados para hacerse de esos 100 mil millones de pesos... En realidad, ya la jubilación mínima no será de 7 mil pesos, sino que será de 6 mil con este 20 por ciento de ajuste que, en los hechos, es lo que tiene detrás esta ley.

Señor presidente: estamos en problemas. Y me voy a desviar un poquito del tema. Me resulta sorprendente que no se hayan mencionado en la tarde de hoy dos hechos de grave violación institucional en los últimos días. ¡Acá ha muerto un argentino asesinado por las balas de la represión gubernamental! ¡Gravísimo! ¿Van a desalojar el espacio público a balazos? Porque este es el mensaje. ¿Lo van a desalojar con violencia? A PepsiCo lo desalojaron con gas pimienta –mostrado obscenamente en cámara– y palos. Ahora, el tiroteo a un grupo de jóvenes en el lago Mascardi es inadmisible. Y me resulta grave, estimados colegas, que falte una respuesta contundente del Congreso de la Nación. ¿Qué destino tiene la Argentina si el conflicto social no es capaz de resolverse por la vía del consenso y la paz?

El segundo tema que me preocupa es que hace un mes –un poco más o un poco menos–, el Congreso de la Nación votó por unanimidad la ley que prolonga el impedimento de desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas. En el supuesto caso de que tuviéramos un desalojo de ese mismo nivel, ¿cómo es posible que admitamos que se pase la ley vaya a saber por dónde? Y horas después de que una delegación de organizaciones de derechos humanos y

Parques Nacionales con el obispo de Bariloche llegara hasta este grupo de jóvenes y obtuviera el acuerdo de entablar una mesa de diálogo que asegurara la paz.

Acá se ha hablado de todas estas cosas y me sumo a los argumentos de la senadora Liliana Negre de Alonso. A los descartados, ¿los vamos a correr a balazos? ¿Vamos a desalojar cada corte de la Nueve de Julio o de cualquiera de estas arterias a balazos? ¿Vamos a desalojar la ocupación de cualquier predio oficial a balazos? ¡Muy grave esto, señor presidente! ¡País endeudado donde todas las promesas y los planes oficiales han resultado una verdadera estafa a la credibilidad ciudadana! ¿Qué inversiones pueden venir al país en este marco de dudosa, débil o fraudulenta institucionalidad, señor presidente?

Yo creo que no podemos discutir estos problemas aislados del conjunto del país, el país que sangra por el endeudamiento, el país obscuro y corrupto que privilegia la especulación financiera, el agiotismo, las altas tasas de interés, la usura con las LEBAC a la inversión productiva, a la creación de trabajo genuino.

Y los jóvenes..., el drama del asesinato joven Nahuel. Que no lo disfracen de macanas, señores senadores. Es el drama de la pobreza en la Argentina, es el drama de la disputa por la tierra. En una región de las más despobladas del planeta, con menos del uno por ciento por kilómetro cuadrado, se mata por la tierra. Y, ¿por qué no se desaloja a balazos, también, al fraudulento usurpador Joe Lewis? En el año 96, a dos años de haber votado el inciso 17 del artículo 75, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, asegurando la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que habitualmente ocupan, dos años después, se permitió que este señor comprara, haciendo fraude a la Nación —¡fraude a la Nación!—, 11 mil hectáreas sobre la frontera chilena y cercara un lago.

Les recuerdo que el exprocurador del Tesoro, doctor Carlos Balbín, denunció esto el año pasado, ante el ministro del Interior, después de haber recibido el informe del secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior, que avalaba el fraude cometido por Joe Lewis al comprar, con una pseudoempresa argentina

—cuyas acciones le pertenecían al propietario inglés— esas 11 mil hectáreas.

Sr. Presidente (Pinedo). — Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Pinedo. — Muy bien. Termino diciendo que estos son los ejemplos de la degradación institucional de la Argentina. Acá hay una mirada para hacer justicia para los amigos del poder, para hacer justicia con la especulación bancaria, con las altas tasas de interés, con el endeudamiento, con los negocios del poder.

Entonces, señor presidente, no podemos discutir ni avalar estos planes, que además son chantajistas: si no me aceptan esto, van a tener estas consecuencias con esto otro, etcétera, como bien lo señaló el gobernador de San Luis.

Es poco serio, es irresponsable y de dudosa legitimidad tratar estos temas en debates exprés.

Nada más.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senador.

Senadora Crexell. ¿No está? Sí.

Sra. Crexell. — Gracias, señor presidente. Tengo una lista en la que estaba la senadora Fellner antes que yo.

En principio, quiero decir que más que un hecho histórico, creo que estamos frente a una crisis del federalismo. Cuando escucho a muchos senadores preopinantes hablar del federalismo en la República Argentina y de que este es un verdadero acto de federalismo y de reconocimiento de las atribuciones o competencias provinciales, quiero decirles que estamos frente a un acto que es justamente todo lo contrario.

Iba a votar en contra de la reforma previsional y me iba a abstener en el consenso fiscal y en la responsabilidad fiscal, pero luego de escuchar algunos discursos, he decidido votar los tres dictámenes en contra, justamente porque no puedo, como senadora por la provincia del Neuquén —que representa la autonomía: provengo de un partido provincial que justamente nos caracterizamos por defender el federalismo y la autonomía—, ser condescendiente frente al poder central sin defender nuestros recursos. Me parece que sería un acto contrario a esos principios que la doctrina de nuestro propio partido nos enseñó desde que empezamos a militar.

La realidad es que no se puede pretender sancionar leyes de esta envergadura en seis días,

donde no tuvimos tiempo para estudiar los efectos ni las consecuencias que estas medidas traen aparejadas. No pudimos tampoco ni siquiera hacer un control exhaustivo de la constitucionalidad, una cuestión que está bastante olvidada en todas las leyes que estamos sancionando. No veo ningún tipo de control respecto de si estas medidas contradicen o no nuestro ordenamiento constitucional.

Durante el tratamiento de estos paquetes, asistieron a la comisión plenaria varios gobernadores. Muchos de ellos hablaban de este acuerdo fiscal como histórico, pero recordemos que la Argentina ha tenido una cantidad importante de pactos fiscales y todos ellos también habían sido anunciados como históricos y que eran como el comienzo de un nuevo momento de la Argentina.

Sin embargo, estamos en 2017, con una crisis institucional importante, con un déficit insostenible, con una tasa de pobreza alarmante y estos pactos fiscales, indudablemente, no han funcionado. Lo único que significaron fueron renunciamientos de activos de las provincias y también resignación de atribuciones provinciales, como es el caso del consenso y del acuerdo de responsabilidad fiscal que se pretende tratar ahora.

La pregunta es, ¿por qué este va a ser distinto? ¿Qué es lo que me asegura a mí que este acuerdo va a cambiar la realidad de la Argentina? ¿Será la responsabilidad que se le pretende imponer a los gobernadores a través de un pacto que recorta las atribuciones de las provincias, que recordemos que son preexistentes y que están muy bien definidas en el artículo 121 de la Constitución Nacional?

Además, quiero decir que se trata de un poder constituyente que delegó o que conservó aquellos poderes no delegados en la Nación. Por lo tanto, ningún poder constituido, como las Legislaturas provinciales, puede venir a modificar o alterar ese ordenamiento del artículo 121.

Por otro lado, quiero reiterar lo que dije en la comisión, que tiene que ver con el verdadero hito histórico que podríamos dar, y que estamos en condiciones de dar, cual es la discusión de una ley de coparticipación federal, tal como lo establece nuestra Constitución reformada en 1994.

Me voy a permitir tener alguna disidencia con legisladores a los que respeto mucho, pero creo que si seguimos sosteniendo una interpretación que la misma Constitución no dice, como es que se requiere la unanimidad de las provincias para sancionar una ley de coparticipación federal, estamos limitando la posibilidad de discutir esta ley. Porque la Constitución no dice que debe ser sancionada por unanimidad por las provincias, sino que, justamente, lo que establece es que habrá acuerdos previos entre las provincias con el gobierno federal para que luego sea aprobado en el Poder Legislativo y, después, ratificarán las provincias.

Exactamente el mismo mecanismo que están llevando adelante ahora. Y, en todo caso, aquella provincia que decida no acompañar quedará excluida del nuevo régimen de coparticipación federal, pero no puede vetar la voluntad de los otros distritos que sí acompañarían esta ley. Eso lo dice la Constitución, no lo digo yo.

Por otro lado, la Constitución es muy clara cuando establece que el régimen de coparticipación debe estar basado en la solidaridad, en la equidad. Y es otra de las cosas que quiero remarcar, porque ahora seguimos sosteniendo una coparticipación establecida en un régimen transitorio del 88, que utiliza como coeficiente de coparticipación un índice fijo y hoy lo seguimos utilizando, profundizando la distorsión.

Les cuento que Neuquén, mi provincia, en 1988 tenía alrededor de 250 mil habitantes; hoy tiene casi 700 mil y el índice de coparticipación sigue siendo el mismo. Entonces, no nos están dando lo que nos corresponde. Por eso vamos a la Corte con demandas, porque la Nación no nos da automáticamente los fondos que nos corresponden y que son recaudados en nuestras provincias.

Por lo tanto, creo que si vamos a dar realmente el ejemplo y vamos a pensar en una Argentina equilibrada basándonos en los principios fundantes de la relación federal –la solidaridad, la subsidiaridad y la representatividad–, tenemos que darnos en serio el tiempo para pensar en una coparticipación federal con índices de distribución que tengan en cuenta la población y la productividad.

También quiero aclarar que no estoy en contra de que a la provincia de Buenos Aires se le dé lo que le corresponde, porque a veces, justamente,

pareciera que cuando uno defiende los intereses de su provincia cae en una actitud mezquina y es al contrario. Creo que si acordamos una ley federal de coparticipación, cada provincia va a recibir lo que le corresponde.

Por otro lado, hay algo que también me preocupa y que tiene que ver con lo que hablaba al principio: el avasallamiento de las autonomías provinciales que traen ínsita la autarquía, la posibilidad de financiarse, de administrarse.

Creo que la Constitución es muy clara en su artículo 121, cuando dice que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal. Habla de las atribuciones originarias de las provincias preexistentes, como muy bien lo señaló la senadora por San Luis y como lo pronunció en su momento José Gorostiaga, cuando dijo que el gobierno de las provincias viene a ser la regla y el gobierno federal es la excepción. Por eso, los estados miembro tienen facultades residuales que a veces se formulan expresamente y no es válida la delegación de estas facultades exclusivas de los gobiernos provinciales al gobierno federal.

Estas atribuciones tienen que ver con la posibilidad de darse sus propios gobiernos y con la posibilidad de organizar sus instituciones. Entonces, cuando veo el acuerdo de responsabilidad fiscal y que pretenden restringir a los gobiernos provinciales la designación de empleados en la administración o que tienen que renunciar a sus facultades tributarias, me parece que estamos cayendo en una clara inconstitucionalidad. No sé, tal vez me equivoco, pero no voy a ser cómplice de transgredir el ordenamiento fundamental que sostiene, justamente, la República.

Para terminar, quiero referirme puntualmente a lo que se ha firmado por el gobernador de mi provincia. Y quiero también aclarar que él no asistió a la reunión de comisión que se llevó a cabo el jueves pasado. Hubiese sido muy interesante para mí poder contar con algunas respuestas que no tuve desde ninguna fuente, ni desde el gobierno nacional.

Todavía no sé a cuánto renuncia Neuquén con las dos demandas que tiene ante la Corte. Entre los cálculos que pudimos sacar con mi equipo, estamos entre los 4.500 millones y los 14.000 millones. No sabemos todavía cuánto

es porque el capital más los intereses... Pero sí sé que vamos a recibir 1.700 millones de pesos en bonos, o sea, con una importante quita que, a su vez, seguramente, puedan ser descontados en el mercado. Por ende, serán menos de 1.700 millones. Es decir que en el escenario podemos recibir 1.700 y, si los conserva, podrá tener los intereses que están establecidos en la iniciativa o se tendrá menos que, además, irán a gastos corrientes para financiar –supongo– el déficit de la provincia que, de paso, acaba de pedir un endeudamiento por 10 mil millones.

Para finalizar, quiero decir que no voy a votar la reforma previsional. En su momento, tampoco voté a favor la Ley de Reparación Histórica porque, justamente, pensé que era la utilización de un sector muy vulnerable de la población para justificar una ley que no avalo desde ningún punto de vista, como fue la llamada Ley de Blanqueo.

Hoy, justamente, creo que no estamos llevando ningún avance ni ninguna respuesta a este sector que, como decía, viene siendo postergado y resulta ser la variable de ajuste cuando, en verdad, deberíamos pensar en gobiernos más eficientes en la distribución y utilización de los recursos.

Señor presidente: por los motivos expuestos, no voy a acompañar el paquete de leyes en consideración.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la señora senadora Almirón.

Sra. Almirón. – Señor presidente: dos de los logros más importantes de nuestro gobierno, y que nos enorgullecen, son la creación del sistema de reparto solidario, que eliminó las AFJP y sacó de la administración privada una suma fastuosa, y la movilidad jubilatoria, que se aplica automáticamente desde 2009 y que a partir de 2015 se aplica también a las asignaciones, otorgando certeza a los ciudadanos al asegurar que los avatares financieros no trajeran un desfaldo si debían o no otorgarse tales aumentos.

Por imposición del FMI, hoy el gobierno quiere bajar las jubilaciones para cubrir el enorme déficit fiscal. El objetivo que planteó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, es ahorrar 100 mil millones de pesos, disminuyendo las jubilaciones y las asignaciones, que abarcan a 17 millones de argentinos, quienes a

partir del año que viene verán recortados sus ingresos. Justamente, esos compatriotas argentinos pertenecen a los sectores más vulnerables.

Me pregunto y le pregunto: ¿realmente es justo que los jubilados y las personas que cobran asignación tengan que pagar las cuentas provinciales y las ganancias empresariales? Creo que no. El gobierno debería hacer los deberes para resolver el problema del déficit fiscal, que no se puede desconocer, para conseguir recursos desde otros lugares. Ahí está la diferencia entre el proyecto que llevan ustedes y el proyecto que tenemos nosotros: dónde se va a ajustar.

Cambiemos arrastra del cuello a un grupo de gobernadores para impulsar una reforma que no solamente va a afectar a los jubilados, sino también los futuros derechos previsionales que tengan los trabajadores activos. El resultado del erario de la ANSES permitirá saldar el agujero, que fue autoprovocado por el desfinanciamiento del Estado al eliminar las retenciones a las mineras, a la soja, la baja del impuesto a la riqueza y la destrucción del mercado interno. Todo esto ha llevado a la pérdida de recaudación.

Un capítulo aparte merece el desfinanciamiento que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que cada vez se va a ver más disminuido. Para esta baja se pretende cambiar la ley de movilidad y se establece una fórmula de actualización trimestral con respecto al índice de inflación, más un plus del 5 por ciento. Todos sabemos que la inflación para los jubilados no es la misma que para los trabajadores activos. Los alimentos, los remedios y los servicios, entre otros, afectan a los jubilados.

Con respecto al pacto fiscal, si bien lo han firmado los gobernadores, la verdad es que tampoco podemos ser cómplices del avasallamiento de las autonomías provinciales y generar, a su vez, una total desigualdad con respecto a la provincia de Buenos Aires.

Justamente, las provincias del Norte son las que más ayuda necesitan del gobierno nacional y de sus recursos. Corrientes no es una provincia endeudada, pero no voy a ser yo, desde esta banca, quien autorice un endeudamiento para nuestra provincia. El único que nos sigue endeudando es el gobierno nacional y pretende que este desfalco financiero lo sigan pagando las provincias.

Recuerdo cuando se votó la ley de los fondos buitres. Ahí también nos hablaban del futuro y ahí también escuché muchas veces a muchos legisladores hablar de que íbamos a tener futuro y de que nos estábamos desendeudando. Muchos compañeros acompañaron el pago a los fondos buitres con promesas de beneficios a sus provincias, que nunca llegaron. Y lo único que están generando es mayor endeudamiento. Hoy tenemos una deuda que supera los 200 mil millones de dólares. ¿Quién va a pagar esto? Nuevamente, los sectores de menores recursos.

Recuerdo también cuando se votó la reparación histórica, que de histórica no tiene nada y mucho menos de reparadora: de los pocos 200 o 400 pesos que se les brindó a los jubilados, hoy, con la votación que van a practicar, les van a recortar el doble. Y así seguimos.

Le pedimos al gobierno que gobierne para todos, que deje de excluir, que deje de excluir a los que más lo necesitan. No sé cómo van a explicar los gobernadores, en el marco de esa modernización que firmaron en el consenso, cuando tengan que ajustar en el empleo público, cuando tengan que decirles a sus empleados públicos que no les van a poder aumentar el sueldo. Corrientes tiene alrededor del 35 por ciento de empleados públicos.

Lo único que veo de positivo en este consenso es la incorporación de los municipios. La verdad es que en la provincia de Corrientes tenemos muchos municipios que vienen sufriendo recortes de coparticipación, pero también sé que esto se podría realizar de otra manera si hay decisión política.

La verdad es que no pretendo ser yo quien desde esta banca –jamás lo haré– vote en contra del pueblo correntino. Hoy asumo una nueva gestión en la provincia de Corrientes, a la cual voy a acompañar, pero no bajo la espada de Damocles. Y mucho menos ajustando a nuestros jubilados.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora. Senador Mera: tiene la palabra.

Sr. Mera. – Gracias, señor presidente.

Viene a este recinto un pacto fiscal más. Un acuerdo de los tantos que ha habido en estos últimos años en la Argentina; una Argentina que ha venido caminando a los tumbos durante mucho

tiempo. Y no es por casualidad. Hace cuarenta años terminamos un proceso que se llevó a 30 mil argentinos, entre los que estaban dirigentes políticos, sindicales y empresariales, sin duda, de los más lúcidos que teníamos. Y quedamos en la Argentina con los que quedamos.

Por eso quiero, antes de hacer un análisis de los tres proyectos en tratamiento –y porque es una causa de la emergencia permanente en la que vivimos–, hacer una reflexión respecto de dos argentinos que han muerto en este último tiempo en hechos que involucran a fuerzas de seguridad, por cumplimiento, mal cumplimiento o exceso de cumplimiento de órdenes judiciales, lo cual claramente pone de nuevo a las fuerzas de seguridad en la discusión y en el debate.

Creo que algunos funcionarios no deberían apurarse por apoyar ese accionar, sino que deben apurarse porque vivamos en un estado de derecho. Algunos, cuando los involucran las denuncias, rápidamente dicen: “Esperemos que la Justicia falle”, pero cuando tienen que salir a defender, no esperan a que la Justicia falle. Esperemos que los procesos judiciales sean bien claros respecto de qué pasó con esos hechos de muerte que enlutan al pueblo argentino.

En estos tres proyectos, señor presidente, que vienen a nuestra consideración, sobre consenso fiscal, régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas y reforma previsional, quiero hacer un planteo desde dos lugares. Primero, desde la responsabilidad política, como alguien que abraza la política y con un mandato circunstancial como senador de la Nación, y, después, como miembro de un cuerpo de uno de los poderes del Estado.

Hemos hablado y escuchado mucho hablar en este último tiempo de populismo, categoría que no comparto porque la creo medio importada, pero entiendo qué se quiere o se pretende decir y qué se pretende esconder muchas veces cuando se habla de populismo.

No quiero caer en el populismo de la oposición que este país ha vivido durante muchos años. También hemos padecido promesas de 82 por ciento móvil, que los trabajadores no iban a pagar ganancias, hemos escuchado que la inflación se bajaba muy fácil. Hoy tenemos que escuchar sobre la responsabilidad de los gobernantes en cuanto a lo que tienen que proponer cuando abandonan el populismo de la oposición.

Entiendo que el acuerdo es importante en el sentido de que veintitrés gobernadores y el Poder Ejecutivo nacional se han sentado a la mesa a discutir –un largo debate, por largo tiempo, con idas y vueltas–, y hoy somos un eslabón más para que este acuerdo se apruebe o se desapruebe. No tenemos mucho margen de corrección porque no somos parte firmante de ese acuerdo. Pero sí quiero hacer algunas consideraciones.

La primera es que este nuevo pacto fiscal tiene origen en el vencimiento del que está en vigencia. Quiero dividir el tratamiento de este pacto fiscal en cuatro grupos. La provincia de Buenos Aires, por un lado, la CABA por otro, las provincias argentinas que firmaron el pacto y la provincia de San Luis, a la que me voy a referir brevemente porque entiendo que sus representantes lo han hecho y lo harán.

Quiero basarme en que la ley pareja no es rigurosa. Veo en este acuerdo que a la provincia de Buenos Aires se le entrega dinero contante y sonante ante la sola presentación de una demanda –21.000 millones para el año que viene y 45.000 millones para el otro año– para compensar algo que está en discusión y que la provincia de Buenos Aires hace muchos años no tiene.

A la CABA, por un decreto del presidente de la Nación, en el año 2016 se le subió la coparticipación y lleva en el año 2016 17.000 millones más de lo que su coparticipación manda estrictamente, por un decreto del Poder Ejecutivo nacional...

Sr. Presidente (Pinedo). – Señor senador, el senador Braillard, de Corrientes, le pide una interrupción.

Sr. Braillard Pocard. – Pedía el uso de la palabra para después.

Sr. Presidente (Pinedo). – Perdón, señor senador. Siga en el uso de la palabra.

Sr. Mera. – Para el resto de las provincias firmantes del pacto son bonos, exigencias, mientras que a la CABA, para sintonizar ese aumento que se le ha dado, no se le pone ningún tiempo. Algún día a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para entrar dentro de la sintonía del pacto, se le reducirá. No dice ni cuándo ni en cuánto. Evidentemente, hay tratamientos diferenciales.

Respecto de la provincia de San Luis quiero ser muy concreto y honesto. El Senado no puede permitir que la provincia de San Luis, que los hermanos puntanos, sufran ningún padecimiento ni merma por ejercer su autonomía a través de sus legítimas autoridades por no firmar un pacto que creen que no les conviene. Nadie en su sano juicio, si se pone en condición de puntano, puede suponer que le conviene firmar un pacto para cobrar a los premios, cuando hace años vienen peleando y tienen un título ejecutivo del máximo tribunal de la Nación que dice que hay que pagarles esto a los puntanos.

Tenemos que ser muy contundentes –hoy es San Luis, pero mañana podrá ser otra provincia– en impedir y no permitir que, si la provincia de San Luis decide no firmar el pacto, que lo haga porque está dentro de sus atribuciones federales y constitucionales y el Senado en pleno tiene que trabajar para que eso se respete.

Después, presidente, en el capítulo II del consenso fiscal, en los compromisos que asume el Estado nacional, la compensación a la provincia de Buenos Aires, mágicamente, nosotros decidimos que no es coparticipable. Nosotros, un cuerpo que no tiene nada que ver con la provincia de Buenos Aires, decidimos que un ente como es el municipal, que es absolutamente federal, solo en el caso de la provincia de Buenos Aires no hay que coparticiparlo a los municipios.

Desde ya dejo asentada mi posición: esto es de absoluta inconstitucionalidad y, por más que lo firmemos, no tiene validez alguna que, en impuestos de carácter coparticipables, nosotros determinemos que en la provincia de Buenos Aires no se coparticipan. Aparte, es a la única provincia que se le permite gasto social –que no sé qué querrá decir–, al resto de las provincias solo infraestructura; a la provincia de Buenos Aires infraestructura y gastos sociales. Por ahí suponen que es la única provincia que tiene necesidades sociales.

Pero no quiero dejar de rescatar, como ejercicio, que mi gobernadora ha firmado este pacto. Ella es la que ejerce la representación de la provincia. Cada uno sabe dónde le ajusta el zapato y entiendo que ella tendrá motivos. Bien ha dicho el senador Castillo que la gobernadora ayer estuvo con los intendentes y todos están más o menos de acuerdo, así que yo no voy a ser un obstáculo para acompañar ese proyecto.

Respecto al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno lo creo muy saludable, presidente. Si no, terminan pagando siempre provincias que hacen las cosas bien, por las que las hacemos mal. Justos por pecadores. En esto, vuelvo a involucrar a la provincia de San Luis, como a la provincia de La Pampa, que entendemos que es una provincia muy bien administrada, como a la provincia de Santiago del Estero y como habrá otras provincias argentinas. Que tengamos estándares de gestión y de transparencia, de presupuesto –que los presupuestos no sean unos dibujos–, que estén en inteligencia con el gobierno nacional, me parece extraordinario. Y me parece extraordinario que también haya un límite al endeudamiento. Lo que no entiendo es por qué la Nación no se autoimpone un límite al endeudamiento.

Me parece muy sano involucrar en la gestión a los municipios, a las provincias, a la Nación, que trabajemos en conjunto. Me parece un gran paso adelante este acuerdo. Ahora, me parecería muy justo que también la Nación, entre proyectos que están presentados en esta Cámara, tenga un límite a un endeudamiento que pareciera no tener fin.

Después se aplica una ratio que también me parece saludable entre empleo público y empleo privado; mantener una relación, pero vuelvo a algo que creo que dijo el senador Aguilar: si nosotros tratamos igual a los desiguales, es muy difícil, en algunas provincias, generar empleo genuino y privado. Tenemos que aplicar la Constitución. Y también la Constitución habla de las herramientas para un desarrollo armónico de la Nación y en ese desarrollo armónico reconoce las desigualdades y las inequidades entre las provincias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Mera. – Termino, presidente.

Salto al tema más álgido, que tal vez sea la fórmula jubilatoria.

Lo primero que quiero resaltar es que estamos hablando de cómo les vamos a aumentar a los jubilados, nadie está hablando de que le vamos a bajar los haberes a los jubilados.

Lo segundo que quiero resaltar es que el 82 por ciento móvil se garantiza a las jubilaciones

mínimas. Este es un logro, sin lugar a dudas, para aquellos que tienen los haberes más bajos.

Lo tercero que quiero decir es que, cuando aprobamos la Ley de Reparación Histórica, hay una comisión que hay que crear, que es la que va a determinar definitivamente cuál es la política de jubilaciones y pensiones desde un análisis integrado. Y esto suponemos, de acuerdo a los compromisos asumidos, que en un año se estará rediscutiendo la política de haberes jubilatorios, de pensiones, de edad. Sobre la edad, una sola reflexión: me parece que hay que abordar el tema, me parece interesante, por los que no se quieren jubilar, pero también hay que tener cuidado, presidente, que estamos en un tiempo que se nos termina de bono demográfico. Si nosotros no aprovechamos la capacidad de trabajo que tenemos en nuestras generaciones jóvenes, vamos a desperdiciar una oportunidad. Y lo tenemos que hacer junto con el blanqueo laboral.

Por último, creo que falta un ajuste de la política. Nosotros no podemos pedir que nadie se ate a un crecimiento del país solo con la posibilidad de la inflación más un porcentual de un promedio de aumento salarial. Creo que la misma fórmula tiene que ser el techo para el tratamiento de los salarios de la política: de los legisladores, del presidente, de los ministros, de los secretarios. Y en ese sentido voy a presentar un proyecto, que espero muchos acompañemos, para que todos tengamos como techo la nueva fórmula jubilatoria que pretendemos aprobar.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el senador Linares.

Sr. Linares. – Señor presidente: dos pequeñas acotaciones antes de hablar de los proyectos que estamos tratando aquí.

Como mencionó la senadora Labado, somos algunos los que terminamos en esta sesión nuestro paso por este Honorable Congreso y nos toca el desgraciado momento de hacerlo con dos hechos altamente graves para el país. Uno ya fue mencionado por Pino Solanas y también por el senador preopinante: el grave episodio del lago Mascaridi que muestra la clara incapacidad de la política para resolver un conflicto que está fuera de escala. Es imposible que alguien pueda ordenar que tropas con estos armamentos no puedan desalojar por el diálogo a grupos aborígenes.

Por eso convocamos a que se hagan todos los esfuerzos para coordinar que este tipo de situaciones que se vienen repitiendo tengan un repudio generalizado.

El segundo, una acotación mínima más. Sé que estaremos votando después una resolución conjunta de agradecimiento por el tema del ARA “San Juan”. Quiero solidarizarme con la angustiada situación de los familiares que están hoy esperando noticias de lo que ha pasado con ese submarino.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Julio C. C. Cobos.

Sr. Linares. – Me parece que, cumpliendo con su deber, gente que ha optado por una profesión de riesgo ha tenido un accidente, pero quiero solidarizarme porque ellos son o fueron marinos al servicio de la patria.

Ahora, viniendo a los temas que vamos a tratar, en primer lugar asumo la responsabilidad de ser senador por la provincia Buenos Aires. Por lo tanto, en lo que hace al pacto fiscal creo que se ha dicho aquí bastante en lo técnico. Pero quiero defender esto porque el año pasado los tres senadores de la provincia Buenos Aires que no pertenecemos al oficialismo actual, convocados por la señora gobernadora, presentamos un proyecto de recuperación de estos fondos que la provincia había perdido durante muchos años y que, con los distintos gobernadores, veníamos insistiendo en que le quitaban la posibilidad de autonomía, de planificación propia y de estrategia de un sistema de desarrollo económico mejor.

Quiero hacer un comentario más. Cuando se vota este fondo, allá por el año 91 o 92, había un 10 por ciento de ganancias para la provincia de Buenos Aires. Se hizo un acuerdo con las provincias también, que tomaban el 4 por ciento, se distribuía en las provincias ese 4 por ciento. Esos 650 millones de pesos, que eran más o menos el 10 por ciento de ganancias, en el uno a uno serían 650 millones de dólares.

En ese momento, ese fondo –para los que no son de la provincia de Buenos Aires y hablan del tema de la coparticipación con los municipios– estaba destinado exclusivamente al área metropolitana. No iba nada al interior de la provincia de Buenos Aires. Obviamente,

la provincia de Buenos Aires, de sus recursos propios, al no tener que apoyar eso, no tenía la necesidad de trasladar muchos de los recursos que quedaron en el interior.

En efecto, esto fue cuestionado porque, incluso, había un ente que se dedicaba exclusivamente a ejecutar ese fondo, que hacía desde escuelas hasta cloacas, o sea, infraestructura, infraestructura social. Siempre fue sospechado, era un ente complejo. Cuando en la provincia de Buenos Aires es congelado este fondo, se dice claramente que todo lo que excediera a los 650 millones, a partir de ahí, se distribuía entre las provincias. De manera que la provincia de Buenos Aires quedó con un fondo fijo y, obviamente, por el tema de la devaluación, por el tema inflacionario, hoy el 10 por ciento de ganancias es un número absolutamente distinto: el año pasado era de alrededor de 45.000 millones de pesos, de los cuales la provincia de Buenos Aires cobra solamente 650 millones.

Por lo tanto, me parece que hay una distribución que no estaba y, obviamente, la provincia pretende que se le haga un resarcimiento, no a costa de las otras provincias, pero queremos recuperar para la provincia esta posibilidad de desarrollos más autónomos.

Debo decirles que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes y tiene el 36,6 por ciento de las necesidades básicas insatisfechas.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2° del Honorable Senado, senador Adolfo Rodríguez Saá.

Sr. Linares. — Por eso, yo presenté uno de los proyectos, otro lo presentó la senadora Leguizamón y el senador Abal Medina y otro el senador Pinedo en nombre del oficialismo el año pasado y los tres tendían, sobre esa base, a recuperar fondos que le permitieran, al menos, un equilibrio fiscal.

A mí me tocó ser diputado provincial el único año de los últimos veinticinco en que la provincia tuvo un superávit de cien millones de pesos por una circunstancia especial: un año antes había habido una devaluación asimétrica que le había permitido equilibrar las cuentas, pero, de ahí en más, el déficit de la provincia fue, al año pasado, del orden de los 26.000 millones de pesos.

Por lo tanto, este resarcimiento, no a costa de las provincias, me parece un hecho positivo porque, de alguna manera, nos ubica a nosotros otra vez en una provincia —esté quién esté en el gobierno— con un equilibrio fiscal mínimo, pero, al menos, con una perspectiva hacia adelante distinta.

En cuanto al tema de la responsabilidad de las provincias y de la Nación en asumir el compromiso de hacer unas correcciones en cuanto a algunos impuestos distorsivos, me parece que es un esfuerzo compartido y que es un buen acuerdo en el compromiso de un futuro distinto al que tenemos, que es complicado. Ya lo mencionó, creo que claramente, el senador Mayans, de que este paquete que hoy estamos tratando viene aquí con una reforma porque estamos con problemas.

Me parece que este compromiso de responsabilidad con los déficits y las correcciones de algunos impuestos puede ayudar a que todos tengamos otra vez en mente la necesidad de un equilibrio fiscal en las provincias y en la Nación. Esto creo que es muy importante.

Cuando yo empecé mi gestión de diputado en la provincia de Buenos Aires, ingresos brutos —que es un impuesto altamente distorsivo—, en diciembre de 2005, representaba el 68 por ciento de los recursos propios de la provincia. Seis años después, cuando vine hacia este Senado, ingresos brutos representaba el 72 por ciento en IVA y el impuesto a los sellos había pasado a ser el segundo, con lo que son dos impuestos que me parece que hay que reverlos, porque el impuesto de ingresos brutos se paga aunque no se trabaje. No sé cómo será en otras provincias, pero me parece que es claramente una necesidad, si apostamos al futuro, hacer una corrección impositiva donde estos sean temas centrales.

Por último, dos comentarios con respecto a la ley de reforma previsional. Nosotros, dentro de dos años, debemos tener un nuevo régimen previsional, o sea, esto es absolutamente transitorio. Ahora, en esa transitoriedad, me parece claro que no se puede transferir de los sectores de jubilados al sector nacional para cerrar este pacto, de alguna manera, por algún lado, a costa de este sistema que me parece que debe ser analizado o debió ser analizado con más tiempo.

No estoy de acuerdo con la modificación del índice, porque la verdad es que cambiar el índice que había por esto, me parece que es un retroceso. Pero tuvimos apenas un rato. Me pareció sí interesante que el Ejecutivo, al menos, tomara una propuesta de la oposición para una mejora, pero cuando uno mira el resultado de lo que será esa mejora, la verdad es que es insignificante.

Por otro lado, el ajuste que habría que hacer en marzo, de acuerdo a los índices que hoy están vigentes, incide mucho más de lo que correspondería con este índice que empieza a regir ahora. Sería, el semestre, alrededor del 12 por ciento y sería bastante menos con el índice del último trimestre que se plantea aquí. Por lo tanto, me parece que habría que haber analizado o correr el momento en que se toman los índices, porque eso permitiría hacer el primer ajuste con lo atrasado, que es –me parece– inconstitucional cambiarlo.

Por otro lado, con relación a esta fórmula de ajuste que planteó, en su momento, el senador Pichetto y que está, de alguna manera, plasmada en el proyecto que estamos tratando, creo que una polinómica siempre es mejor que una fórmula que tenga un solo índice, porque siempre da posibilidades de equilibrio.

Ahora, en estas condiciones de dos índices, me da la sensación de que, en función de la necesidad de los jubilados, teniendo en cuenta el costo de remedios y todo lo que corresponde a un jubilado, como se ha hablado aquí de un índice vinculado exclusivamente a los jubilados, debería haber tenido un tratamiento mucho más equilibrado para que no haya pérdidas tampoco, como ha habido en las provincias, en este régimen transitorio que va a regir por los próximos dos años. Por lo tanto, me parece que este paquete, que debió haber sido uno solo, una ley sola porque tiene vasos comunicantes, pero que lo han mandado en tres, tiene algunos puntos positivos y otros que son, claramente, deficitarios.

Nada más.

Sr. Presidente (Rodríguez Saá). – Senadora por Mendoza, Fernández Sagasti.

Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, señor presidente.

La verdad es que los tres proyectos que hoy estamos tratando tienen, a mi modo de ver, mu-

cho olor a pasado. Lo cierto es que a la derecha argentina, a lo largo de la historia, nunca se le ha caído una idea novedosa. Lo que a mí me preocupa es la falta de creatividad para resolver los problemas económicos que tiene la Argentina, macroeconómicos que tiene la Argentina.

Para colmo, se cae nuevamente en recetas que, incluso, están guionadas desde afuera, por el Fondo Monetario Internacional o, incluso, por la OCDE, que el gobierno ha confesado que desea abrir de par en par las puertas de ese organismo, que ya sabemos lo que significa.

Entonces, caen de nuevo en la flexibilización laboral, en la destrucción del sistema previsional, en la apertura del mercado externo y la verdad es que no vemos ni una idea nueva. Entonces, llaman a los gobernadores para que firmen un pacto fiscal que, además de todos los argumentos y de todos los ejes que dijeron la senadora Negre de Alonso y muchos senadores acá, a lo largo del debate, uno de sus ejes centrales es bajar los juicios que tienen las provincias con la Nación para liberar la capacidad de endeudamiento de la Nación a efectos de que pueda seguir endeudándose. Además, ese endeudamiento –que va a parar a tapar el crecimiento del déficit fiscal–, esa plata, va a parar a la provincia de Buenos Aires. ¿Y quién paga esta fiesta, una vez más en la historia argentina? Los jubilados.

Sobreactúan la comunicación explicando que las modificaciones a la ley previsional son para ahorrarse 100 mil millones de pesos. Ahora bien, nunca dicen y siempre callan que hay más de 210 mil millones de pesos que se van en intereses de las LEBAC y que hemos llegado a un billón en LEBAC. Entonces, les sacamos a los jubilados para bancar la fiesta financiera. Esto es “macrismo explícito”, esto es lo que yo denomino macrismo explícito.

¿Cómo puede ser que la única alternativa en la Argentina para tapar el hueco del déficit fiscal y pagar la deuda externa sean los jubilados? Recuerden lo que nos decían a nosotros durante la campaña y durante muchos años: “Con la plata de los jubilados pagan las *netbooks*”, lo cual, además, era mentira, porque salían del Tesoro nacional. “Con la plata de los jubilados financian obras”. “Con la plata de los jubilados rescatan las empresas para que no se pierdan puestos de trabajo”.

Y ustedes: asalto armado, a mano armada, a los fondos de los jubilados: 120 mil millones de pesos que salen de la caja de las jubilaciones para tapar el déficit fiscal y el endeudamiento externo.

Como bien decía el senador preopinante, esto se viene con un escalonamiento de pasos. Y lo dijo también el propio presidente de la Nación en la conferencia que dio después de las elecciones. Claramente estamos yendo, nuevamente, a un régimen de capitalización privada o, como mínimo, a un régimen mixto.

Y vinieron leyes. El primer paso fue la denominada falsamente “de reparación histórica”, a través de la cual estipularon la liquidación paulatina del Fondo de Garantía de Sustentabilidad mediante la venta de las acciones que eran de titularidad del Estado. Además, subieron la edad para la pensión universal a las mujeres de 60 a 65 años, cuando nos llenamos la boca hablando de paridad de género. Sin embargo, la subieron a 65 años. Y ahora meten sutilmente los 70 años.

Segundo, para agudizar el desfinanciamiento de la ANSES o del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mandan un proyecto de ley que establece rebajas patronales. Además, eliminan, mediante el pacto fiscal, la coparticipación del impuesto a las ganancias.

Y hoy, como un paso más de ese escalonamiento del que vienen hablando y que no tiene otro rumbo que no sea el de la capitalización, el de la privatización, les estamos rebajando las jubilaciones a nuestros jubilados y pensionados. ¿Por qué digo esto? Porque hoy la jubilación mínima es de 7.246 pesos. Eso reciben los jubilados de la Nación Argentina de mínima. Si esas actualizaciones se hubieran hecho con el régimen que propuso el gobierno nacional, es decir, a través de los costos a precios del consumidor con las estadísticas de las consultoras privadas que hoy gobiernan el INDEC, hoy la jubilación mínima sería de 5.470 pesos, es decir 1.500 pesos menos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado, senador Juan Carlos Marino.

Sra. Fernández Sagasti. — Si nosotros proyectamos las tres fórmulas que hay a marzo de 2018, el aumento con la actual fórmula sería de 8.200 pesos, con la fórmula que propuso el

gobierno nacional sería de 7.617 pesos y con la fórmula que propusieron algunos señores senadores sería de 7.660 pesos. Vale decir que la diferencia entre la fórmula presentada por el Ejecutivo nacional y la fórmula que hoy se propone en este recinto es de 43 pesos: un kilo de pan, para graficarlo en términos bien gráficos. Por eso, obviamente, el gobierno nacional se demoró 15 minutos en aceptar la propuesta, si eran 43 pesos: se llevaba 112 mil millones de pesos de la caja máxima que tiene la Nación, que es la de nuestros jubilados.

Entonces, por qué digo que cada ley que mandan del sistema previsional va rumbo a un sistema de capitalización o, a lo sumo, mixto. Los funcionarios repiten todo el tiempo, si los uno escucha bien, el tema de la inviabilidad del sistema. Dicen que este sistema de reparto, público y solidario, que establece la redistribución del ingreso a todos los argentinos, es inviable, que ya es inviable, que el año pasado ya generó pérdidas y establecen la idea de cuántos trabajadores activos debe haber por cada jubilado que existe en la Argentina.

Además de desnudar la intención que tiene el Poder Ejecutivo nacional —que ha sido propuesta por el FMI y la OCDE, como venimos diciendo—, nuestro sistema es multipilar y no solamente se financia con el aporte de los trabajadores y de los empleadores, sino también con los impuestos como, por ejemplo, el IVA. Además, este argumento del gobierno nacional se cae por su propio peso. Porque les tengo una noticia: en 2015, además de dejar una tasa de cobertura de casi el 98 por ciento de jubilados y pensionados en la Argentina, dejamos el haber mínimo más alto de la historia de la Argentina, pero, sobre todo, dejamos superávit. Entonces, se puede hacer, si somos creativos y realmente estamos convencidos de que este sistema es el ideal para todos los argentinos, sobre todo, para todos y todas las argentinas.

Yo simplemente quería decir —lo vengo diciendo en varios discursos— que para mí sería mucho mejor que el gobierno nacional hablase claramente, que desnudase su discurso, que sincerase el discurso, que digan que básicamente no les interesa encontrar financiamiento para el sistema previsional. Todo lo contrario: lo están desguazando. Quieren generar, paso a paso, una gran crisis para después decir que la cuenta de

la ANSES no da: “Entonces, hay que crear otro sistema, hay que ir a un sistema mixto, hay que ir a un sistema de capitalización”.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Federico Pinedo.

Sra. Fernández Sagasti. — ¡No nos tomen por tontos! Allá afuera, ¿cuánta gente había reclamando por esto? Porque con esto no solamente pierden los hoy jubilados, sino que también pierden los hoy trabajadores activos, sobre todo, ¡sobre todo! Por eso los gremios hoy están afuera y las organizaciones sociales también.

Pero si ustedes me dijeran que este sistema, que este proyecto que tiene el gobierno nacional, no se ha probado en la Argentina, tal vez uno diría, aunque no creo: “Les doy el beneficio de la duda; probemos con esto, que tal vez funciona”. Pero sabiendo cómo terminó la historia, permítanme decirles que estos tres proyectos que proponen tienen mucho pero mucho olor a pasado.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senadora. Tiene la palabra la señora senadora Aguirre.

Sra. Aguirre. — Gracias, señor presidente.

Debido al estado de mis cuerdas vocales, voy a pedir autorización para insertar, no sin antes decir que estoy de acuerdo con quienes se manifestaron en votar en contra de las leyes que están en discusión.

Quiero decirle también que en el año 2007 llegué a la Cámara de Diputados de la Nación y una de las primeras leyes que me tocó votar fue, precisamente la que dejaba sin efecto el régimen jubilatorio de capitalización. Además, fui empleada previsional, así que del tema conozco mucho.

Quiero decir también que para mí fue un honor estar en esta Cámara. Hoy es mi última sesión como senadora por la provincia de La Rioja. Fue un honor también, durante ocho años, votar leyes a favor de nuestra gente, votar leyes que reconocían y ampliaban derechos. ¡De esos ocho años estoy orgullosa!

Estos últimos dos fueron de mucho dolor, pero todo lo que viene me parece que es peor. ¡Así que créanme que agradezco a Dios no

quedarme en este Senado, porque la verdad, no creo merecer votar en contra de todo lo que tuve el honor de votar los ocho años anteriores! Así que muchas gracias.

Y a las compañeras y compañeros que se quedan, la verdad, quiero desearles éxito y contar que en La Rioja, en ese pequeño suelito argentino de ese país profundo del que siempre nos hablaba nuestra presidenta, van a tener siempre una compañera dispuesta a luchar por los derechos de los que menos tienen.

Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, senadora. Senadora Fellner, tiene la palabra.

Sra. Fellner. — Señor presidente: hay palabras o conceptos como “poco serio”, “irresponsable”, que “usan al Senado como una escribanía del gobierno”, que “faltó tiempo para estudiar”. ¡Cuántas veces sentada acá, en esta banca, lo he escuchado en voces de senadores que, al cambiar de oposición al oficialismo, ya parece que esas palabras no tienen sentido!

¡Claro! Alguien me podría decir que son conceptos subjetivos. Ciertamente, pero lo que es objetivo es cuánto se tarda, cuántas veces se escuchan en el tratamiento de las distintas leyes. Y, mire, si hay algo que ha pasado en las leyes —en todas las leyes—, ha sido que se ha abierto este Senado, se ha abierto el debate en las comisiones, se han tratado a veces días enteros para escuchar a todos. Y, muchas veces, los conceptos dados por las distintas organizaciones, por los académicos, por las distintas visiones que pueden tener unos u otros, eran usados en este recinto para decir “sí” a un proyecto de ley o para decir “no” a un proyecto de ley.

Sin embargo, para este paquete de reformas, en donde se habla de cosas que nos van a afectar directamente a las provincias, en donde se habla de que los van a afectar, directamente, nada más y nada menos que a nuestros jubilados, a las asignaciones universales, ¿cuántas horas fueron? En una sola reunión de una sola comisión, cuando ahora —como escuchaba esta mañana decir a alguien—, un proyecto de ley pasa por cuatro o cinco comisiones y tenemos que hacerlas en plenario.

¡Un paquete de reformas, una sola comisión y en una tarde, sin escuchar a nadie, sin abrir las puertas de este Senado para escuchar a

las distintas organizaciones de jubilados que querían venir a hablarnos y nos han mandado y nos han llenado nuestros mails hablando de lo que significa esta reforma! Hoy a la tarde, la CAM también nos está haciendo llegar a todos nosotros para que nos fijemos, porque vamos también contra las mutuales con estas reformas que hoy vamos a votar en este recinto.

Por supuesto, en todo el mundo y en la Argentina también, debemos volver a discutir lo que es el SIPA –el Sistema Integrado Previsional Argentino– pero con dos bases. Las bases son la equidad distributiva y la sustentabilidad financiera. Esas son las dos bases con que tenemos que volver a pensar, a plantear y a discutir nuestro SIPA. Pero, cuando la discusión se centra solamente en el déficit fiscal, es cuando creo que estamos perdiendo una parte importantísima de esa discusión en este sistema de previsión social, porque estamos dejando de lado la parte de lo que significa el ser humano, que es esta distribución equitativa de toda la cobertura. Entonces, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no tener la mejor ley? ¿Por qué solamente pensar en cómo hago para solucionar el déficit fiscal? Lógicamente, si hay algo en rojo, alguien lo tiene que pagar. Y se lo estamos haciendo pagar a los jubilados.

En mi provincia se habla otra vez de espejitos de colores. ¡Claro que sí! Recién lo hablaron acá. Se habla de que los que cobran van a tener el 82 por ciento. ¿Qué pasa con el resto? Porque solamente se habla de pagar el 82 por ciento a aquellos que tienen los treinta años de aportes. ¿Y qué pasa con los otros? ¿No tienen el mismo derecho aquellos que tienen regímenes especiales y que quizá no necesitaban de esa cantidad de años de aportes para jubilarse? ¿Ellos no tienen el mismo derecho que aquellos que tienen esa cantidad de años de aportes? ¿Por qué no discutirlo, por qué no pensarlo, por qué no plantearlo? ¿Por qué quedarnos solamente en una franja? Son todas cosas que podríamos haber discutido, podríamos haber pensado y, después, cada uno tomar la determinación que quisiera. Por lo menos, haber podido pensarlas y discutir las en este paquete de reformas que estamos tratando.

Se habló también –y era interesante y está muy bueno– de por qué no pensar, en lugar de aplicar el índice de precios al consumidor, en

el peso de los medicamentos en esa canasta de consumo, que es lo más usan, que vamos a usar todos y que algunos ya los estamos usando. ¿Por qué no pensar en una canasta especial para establecer ese aumento cuando todos sabemos lo que han aumentado los medicamentos?

Alguien decía que la inflación general desde el 2015 hasta hoy es de un 70 por ciento y los medicamentos aumentaron un 150 por ciento. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esa canasta de precios al consumidor? ¿Por qué no pensar en lo que más usamos cuando somos viejos, que son los medicamentos, que ahora es lo que más aumenta? ¡Mucho más que la inflación en estos últimos años! ¡Además, con los recortes del PAMI, que todos lo estamos sabiendo! Ya no hay esa cobertura del ciento por ciento en los medicamentos, hay muchos medicamentos que han sacado.

Se viene el CUS: la cobertura universal de salud. Vamos a tener una prestación mínima y, cuando el jubilado haya estado internado durante una determinada cantidad de días, a partir de ahí va a tener que pagar. ¡Y, si encima les estamos recortando la jubilación, díganme con qué va a pagar! Deberíamos haber tenido el tiempo para pensar y discutir estas cosas y quizá poder así avanzar en una reforma.

Con respecto a las otras dos, ¡claro que lo dicen y tienen toda la razón! Son los gobernadores los responsables. “Y, si ellos lo han firmado, es porque cada gobernador sabe dónde le ajusta el zapato”, recién escuchaba al senador por Catamarca. Y también sabe dónde le ajusta el zapato y dónde no el gobernador de San Luis, que no lo firmó.

Para no repetir lo que ya se ha dicho acá, se habla de que hay que terminar con los regímenes especiales. Y dicen: “Lo han firmado los gobernadores”. La gente –y estos son los espejitos de colores– ve “jubilaciones de privilegio” y enseguida dice: “Sí, sí, sí, terminen con las jubilaciones de privilegio”. Son los regímenes especiales que tenemos en las provincias como, por ejemplo, los de nuestros docentes.

Mire: yo también aplaudí, yo también dije: “Qué bueno que esto se pueda dar en mi provincia”. Les voy a decir qué día fue: el 24 de abril de este año 2017, poco antes de las elecciones. El gobernador Gerardo Morales anuncia el 82 por ciento móvil para los docentes de mi

provincia en cumplimiento de la ley. Se habla de dignidad salarial, se habla de que gracias al liderazgo político del gobernador podemos hacer realidad este sueño de todos los docentes jujeños. ¿Y ahora? ¡Si hay que acabar con los regímenes especiales! ¿Cómo vamos a hacer?

Por todo esto, presidente, voy a votar en contra de todo, porque no se puede jugar con la ilusión de los docentes, no se puede jugar con la calidad y con la posibilidad de tener mínimamente una calidad de vida para nuestros jubilados.

Gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el señor senador Luenzo.

Sr. Luenzo. – Gracias, señor presidente.

Antes de abordar el tema que hoy nos está ocupando, quiero reconocer la solidaridad de muchos pueblos hermanos, de potencias que hoy están trabajando en un marco de extraordinaria solidaridad para tratar de encontrar a los 44 tripulantes del ARA “San Juan” y, en esto, el rol que lleva adelante la comunidad de Comodoro Rivadavia, nuevamente epicentro, como lo fue allá en 1982 durante la guerra del Atlántico Sur. Esta solidaridad hay que ponerla de manifiesto: el compromiso que tiene nuevamente la Patagonia con un tema tan delicado como es la desaparición de este submarino. Vaya este reconocimiento.

Vamos al tema que hoy nos ocupa.

Creo que estar hablando de consensos ya es un dato significativo en la República Argentina. Estar hablando de acuerdos me parece que es un paso adelante. En una sociedad de desacuerdos permanentes, en donde nos tiramos permanente con muertos para tratar de capitalizar algo en la mezquindad política, me parece que poner y jerarquizar un acuerdo de estas características, en principio, como marco, realmente es muy saludable para la vida de las instituciones, particularmente en la relación que tiene que tener el interior con la Presidencia de la República.

Y luego estará la particularidad de cada una de las provincias, con problemas diferentes, con posicionamientos distintos, con necesidades, algunas más urgentes o no. Lo cierto es que cada uno, desde su lugar, tiene que decir si este consenso es bueno, es malo, es regular o es aceptable.

En lo que respecta a la provincia del Chubut, es un acuerdo que ha sido celebrado por el propio gobernador Mariano Arcioni. Ha puesto en valor sus características y nos permite comenzar a ordenar definitivamente las cuentas.

Somos una provincia donde realmente hoy se hace casi muy difícil poder afrontar el pago de salarios. Tenemos un déficit que está superando los 6.000 millones de pesos y este no es el resultado de una o dos gestiones, sino el resultado crónico de un desfase donde mucho ha tenido que ver el unitarismo y también administraciones que realmente nos han llevado a una situación de extrema vulnerabilidad.

Por esa razón, el ordenamiento de las cuentas públicas es un dato favorable –por lo menos, ante nuestra realidad–, con los compromisos que obviamente asumió el Estado nacional. Son compromisos que se han ido modificando y esto también hay que ponerlo en valor.

El trabajo mutuo con el Ejecutivo nacional, las propuestas y las modificaciones al proyecto original han dado un resultado al menos favorable y satisfactorio para el interés de la provincia del Chubut. Por eso, queremos poner en consideración y en valor y reconocer que es un consenso que a la provincia del Chubut le puede servir para ir ordenando sus cuentas. Este es un objetivo que ojalá podamos cumplir rápidamente para ordenar nuestra provincia y comenzar en lo que todo estado provincial tiene que hacer, que es generar empleo y generar calidad de vida. Este es un principio elemental y fundamental.

A veces, por las situaciones a las que estamos expuestos, se hace muy difícil poder pensar en esto, en una mirada hacia el futuro, en una mirada de construcción positiva, en una mirada de una sociedad totalmente distinta.

Y luego viene el otro debate, un debate que creo que ha circulado durante toda esta tarde y que tiene que ver con el federalismo.

Yo celebro la posibilidad que tienen algunas provincias de tener soberanía política porque tienen independencia económica. En realidad –y esto tenemos que reconocerlo–, a veces, las malas administraciones provinciales hemos destruido el federalismo y nos hemos colocado en una situación de mendicidad ante el Estado nacional que, obviamente, nos aleja de plantar

bandera con principios tan sagrados como los que planteaba la senadora Alonso, de la provincia de San Luis.

También para la provincia del Chubut me hubiese gustado tener un discurso de esas características, pero estamos mal. Estamos en una situación muy complicada. Y yo no le puedo echar toda la culpa al Estado nacional –nos tenemos que hacer responsables también nosotros en cada una de las provincias– de por qué no podemos levantar la bandera del federalismo. Porque también nosotros hemos colaborado para sabotear el federalismo para tener provincias económicamente fuertes, soberanas políticamente. ¡Esto no es posible!

Hay que trabajar para ello a partir de este bajar y dar de nuevo, que no es la coparticipación federal. Creo yo que se trata solo un antecedente y ojalá que sea así. Se trata, simplemente, de un ejercicio que hacemos de la discusión de la coparticipación federal con este consenso. Es solamente el primer paso para avanzar en la ley que tenemos que, en serio, discutir en este Senado.

Pero el tema del federalismo es muy caro a la Patagonia argentina. Nosotros –lo he dicho en alguna otra oportunidad– le hemos entregado al Estado nacional casi 500 mil millones de dólares desde Comodoro Rivadavia, que es la matriz productiva más importante que tenemos en el Sur argentino y hoy no tenemos agua ni electricidad. ¿Se concibe entregarle tanto al Estado nacional para que hoy sigamos mendigando, como hace cien años, agua potable, energía o caminos? Evidentemente, hemos fracasado en la defensa de nuestros propios intereses, cuando no ha sido la voracidad del unitarismo.

El barril tuvo un valor de 110 dólares y se nos liquidaban regalías petroleras sobre la base de 70 dólares. El resto se lo apropiaba el Estado nacional. ¡Ni siquiera nos pagaban regalías sobre el valor real de exportación del petróleo! ¡Nos pagaban apenas sobre 70 dólares! La voracidad fiscal del Estado nacional también ha sido muy fuerte. Y, en algún momento, habrá que volver a poner en valor y dar legitimidad institucional al Senado, que es la verdadera representación federal que tienen las provincias argentinas, a fin de tener un trato de igualdad con el Poder Ejecutivo nacional.

Del mismo modo que tenemos que consensuar cómo manejamos nuestras cuentas y administramos nuestros recursos desde el Senado, que es la representación legítima, deberemos controlar al Estado nacional, como nos comprometimos en marzo del año anterior al pagarle a los fondos buitres y decir que el endeudamiento debía pasar por el Congreso Nacional. Nada de esto ha ocurrido y el endeudamiento hoy es extraordinario.

No sé realmente si este esquema de ordenamiento de las cuentas fiscales tiende o apunta a pagar los intereses de la deuda externa. En realidad, es un tema que queda para el análisis político, incluso, la suspicacia o la posibilidad demagógica de alguna rentabilidad política. No quiero entrar en este terreno. Lo que sí digo es que del mismo modo en que el Estado nacional –el Ejecutivo nacional– nos demanda un ordenamiento, desde este Senado también tenemos que reclamar al Ejecutivo nacional un control mucho más certero. Y cuando se trate de leyes como las que hoy consideramos acá, que exista el tiempo suficiente, más allá de que uno realmente ponga en valor la presencia de algunos señores ministros. Insisto: darnos todo el tiempo que sea necesario para sacar las mejores normas posibles. A veces, al tratar un paquete de leyes tan sensibles, se pierden algunas cuestiones esenciales y elementales. Me parece que esto también debe servir como un aprendizaje.

Debemos recomponer el federalismo en la República Argentina, donde hay una responsabilidad importantísima de algunos estados que hoy se encuentran asfixiados y quedan en situación de mendigos, pero también le tenemos que reclamar al Estado nacional que respete a las provincias. Ahora bien, para que esto ocurra, nosotros también tenemos que recuperar esa independencia económica y esa soberanía política. Es fundamental para ponernos en un pie de igualdad, si no, de otro modo, seguiremos siendo los mendigos del interior.

Hay otro tema que, obviamente, vamos a tocar en el día de hoy. Antes de cerrar, me quiero referir al régimen de previsión social, un tema tan sensible que merecería ser tratado con más tiempo. Necesitaríamos una mayor discusión para llegar a un consenso, porque estamos hablando de uno de los sectores más

sensibles que tiene la sociedad argentina. Es algo muy sensible y, frente a ello, deberíamos sensibilizarnos también nosotros para darnos más tiempo y sacar una norma con el mayor consenso posible.

No creo que sea bueno estar rapiñando a ver cuántos votos se alcanzan para aprobar esta norma. Me parece que debemos darnos un criterio de mayor madurez a la hora de avanzar y tener una ley de estas características con el mayor consenso.

A mí me parece que un aporte importante ha hecho el senador Linares hace algunos minutos y yo haré exactamente la misma propuesta. Me refiero a corregir el artículo 2º de la norma y diferir –no solamente porque estamos ante un riesgo de garantía constitucional– la aplicación de la fórmula para el 1º de junio. Seguramente, vamos a oxigenar, no vamos a dañar el salario de los jubilados y vamos a tener mayor tiempo para trabajar, si es que hay que hacerlo, sobre el régimen previsional de la República Argentina. Además, nos daríamos la garantía constitucional y no abrir juicios.

Se va a aprobar una ley con una aplicación retroactiva. Es fácilmente condenable desde todo punto de vista. No es legal ni constitucional lo que vamos a hacer. ¡Ni siquiera discuto los montos que tenemos que arrebatar al bolsillo del jubilado si sancionamos esta norma! No caigamos en esto. Creo que tenemos que darnos el tiempo para que esta ley, si modificamos el artículo 2º, no caiga en la posibilidad de que sea cercenada desde el punto de vista del abordaje legal y constitucional, simplemente esto. Desde este lugar, me preocupa y mucho. Luego podríamos seguir avanzando en una discusión de un régimen previsional, con el mayor consenso posible.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Senadora Pilatti: tiene la palabra.

Sra. Pilatti Vergara. – Señor presidente: dada ya la extensión de esta jornada en el tratamiento de estos proyectos, voy a hacer uso de la autorización para insertar, pero no sin antes referirme a dos aspectos que me parece importante aclarar en este acto.

Este acuerdo fiscal implica aceptar reformas tributarias, previsionales y laborales que más que reformas, como bien dicen los gremios, no son más que ajustes a los que nos hemos visto sometidos más de una vez a lo largo de nuestra historia.

El senador Ángel Rozas manifestó hoy en su intervención que los gobernadores, al firmar este pacto, obligaron o comprometieron el voto de sus legisladores en sentido afirmativo. La verdad, como decía la senadora Negre de Alonso, yo creo que a veces es necesario refrescar los conceptos que tienen que ver con el federalismo, con la República y con la división de poderes. Porque uno puede votar en el mismo sentido que opina o piensa el gobernador de turno de nuestra provincia cuando, obviamente, comparte esos pareceres o esa opinión. Obviamente, en mi caso se dio durante los años en que fui diputada nacional y durante los dos primeros años en que fui senadora, cuando presidía el país Cristina Fernández de Kirchner, o sea, no es que en esos años yo formaba parte de una escribanía o me convertía, de golpe y porrazo –como dice una dirigente sindical de mi provincia–, en esos gatitos chinos que hacen todo el tiempo así...

–La señora senadora Pilatti Vergara levanta y mueve repetidamente un brazo hacia adelante y hacia atrás.

Sra. Pilatti Vergara. – Como parece que pretenden ahora que hagamos desde el gobierno nacional y nuestros gobernadores. Lo hacíamos porque estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo era para el bien del pueblo y, sobre todo, para mejorar la vida de los ciudadanos de esa parte de la sociedad a la que nosotros, los peronistas, debemos nuestra representación.

Tan es así que voy a cometer una infidencia. En una oportunidad, se generó un diálogo entre la expresidenta y un grupo de senadores de aquí y se le planteó el hecho de que era muy difícil oponerse a los proyectos que se mandaban desde el Poder Ejecutivo. O sea, si bien nadie nos ponía una pistola en la cabeza, ¿quién se iba a animar a decirle: “No vamos a votar esto”? En esa ocasión, me acuerdo que la expresidenta dijo: “¿Saben por qué, cuando yo mandaba proyectos desde el Poder Ejecutivo, nadie de ustedes se animaba a decir que no lo iba a votar?

Porque yo jamás mandé un proyecto que los pudiera avergonzar frente a los trabajadores”. Y es cierto, formamos parte y levantamos la mano para sancionar más de cuarenta proyectos de ley que modificaban las condiciones laborales, pero siempre para mejor.

Usted es abogado. Hay muchos abogados que forman parte de este recinto. Y ustedes saben que nosotros adherimos a tratados internacionales donde incorporamos a nuestra Constitución, a nuestra legislación, a nuestro derecho positivo, el principio de progresividad. O sea, eso que políticamente decíamos en los cánticos: “Nunca menos, ni un paso atrás” significa respetar el principio de progresividad. Y todas las propuestas que tienen que ver con este pacto, con esta reforma previsional, con esta reforma tributaria, con esta reforma laboral –uno nunca sabe cuándo va a aflorar nuevamente como tema de discusión en este recinto–, marcan estrictamente lo contrario.

Todo es un retroceso. Y no es un retroceso a lo que hayamos podido construir en doce años de gobierno peronista. Es un retroceso a lo que han construido miles de trabajadores y trabajadoras de nuestra Argentina durante muchísimos años, con mucha lucha, con mucho esfuerzo, en la calle, con jurisprudencia, con juicios, juicios que hicieron jurisprudencia que después ha tenido que asentarse en las normas, que son, en definitiva, nuestro derecho positivo.

Paralelamente a lo que opinó nuestro presidente del partido, el compañero Gioja, de que el gobierno de la Nación hizo abuso de poder para convencer a los gobernadores, yo creo que los gobernadores tuvieron la voluntad viciada, no fueron libres para disponer si firmar o no. Obviamente, que salgan a negarlo forma parte de esta extorsión, de este apriete, porque no se les deja otra alternativa que firmar este pacto fiscal.

Insisto: no quiero ser responsable de lo que en apariencia hoy puede ser una solución inmediata para los problemas urgentes de nuestras provincias, pero que más temprano que tarde va a ser un gran dolor de cabeza para quienes creemos que tenemos que trabajar y poner todo nuestro esfuerzo y compromiso en aquella parte de la sociedad a la que representamos.

Yo tengo bien claro que represento a los compañeros y a las compañeras que hoy colmaron esta plaza del Congreso, a los compañeros y a

las compañeras que desde los distintos sindicatos que nuclean a todos los trabajadores de mi provincia en una asamblea abierta nos dieron mandato expreso a los senadores y diputados del Chaco para que votemos en sentido contrario a estas propuestas de reforma que ellos bien llaman ajuste.

Yo creo representar a mi provincia. Mi provincia no es una entelequia, no es un concepto vacío. Mi provincia es gente, mi provincia son ciudadanos, mi provincia son hombres y mujeres, son trabajadores, son jubilados, son beneficiarios de asignación universal que, de aprobarse estos proyectos de ley, van a ser los más perjudicados. Como decían los compañeros y compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra, no puedo prestarme a que otra vez el ajuste pase por ellos.

Para terminar, quiero dar un ejemplo, que si bien algunas compañeras lo citaron, me parece muy gráfico y sintético para poder demostrar por qué uno se opone en esta manía de quitar a los que menos tienen para favorecer a los que en mejores condiciones están dentro de una sociedad.

Apoyar este pacto fiscal es apoyar indirectamente una reforma previsional que perjudica directamente a 17 millones de argentinos. El gobierno nacional, tomando la sugerencia del Fondo Monetario, buscar ahorrar entre 100 mil y 150 mil millones de pesos en detrimento de estas clases populares. En contrapartida, el Banco Central emite deuda por un total de 210 mil millones para pagar intereses de las LEBAC. Es decir, no hay plata para 17 millones de argentinos que necesitan de estos aportes, pero sí hay fondos para respaldar la timba financiera de los grandes grupos económicos y de los empresarios allegados al poder.

Señor presidente, señores senadores: con esta breve síntesis creo exponer mi punto de vista, sin dejar de remarcar que es cierto, como dijo el senador Castillo –tal vez lo manifestó mal– que acá cada uno interpreta como quiere. No es que uno interpreta como quiere. Uno interpreta de acuerdo con las convicciones y los intereses que pretende representar. Yo vine acá y estoy sentada en esta banca porque represento a un sector de la sociedad que, justamente, de sancionarse estos proyectos de ley y con mi colaboración, sería a los que estaría perjudicando. Que me

critiquen aquellos que no me votaron y que no me van a votar nunca es parte de la democracia, pero causar daño con mi voto, con mi decisión, justamente a la gente a la que le debo mi representación, no me lo voy a perdonar nunca. Adelanto mi voto negativo a los tres proyectos.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora. Senadora Ríofrío, tiene la palabra.

Sra. Ríofrío. – Gracias, señor presidente

La verdad es que he escuchado interesantes discursos. Puedo rescatar el discurso de la senadora Negre de Alonso, a la que respeto. Y la respeto porque todo lo que dijo es cierto. Es una luchadora por el federalismo, lo ha sido siempre en cada uno de los temas.

Creo que hay algunos puntos que es importante que remarquemos para poner blanco sobre negro. Estamos tratando el tema del pacto fiscal. Se ha remarcado insistentemente como un reaseguro a la legitimidad de esto el acuerdo firmado por los gobernadores. Honestamente me parece que no me corresponde –ni a nadie– emitir opiniones con respecto a las causas por las cuales cada gobernador ha tomado una decisión. Algunos lo habrán hecho por pertenencia, otros lo habrán hecho por convencimiento, otros habrán evaluado las conveniencias o no de sus provincias. Pero cierto es que, revisando este consenso fiscal, pregunto, ¿en dónde dice que los gobernadores han firmado un pacto para perjudicar a los jubilados? Yo no lo encontré, lo he buscado en todos lados.

Tampoco he escuchado acá de esos discursos –muchos interesantes– del oficialismo, que logre convencerme de que no estamos perjudicando a los jubilados. Han dicho que probablemente esto provoque un crecimiento, un reordenamiento fiscal, que va a ayudar a la productividad, que va a ayudar a la eficiencia del Estado.

¿Alguien dijo en algún discurso que no les metemos la mano en el bolsillo a los jubilados? ¿Alguien dijo que estas fórmulas mejoran la situación de los jubilados? Al menos en el tiempo que he escuchado los discursos, nadie lo sostuvo.

También creo que ha quedado absolutamente claro que, cuando los gobernadores firmaron este acuerdo para que el reajuste fuera trimestral, no dijeron desde cuándo. Por lo tanto, lo

que se pretende hoy es un hecho: nos estamos comiendo tres meses de reajuste de los jubilados. Eso está clarísimo. Los gobernadores no se han comprometido a esto.

Entre muchas críticas que le puedo hacer a la redacción, que ya la han hecho muchos senadores, se encuentra esto de que los gobernadores “dispondrán”, “asegurarán”, “impulsarán”, “harán”..., digamos, sobredimensionando las atribuciones de los gobernadores. También se ha hablado de qué le sucedería a la provincia de San Luis, que no lo firmó. Y yo me pregunto qué pasaría con aquel gobernador que, con buena voluntad, ha firmado este convenio y, por una situación política de su provincia, no tiene los votos para luego aprobarlo en la Legislatura. ¿Qué le va a pasar a ese gobernador que firmó de buena voluntad? Eso tampoco se ha dicho. ¿Qué hace un gobernador al que no le dan los números en su provincia para reafirmar lo que él consideró, en su momento, criterioso?

Creo que sería muy distinto si esta norma entrara en vigencia a partir de la actualización que, conforme a la ley, está corriendo. Es decir, si tomáramos los seis meses y comenzara a regir trimestralmente. Ese sí es el texto del convenio que han firmado los gobernadores. No este, no comerle tres meses de actualización a los jubilados, como han dicho varias de mis compañeras –por ahí las mujeres, como que ponemos un poco más de sentimiento en estas cosas...–.

Es nuestra última sesión y todas sentimos un poco de congoja. Porque es verdad que esto tiene un poco de olor a pasado. Un pasado del que nosotras –alguien también mencionó el ADN político– no estamos libres. Muchos de nosotros fuimos parte, pero aprendimos. No fue bueno lo de los 90, no fue bueno el recorte, no fueron buenas muchas cosas que pasaron. Y nos hacemos cargo. El peronismo aprende. Por lo tanto, me parece, honestamente, que volver a estas fórmulas sería una tragedia histórica de la que no quiero ser parte.

En mi caso, he transcurrido doce años en este recinto, en esta banca, votando leyes, como decían mis compañeras, que iban destinadas a favorecer al pueblo con relación a este tema, a las AFJP, a YPF, a la recuperación de la línea de bandera, a la recuperación de la soberanía y a la Ley de Salud Mental –que, según se sabe, también está corriendo riesgos–, identidad

sexual, pago de la deuda externa. He puntuado algunas. Además estuvo la ley de empleadas de casas particulares, un verdadero avance en el derecho laboral de las mujeres. Hubo leyes y políticas públicas que cumplieron con las bases de la doctrina peronista: soberanía política, independencia económica y justicia social.

Quiero mencionar algo que me parece muy significativo y que fundamentalmente lo digo para que el oficialismo atienda, porque les toca de cerca. El economista Martín Tetaz, un militante del espacio de Cambiemos, que incluso tuvo intención de ser candidato de Cambiemos, ha dicho hoy: “Esperemos que el Senado corrija hoy el ajuste trimestral de la fórmula de movilidad marzo 2018. Corresponde que esa primera actualización sea semestral y si los legisladores no lo resuelven, serán responsables de comer un 6 por ciento a los jubilados”. No lo ha dicho un economista de nuestro espacio, sino un economista militante del espacio del oficialismo.

Por las consideraciones que acabo de hacer, que fueron muy breves, adelanto el voto negativo para la reforma previsional.

Y con respecto al tema de la ley de responsabilidad fiscal, creo que habría sido muy interesante que se incluyera un apartado en el artículo 10 ter que estuviera destinado a reconocer a las provincias que hoy tienen equilibrio fiscal, tal el caso de La Pampa, de Tucumán, de Santiago del Estero, por supuesto San Luis –pero ellos han manifestado que no apoyan en nada–. Me parece que sería muy interesante porque, en realidad, el texto de la ley señala que a partir del ejercicio 2020 estarán exceptuadas del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores aquellas jurisdicciones que ejecuten el presupuesto, base devengado, con resultado financiero equilibrado o superavitario en el año previo al que se realice la pertinente evaluación de la evolución del gasto.

Alcanzado el resultado financiero equilibrado, la tasa nominal de incremento del gasto corriente primario no podrá superar la tasa de crecimiento nominal del producto bruto interno definido en el marco macrofiscal mencionado en el artículo 2º, inciso c). Cuando la tasa nominal de variación del producto bruto interno sea negativa, el gasto corriente primario podrá, a lo sumo, crecer como el índice de precios al consumidor de cobertura nacional previsto en

el marco macrofiscal citado en el artículo 2º, inciso c).

San Juan propuso y no ha sido considerado –yo lo planteo acá porque me parece muy interesante para las provincias, si realmente la ley de reforma fiscal, de responsabilidad fiscal, está destinada a premiar a las buenas administraciones– que distinto debe ser el tratamiento de las provincias que hoy tenemos equilibrio fiscal.

Entonces, proponemos que se agregue el siguiente texto: “Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, a partir del ejercicio 2018 se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo a aquellas jurisdicciones que ejecutaran el presupuesto, base devengado, con resultado financiero equilibrado o superavitario a dos ejercicios [estamos poniendo dos ejercicios previos], pudiendo mantener esa excepción mientras cumplan la condición de obtener resultado financiero equilibrado o superavitario”.

Lo propongo para que el cuerpo lo decida.

Para terminar, señor presidente, simplemente quiero decir que insisto con que el pacto de los gobernadores –cada uno habrá tenido sus motivos para consensuarlo– en ningún lado dice que el déficit fiscal debe ser costeadado por los jubilados ni los sectores más humildes de nuestra sociedad.

Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora García, tiene la palabra.

Sr. Lovera. – Presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Lovera.

Sr. Lovera. – ¿Puede ser una interrupción antes de que tomen la palabra el resto de los oradores?

Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Le da la interrupción, senadora García?

Sra. García. – Sí.

Sr. Lovera. – Gracias, senadora.

No sé si se trata de una propuesta concreta, de una moción concreta por parte de la senadora Ríofrío y no sé si será aceptada o no aceptada la propuesta de modificación correspondiente. En el caso de que no sea aceptada, por lo menos, quiero dejar asentado en este recinto que los senadores por la provincia de La Pampa, tanto la senadora Durango como quien les habla, estamos en un todo de acuerdo con la propuesta

realizada por la senadora Ríofrío de la provincia de San Juan.

En el caso de que se acepten las modificaciones, las vamos a votar favorablemente. Y si no se aceptan las modificaciones, después alentaremos nuestro voto en la ley correspondiente, pero sí queremos dejar asentado en este recinto que estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta de la senadora de San Juan.

Gracias, señor presidente y gracias, senadora, por la interrupción.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Senadora García, tiene la palabra.

Sra. García. – Muchas gracias, señor presidente.

Bueno, en el día de la fecha estamos en este momento en tratamiento de tres órdenes del día: el 939, que tiene dictamen en el proyecto de ley de reforma previsional; el Orden del Día N° 940, dictamen en el proyecto de ley de consenso fiscal y, finalmente, el 941, dictamen en el proyecto de ley incorporando como propio el que crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Todos la conocen: Constitución de la Nación Argentina. (*La exhibe.*) Yo creo que deberíamos proponer algo: le podemos poner *Rayuela*. Julio Cortázar. *Rayuela* se publica apenas unos años después de esa gran conquista constitucional de los trabajadores, que fue el artículo 14 bis. El artículo 14 bis opera gracias a la reforma constitucional y se consagran constitucionalmente los derechos de los trabajadores en 1957.

Rayuela sale en 1963. ¿Y por qué digo *Rayuela*? Primero, porque quienes la han leído –y a quienes no lo han hecho se los recomiendo– notarán que pone a juego la subjetividad del lector y, además de poner en juego la subjetividad del lector, ofrece múltiples finales, múltiples finales. Además, el autor nos ofrece distintas posibilidades de lectura. Una lectura normal, que en el caso de la Constitución sería desde el Preámbulo, artículo 1° al artículo 129, sumadas las “Disposiciones transitorias”. Otro tipo de lectura: tradicional, por partes, secuencial, entonces ahí podríamos agarrar distintas partes de la Constitución: la primera parte, la segunda... Una tercera opción que nos ofrece Julio Cortázar es como a cada uno le guste, un modelo para armar, a gusto del lector.

Pero no contento con estas tres formas, Julio Cortázar va un poquito más allá y nos da un tablero. Ustedes saben que *Rayuela* en la primera página nos ofrece un tablero para que nosotros podamos leer de distintas maneras y, claramente, vamos a llegar a distintos finales, a distintos relatos, a distintos desarrollos.

También deben saber, quienes la leyeron, que hay dos protagonistas principales: Horacio, por un lado, y la Maga, por el otro. De modo que les dejo para su libre interpretación quién es Horacio en esta historia y quién es la Maga en esta historia. Y, además, quién es el autor de ese tablero de lectura que figura en la primera página de *Rayuela*.

En este sentido, tenemos que analizar el consenso fiscal. “Consenso” significa acuerdo, consentimiento y demás. Compartiendo con quien me precedió en el uso de la palabra, no voy a inmiscuirme en la motivación del acto jurídico, no voy a inmiscuirme en la causa como elemento del acto jurídico, simplemente voy a decir que se trata de un acto jurídico complejo. Es un acto jurídico complejo porque requiere de voluntades de varias partes. Aquí tenemos, por un lado, al Estado nacional; por otro lado, a los gobernadores y cuando por aquí se preguntaban qué pasaría si las Legislaturas provinciales no aprobaran este acto jurídico complejo, llamado consenso, debo decir que hacia el final del consenso dice –y pido autorización para leer–: “*Implementación.* Dentro de los 30 (treinta) días de suscripto este Consenso, los Poderes Ejecutivos de las provincias firmantes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional elevarán a sus Poderes Legislativos proyectos de ley para aprobar este Consenso, modificar las leyes necesarias para cumplirlo y autorizar a los respectivos Poderes Ejecutivos para dictar normas a tal fin. El presente Consenso [sigue el apartado] producirá efectos solo respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus Legislaturas y a partir de esa fecha”. Solo respecto de las jurisdicciones que lo aprueben por sus Legislaturas y a partir de esa fecha. De modo que este acto jurídico complejo, para ser constitutivo de voluntad, requiere de la aprobación de la Legislatura provincial de cada una de las jurisdicciones y sólo surtirá efectos a partir de esa fecha.

Durante el tratamiento exprés de este proyecto y de la reforma previsional... Digo exprés porque cuestionaron el término exprés. Exprés significa rápido. Si vamos a ver qué significa rápido, significa tratar algo sin mayor profundidad. Lo dice la Real Academia Española. Nadie podría decir lo contrario respecto del tratamiento que recibieron ambos proyectos.

Desde el año 57, con esta conquista de los derechos de los trabajadores y la movilidad de las jubilaciones, atrasamos a razón de quince años por hora. El tratamiento de estos proyectos se efectuó en cuatro horas, quince minutos. De modo que, habiendo pasado sesenta años de aquel 1957, hemos atrasado a razón de quince años por cada hora de tratamiento de los proyectos. Entonces, nadie podría discutir, cual *Rayuela*, que fue un tratamiento rápido para no poner una palabra de otro idioma.

Vamos al consenso. El consenso, bien dijeron en ese tratamiento rápido, para no adentrarse con mayor profundidad en el tema que solicita al Congreso... En realidad, los gobernadores se obligan a aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno al gobierno. ¿Es una ley provincial? No. Es una ley nacional, pero se obligan a aprobarla. Derogar el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Es una ley provincial? No. Es una ley nacional. También, establecer un importe equivalente al recibido por las provincias por el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. ¿Provincial? No. Nacional. Incluir en el presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal 2018 transferencias al Banco Nación. ¿Provincial? No. Nacional. Impulsar la modificación del artículo 19 del proyecto de ley de presupuesto general de la administración: nacional. Ley de revalúo impositivo. ¿Enviada por quién? Por el Estado nacional. Impuesto sobre los débitos y créditos. Ley..., nacional. Impulsar la adecuación del impuesto sobre los combustibles, nacionales. Impulsar inmediatamente la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Nacional. Garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil. ¿De las cajas no transferidas?, no, de las nacionales. Compromiso de compensaciones. Las compensaciones a las provincias es un esquema acerca del cual debo decir que, dentro de toda

la fragilidad de ese consenso, puede ser útil para muchas provincias. La diferencia es que estamos como volviendo a los ticket canasta, es decir, la coparticipación automática y diaria que por goteo reciben las provincias se cambia por compensaciones con asignación específica. Es decir que solamente se van a poder utilizar con lo que el gobierno nacional decida que se puede utilizar.

Cajas previsionales no transferidas. Trece provincias de nuestro país tienen cajas no transferidas y vieron esto como algo positivo, porque se quitan penalidades para quienes no armonicen. Lamentablemente, debo decir que esas penalidades fueron establecidas por el Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto reglamentario. En este Congreso no se votaron penalidades para las cajas que no fueran armonizadas o que no iniciaran su proceso de transferencia a la Nación. Eso no está en el artículo 27 de la 27.260 sancionada por este Honorable Congreso. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo nacional a través de un decreto reglamentario. Es decir que nos están sacando algo que decidió unilateralmente el Poder Ejecutivo nacional. Además, debo decir que el artículo 27 continúa vigente, o sea que el proceso de armonización deberá ocurrir de todos modos...

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señora senadora.

Sra. García. – Sí, perdón.

De modo que, en cuanto al consenso fiscal, cuya finalidad sabemos que tiene que ver con este gran acuerdo y este gran consentimiento que se logró entre todas las provincias, insisto con que no voy a adentrarme ni en las causas ni en las motivaciones del gran acuerdo porque, además, en el ejercicio democrático debemos tener un profundo respeto por quienes han sido elegidos en cada una de nuestras jurisdicciones para llevar adelante los destinos de cada una de las provincias. Simplemente digo que, en el caso de la mal llamada reforma jubilatoria, durante la vigencia de la movilidad jubilatoria, desde el año 2009 hasta el año 2015, en todos y cada uno de esos ejercicios los jubilados recibieron haberes jubilatorios muy por encima de cualquier índice de inflación con que pudiera medirse en ese momento. Muy por encima. Y digo bien, porque, en 2009, el acumulado de

aumento de la movilidad jubilatoria fue del 19,89, y así sucesivamente en cada uno de los años: 26,5; 37,06; 31 en 2012; 31,78 en 2013; 30,47 en 2014; 33 en 2015 y 31,68 en 2016.

Ustedes verán que vamos a pasar de un acumulado de 31,68 por ciento a un trimestral, en marzo de 2018, de apenas un 5 por ciento. Y esto no lo digo yo, lo han dicho todos y cada uno de los periodistas especializados y de los expertos en la materia.

Simplemente, quiero decir que mucho se ha dicho sobre pragmatismo y también debo decir que nosotros hemos aprendido que no se cambia pragmatismo por convicción cuando se gobierna y se gestiona, eso es un ejercicio de pura hipocresía. Cuando uno tiene las convicciones, las tiene gestionando y genera las condiciones también para que, desde esas convicciones, pueda ser pragmático.

Quiero terminar con una canción que ustedes deben conocer y que dice, brevemente –me permito leer el final–: “Si la historia la escriben los que ganan, eso quiero decir que hay otra historia. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oír siempre”, como se oyó hoy en esta querida plaza del Congreso.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.

Tiene la palabra la señora senadora Verasay.

Sra. Verasay. – Señor presidente: antes, quiero pedirle que me permita insertar, porque voy a intentar acotar mis ideas en honor al tiempo que lleva la sesión.

En primer lugar, se habló acá de soborno, con lo cual invito a las personas que sepan de tamaño delito se dirijan a la Justicia y hagan la denuncia pertinente, porque la corrupción en este gobierno no existe, es algo del pasado y es algo que combatimos. Y no voy a permitir que se acuse de ser de esa forma, por lo menos, al gobernador de mi provincia.

En segundo lugar, no pensaba hablar de la reforma previsional, pensaba realizar inserciones, pero la verdad es que, habiendo escuchado tanta película, sería bueno hacer un poquito de memoria. Y cuando digo hacer memoria es porque no sé qué tipo de sistema de reparto sustentable y previsible es cuando se maneja a tiro de decreto. Decir que catorce decretos fueron los necesarios

para actualizar los haberes jubilatorios, no sé qué tipo de previsibilidad le dan al sistema. Le dan discrecionalidad, que es distinto, pero no le dan sustentabilidad.

De 2009 a 2015, acá se hizo un recuento de la historia sobre fórmulas, sobre cómo se calculaba la movilidad jubilatoria: que era mejor porque consideraba la recaudación tributaria, que era mejor porque consideraba la movilidad salarial de los trabajadores en blanco y que era mejor por la cantidad de meses que insumía para actualizar. Ahora bien, yo me pregunto sobre qué números hablan, si destruyeron el sistema de estadísticas de un país, ni siquiera pudieron paritar con números porque no se podía medir la inflación. No podían hablar de formalidad ni de crecimiento de la economía porque no medían el empleo, no podían hablar de pobreza porque no había estadística oficial.

Entonces, quiero saber qué pasó en los últimos años, porque hoy me hablan de mucho, del doble, del triple, de los cientos por cientos de crecimiento y de avances y retrocesos, cuando no había un organismo técnico que sustentara las estadísticas de la economía argentina en los últimos años. Por supuesto que a nosotros nos toca mostrar la verdad más cruda y por supuesto que el acuerdo al que se avanza es el que está dentro de lo posible.

Me gustaría que todos los que hablan de mucho o de poco muestren los números de una vez por todas, porque el relato se terminó hace un tiempo y lo eligió la ciudadanía. No todas las centrales de trabajadores opinan lo mismo, no todos los gremios opinan lo mismo, así que no se adjudiquen la homogeneidad de las opiniones porque no está pasando eso en la realidad hoy, en este debate transitorio que estamos dando previo a lo que defina el consejo de sustentabilidad que votamos en la reparación histórica el año pasado.

Dicho esto, espero que los medios tomen lo que estamos haciendo nosotros, que es mostrar la realidad. Y estamos trabajando por el sector vulnerable que hoy toca, que son los abuelos. Ahí, me permito agregar, presidente, como le decía, mi discurso sobre el proyecto que propone el Ejecutivo, que surge de un consenso amplio. Es más, salió de este recinto el cambio de la fórmula para calcular la movilidad social, para discutir la edad y para discutir los beneficiarios.

Dicho esto y pasado al consenso fiscal –parece que se le ha restado valor a la palabra “consenso”, porque hacía mucho que no se la ejercitaba justamente–, imagine lo importante de la discusión que ha planteado el presidente, que estamos discutiendo algo que en algún momento costó una guerra civil. Estamos discutiendo lo mismo que enfrentó a Buenos Aires con la Confederación, porque en ese momento también se discutían cuestiones de orden fiscal.

Ya lo publicó, en su momento, si me permite, *La Gazeta de Buenos Ayres*, en el año 19, y quiero decirlo textual: “Los federalistas quieren no solo que Buenos Aires no sea la capital, sino que, como perteneciente a todos los pueblos, divida con ellos los armamentos, los derechos de aduana y demás rentas generales; en una palabra, que se establezca la igualdad física entre Buenos Aires y las demás provincias”.

Dicho esto, quiero decir que la tensión entre los unitarios y los federales duró décadas. Ya en una historia más presente, hay que mencionar la transferencia de servicios que ha habido de la Nación a las provincias sin la correspondiente transferencia de recursos.

Quiero decir que en el año 34, por si no tienen memoria, se sancionó la ley argentina de impuesto a los réditos. ¿Y por qué traigo a colación esta ley? Porque también fue cuestión de litigio judicial, porque era de carácter transitorio y la Corte le dio el aval a las provincias. Y quiero que recordemos la palabra “transitoriedad” porque es una palabra que vamos a ver recurrentemente en la historia argentina cada vez que ha habido una crisis y que hemos tenido que salir a buscar financiamiento para enfrentarla.

Esta primera ley que yo les mencionaba repartía apenas el 17 por ciento de lo recaudado entre Nación y provincias. Y es este punto el que marca la pérdida de las provincias en cuanto a su relación de gasto público y de recurso propio. Digo que este punto es a tener presente porque es a partir de este momento en donde la sustentabilidad y la responsabilidad fiscal comienzan a ser problemas emergentes, problemas centrales a resolver para mantener equilibradas las cuentas públicas.

Y haciendo una apretada síntesis de la historia, vemos cómo han ido fluctuando los porcentajes de coparticipación primaria. Acá quiero mencionar los dos extremos: el más grande para

la Nación en esta ley del 34, que le otorgaba el 82 por ciento del impuesto recaudado y, a contracara, la mejor situación para las provincias con la ley de Alfonsín, en donde alcanzábamos el 54 por ciento.

Dado este rápido recordatorio de la historia y pensando en un sistema de coparticipación complejo, con reparto injusto, con compensaciones que generaron más problemas –y digo esto por los subsidios que ha recibido el área metropolitana–, sumado a una maraña de demandas judiciales entre la Nación y las provincias, esto es el resultado de la palabra que mencioné anteriormente, la transitoriedad de la solución a los problemas, agravada por una legislación pétrea que justamente va a requerir de un complejo sistema de acuerdos para resolver este problema.

Dicho todo esto, es que quiero poner en valor lo que anunció el presidente Macri el 30 de octubre, cuando convocó a todos los gobernadores –responsables máximos de las provincias, legitimados por voto popular– a pensar en soluciones duraderas. Creo que hay voluntad política para empezar a transitar el camino de cumplimentar con el requisito constitucional de tener una ley de coparticipación equitativa, solidaria, con transferencias automáticas y funcionales.

Para ir concluyendo, quiero decir que no es menor el consenso al que arribó este Poder Ejecutivo con los gobernadores –no con todos, con veintitrés– de asumir la discusión de una coparticipación federal de manera política y no judicial –ese es un gran paso–; de comprometerse a corregir las distorsiones de la economía; de racionalizar la carga tributaria; de armonizar cajas jubilatorias para evitar distorsiones entre la nacional y las provinciales; de eliminar subsidios diferenciales, como lo dije anteriormente, entre las provincias y el resto del país; de trabajar para eliminar alcúotas de impuestos distorsivos –como se mencionó, ingresos brutos que, en realidad, se replican en las provincias– y, sobre todo, trabajar sobre la ley de responsabilidad fiscal, a la que no hay que tenerle miedo porque no es ni más ni menos que empezar a controlar el gasto corriente para darle solvencia fiscal a las cuentas públicas.

Sin solvencia fiscal no va a haber inversión, no va a haber crecimiento, no vamos a lograr

mejorar ni la movilidad de los abuelos ni disminuir la pobreza.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se ha cumplido su tiempo, señora senadora.

Sra. Verasay. – Ya termino.

Por estos motivos, voy a acompañar los tres proyectos. Creo que este acuerdo está dentro de lo razonablemente posible, tanto para las provincias que administraron bien como para las que administraron muy mal, y creo que debe ser considerado mirando para adelante a fin de encontrar de una vez por todas un círculo virtuoso que nos haga crecer y que nos haga desarrollar con equidad geográfica.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Urtubey, tiene la palabra.

Sr. Urtubey. – Gracias, señor presidente.

Yo no voy a adentrarme en las características técnicas de estos proyectos. Voy a hacer un discurso netamente político.

Lo primero que quiero decir es que estos proyectos, a diferencia de los que uno habitualmente tiene que analizar como senador, como legislador y como opositor –en mi caso–, son proyectos que nacen de una voluntad unilateral, exclusiva, de una visión –en este caso, del gobierno nacional– que la somete a la exigencia del consenso y del escrutinio de todas las fuerzas políticas. En este caso no es así, dado que estos proyectos que estamos analizando son producto de una voluntad colectiva, de un interés compartido y de una visión compartida en un proceso de consenso que empezó a partir, justamente, de dos intereses contrapuestos que fueron acercándose hasta buscar un punto de transacción, partiendo de dos visiones distintas que también, en ese proceso de consenso, fueron llegando a un punto medio que dio como resultado esta iniciativa, este proyecto de ley.

En segundo lugar, los proyectos no son individuales en sí mismos, ni tienen posibilidad de ser analizados en forma autónoma unos respecto de los otros, están todos absolutamente entrelazados. Quiere decir que nadie puede sentirse tranquilo en su conciencia si dice: “Voy a votar la responsabilidad fiscal, pero no la reforma previsional”. La consecuencia de esto será, justamente, la imposibilidad de concretar el acuerdo fiscal, de concretar el pacto tal cual fue concebido. Porque, obviamente, como en todo

pacto que implica y que encierra prestaciones y recursos, está absolutamente indicado cuál es el origen de esos recursos.

Segunda cuestión: no hay una posibilidad de un análisis autónomo y no hay posibilidad de decir: “Hasta aquí llegué y esto es lo menos malo”. Por otro lado, está el interés superior. Parece que hay algún sindicalista afuera que amenaza con publicar las fotos, con documentos, de los que votan a favor. Yo le quiero decir a ese sindicalista que los que abrazamos la política, los que nos dedicamos a vivir no por el interés particular, sino anteponiendo el interés general por sobre el interés particular, entendemos que nuestra seguridad, nuestra simpatía, nuestro prestigio o nuestra vanidad no es más importante que un interés superior. Vivimos, respiramos y actuamos por un interés superior. Alguien podrá decir cuál, si es mejor o peor, pero es un interés superior. Y en ese sentido, esa jerarquía de valores nos tiene absolutamente muy tranquilos sobre lo que estamos haciendo esta noche en este Senado.

Por último, señor presidente, como una clave de interpretación de lo que hacemos, quiero citar a un gran filósofo político, Max Weber, que en un librito muy interesante que escribió allá por 1920 que se llama *La política como vocación*, justamente, ensayaba esa teoría, que después fue muy conocida, de la ética de la responsabilidad y de la ética de la convicción. Un político no puede solamente en forma unilateral entender que su actuación está regida siempre y solamente por la ética de la convicción sin hacerse cargo de la ética de la responsabilidad.

Yo, como senador de una de las provincias que suscribió este pacto, estoy actuando absolutamente con la ética de la responsabilidad, es decir, yo no puedo actuar sin desconocer y sin hacerme cargo de las consecuencias de mi actuar si las consecuencias de mi actuar en una supuesta ética de la convicción van a ser un desastre para mi provincia de Salta que firmó ese pacto. Así que yo creo en este tema de la ética de la responsabilidad, es decir, en actuar sabiendo, conociendo y previendo las consecuencias de los actos y la consecuencia de la aprobación yo sé cuál es y la consecuencia de la no aprobación también sé cuáles es.

Para terminar, quiero citar a Max Weber en forma expresa. Él dice: “La vanidad, la nece-

sidad de sentirse el centro de todo, conduce al político a cometer dos pecados mortales: dejar de lado el compromiso por una causa y perder el sentido de la responsabilidad. Requieren, quienes se dedican a este noble y denigrado oficio, alcanzar la síntesis entre una fuerte pasión y el frío sentido de las proporciones”.

Señor presidente: con esa ética de la responsabilidad es con la que, desde el peronismo, desde la oposición, vamos a apoyar íntegramente los tres proyectos que están en consideración.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Senadora Giménez, tiene la palabra.

Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.

En 2003 nació como movimiento político provincial el Frente Renovador de la Concordia Social. Misioneros y misioneras que a partir de ese momento decidimos reconstruir nuestra identidad y plantarnos en nuestra grandeza, en esa grandeza con la que Dios nos bendijo desde la tierra colorada, y buscar un destino común a partir del trabajo compartido y del esfuerzo de aprender a reconocernos, a respetarnos, a acompañarnos en el trabajo y a engrandecernos.

Hugo Passalacqua, mi actual gobernador, fue uno de los fundadores de nuestro movimiento, junto a Carlos Rovira, al doctor Closs y a cientos de miles de hombres y mujeres de nuestra provincia. Por eso, tengo la certeza de que el gobernador de la provincia de Misiones, de todos los misioneros, el licenciado Hugo Mario Passalacqua, al firmar este tercer pacto fiscal, cuya aprobación hoy queremos llevar adelante, analizó absolutamente todas sus variables, en el que con mucha responsabilidad, en su perfil de absoluto representante del Ejecutivo de la provincia de Misiones, procedió a trabajar desde marzo de 2016.

Y fue en marzo de 2016 cuando los gobernadores de las provincias argentinas comenzaron a trabajar con los ministerios de Economía y del Interior para rediseñar la mirada y el pensamiento del presidente Mauricio Macri y su perfil, de derecha y neoliberal, para alcanzar un esquema de trabajo compartido en cuanto a lo que significa el desarrollo económico y social de la República Argentina.

Simplemente, quiero recordar que este pacto fiscal es correlativo al Pacto Fiscal II, que fue firmado en 1993 y votado en 1994 en el Parlamento, que vence el 31 de diciembre de 2017. Esa es una de las cláusulas gatillo por las cuales surge nuevamente esta construcción colectiva y federal, con la representación de los veinticuatro gobernadores, más allá del resultado final, que fue la firma de veintitrés gobernadores y la no firma del gobernador de San Luis, en una decisión absolutamente respetable.

Desde nuestro movimiento elegimos a quién nominar como representante del Frente Renovador para gobernar Misiones y los misioneros eligieron a Hugo Mario Passalacqua. Nosotros, sus compañeros de trabajo, sus equipos políticos, técnicos, legislativos y ejecutivos, una vez que decidimos las acciones a llevar adelante en nuestro territorio y con nuestras formas, acompañamos las decisiones que él comunica como representante de los misioneros.

Este no fue un aprendizaje fácil y sencillo para un movimiento provincial pequeño que nació producto de la crisis social de 2001 en la República Argentina.

No tengo dudas, señor presidente y señores colegas, de que la responsabilidad compartida que asumimos con el gobernador de la provincia de Misiones tiene que ver, una vez más, con poner primero a Misiones como parte de nuestra responsabilidad institucional. De allí venimos, allí nacimos y hacia allí vamos a volver.

Podemos hacer reservas, como hicieron todos, y las compartimos, en muchas de las consideraciones sobre lo que se entienden las nuevas herramientas jurídico-administrativas que tengamos que desarrollar los argentinos a partir de este nuevo pacto fiscal en caso de ser aprobado por ambas Cámaras legislativas y por las provincias que adhieran a él. Ese es el camino. La democracia, la discusión, el consenso, la votación, las mayorías y las minorías.

Tengo claro que esto no fue una discusión exprés. Quizá para algunos representantes fue exprés en esta casa, pero los legisladores de la provincia de Misiones permanentemente participamos de los avances y de los encuentros y acuerdos donde se tomaban decisiones fundamentadas en esa responsabilidad institucional entre la Presidencia de la República y el gobierno de la provincia de Misiones.

Por eso, acompañar el consenso fiscal y la responsabilidad fiscal es para nosotros una acción natural en el ámbito de la política del Frente Renovador de la Concordia Social. No nos encontramos con lo que dice el pacto cuando ingresa el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que lo conocíamos desde antes y decidimos hacerlo de esta manera. Por eso, venimos al recinto con toda responsabilidad a decir la verdad, la verdad que siempre nos ha hecho libres. Lo hacemos entendiendo que este es el camino presente.

Como dijo el gobernador Passalacqua el día que asistió al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, es el consenso posible, al que se pudo llegar a partir del trabajo de meses de los responsables técnicos, las áreas económicas y los responsables políticos de nuestras provincias argentinas. Yo me he sentado acá en representación de la provincia de Misiones y ese es el destino y la defensa que hemos tratado de llevar siempre.

Ahora bien, no voy a dejar de hacer referencia a lo que significa la reforma previsional. También afirmo rotundamente que el gobernador de la provincia de Misiones y los legisladores por Misiones que acompañamos el pacto fiscal y la responsabilidad fiscal defendemos a los jubilados de toda la Nación Argentina y a los nuestros en particular.

La caja previsional de la provincia de Misiones jamás fue transferida a la Nación Argentina, cuando era una de las condiciones del Pacto Fiscal II, de 1994. Por eso, sabemos que administrar y vivir de lo que se tiene, cuando no hay otra opción, como la que volvimos a vivir en la crisis de 2001 y donde tuvimos que perder muchas oportunidades contadas en vidas de muertes evitables, que siempre recuerdo, que no nos vamos a permitir en ningún gobierno y con ningún presidente o presidenta que se vuelva a repetir, que es la pérdida de niños inocentes muertos por la desnutrición, el hambre y la pobreza.

Por eso, quiero afirmar que en esa reforma previsional que se plantea sin discusión, todavía estamos a tiempo de hacer las discusiones y de producir las modificaciones necesarias. Creo firmemente en la necesidad de modificar la fecha de implementación y acompañar la pro-

puesta de varios senadores, encabezados por el senador Luenzo, de producir la modificación de la aplicación de la fórmula planteada en primer lugar a partir de junio de 2018, donde en marzo de 2018, que es la primera presentación de la posibilidad de actualización previsional, se implemente la fórmula actual, de manera que garantice un piso superior al estimado y que, a partir de esa instancia, vuelva a recomponerse desde la propuesta realizada por el gobierno nacional y acompañada por los legisladores que participaron en la comisión pertinente, como una nueva etapa de actualización actuarial.

¿En qué fundamento esta propuesta, señor presidente? En el pacto y el consenso fiscal, que dicen que una de las concesiones es el gran acto patriótico que vuelven a hacer las provincias argentinas para salvar a la Nación de este endeudamiento y de esta mala administración, a través de la cesión de la Ley del Cheque del 30 por ciento que nos corresponde, que es dirigida en un ciento por ciento al financiamiento de la ANSES, la cual incorpora en el ejercicio 2018 una nueva fuente de financiamiento que hasta la fecha no tenía.

La otra propuesta que queda en discusión es la reforma laboral, que habla del desarrollo de la economía, el blanqueo y la incorporación al mundo del trabajo con aportes de cientos de trabajadores argentinos. Por lo tanto, para esa previsión posible, justamente, el desafío de aumentar el fondo de la ANSES es una de las variables posibles. Pero, además, porque la variable inflación que se propone como propuesta de actualización se da de bruces o se enfrenta con la misma propuesta del gobierno del presidente Macri, que desde el inicio de su modelo económico habla de un sistema de inflación decreciente y que su lucha contra la inflación era una de sus grandes metas económicas y macroeconómicas.

Por lo tanto, poner una variable de actualización jubilatoria a la inflación y dentro del esquema de inflación al 70 por ciento, cuando su propio esquema de desarrollo económico habla de disminuir progresivamente el proceso inflacionario, no habla de otra cosa de llegar un momento de no producir ningún tipo de modificación sobre la actuación jubilatoria.

Por lo tanto, en esas variables de los dos temas utilizados, que son la variable de inflación

y la variable de RIPTE, donde la variación del salario también está condicionada por las paritarias nacionales que están en marcha, por la inflación y por el contexto social y económico por el cual atravesamos es también una marca a considerar, pero no en el 30 por ciento, como se planteó, sino en el 0,5 como estaba en la fórmula.

Entonces, la propuesta concreta que traemos en esta instancia es, justamente, en primer lugar, el cambio de las variables para la actualización previsional, que es: el fondo total de ANSES y que se veía en la fórmula anterior, lo que significaba el 1,03, y lo que significa el RIPTE, en el 0,5. Creemos que de esa manera y aplicándolo a partir de junio, hay garantía en el sistema jubilatorio argentino para los beneficiarios, para los hombres y mujeres beneficiarios de la jubilación, de un sistema seguro, que independientemente de la actividad económica –inflacionaria o no– se va a mantener estable en el tiempo porque la masa jubilatoria va a crecer y los fondos van a seguir creciendo, porque el sistema de recaudación...

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señora senadora.

Sra. Giménez. – Sí, señor presidente.

El sistema de recaudación a partir de aportes, si el trabajo funciona, va a seguir creciendo.

Por otro lado, quiero dejar sentada mi posición de que estoy absolutamente en contra de elevar la edad jubilatoria a los 70 años en la República Argentina, más para las mujeres. En un solo acto jurídico a las mujeres argentinas les agregan diez años de trabajo, porque la actual edad jubilatoria de las mujeres es 60 años y la llevan a 70, porque la pensión universal es para la que tiene 65 años y la elevan a 70, porque no me imagino a una enfermera del sector privado de la salud trabajando a los 70 años, no me imagino a una colega ginecóloga o neonatóloga trabajando a los 70 años, no me imagino a un camionero manejando a los 70 años, no me imagino que ninguno de nosotros tenga la capacidad de llevar adelante la mejor tarea a diferentes escalas del trabajo a esa edad, sobre todo cuando es más duro, como en el caso del peón rural.

Por eso hago la moción concreta de eliminar el artículo 2º, dejando la edad jubilatoria como está actualmente...

Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo.

Sra. Giménez. – Vigente en la República Argentina.

A partir de esa definición que podamos tomar entre todos de entender la necesidad de darle garantía a los argentinos de que trabajamos con mucha responsabilidad y seriedad, que nos escuchamos y nos damos la oportunidad en el pleno de expresarnos libremente, fundamentado en el conocimiento y la responsabilidad democrática, para finalizar agradezco a todos los colegas senadores por lo que nos han permitido ser y hacer a los misioneros en estos pocos sesenta años de vida que tenemos como provincia. Mañana es un día muy especial, el día 30 de noviembre, el natalicio de nuestro héroe provincial...

Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo, senadora, por favor. Van quince minutos.

Sra. Giménez. – ...Andrés Guacurarí y Artigas, al que honramos como siempre, como aquella vez que juramos, la capacidad que tenemos de sostener nuestra identidad, de seguir poniendo primera a Misiones.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra el senador Fuentes.

Sr. Fuentes. – Voy a modificar el orden en que pretendía desarrollar la fundamentación de mi voto en contra de los tres proyectos en tratamiento.

Primero, saludo a los senadores que finalizan su mandato –por ahí no hay otra oportunidad para hacerlo– expresándoles el mayor de los beneplácitos y los mejores deseos en las actividades que vayan a desplegar. Ha sido realmente un placer trabajar con ellos.

Pasada la salutación, por razones de economía en la exposición, hago míos en todos sus términos y alcances la exposición de la senadora Negre de Alonso en el tema constitucional y de la senadora García en torno a los aspectos legislativos contradictorios. Es decir: la demolición del sistema de autonomías provinciales, el allanamiento de las cuestiones federales es la pieza clave desde el punto de vista de la discusión legislativa.

Tampoco voy a hablar de las curiosas técnicas legislativas con que este gobierno, que para

eso tiene imaginación, siempre nos sorprende. O sea: o bodeques gigantescos que traen cuarenta cuestiones distintas –como la Ley de Reparación Histórica a los jubilados, para terminar luego votando un blanqueo sin inversiones en el país y por un decreto autorizando a los parientes de los funcionarios para poder blanquear– o como esta estructura de un trípode normativo que en realidad es una trampa. Esto no es un pacto, es una trampa para un pacto. Hoy tenemos un pacto encerrado en un almacén donde se nos dice: “Esto no se toca porque, si se toca, dispara”.

Entonces, de golpe se me ocurre que tiene que haber otra explicación de esto. Y la explicación de esto es qué particular concepto de la política tiene el gobierno que hoy nos gobierna. Es decir, hoy dibujamos con claridad este avasallamiento de garantías constitucionales, este intento de limitación de la capacidad autónoma de una provincia por el que, si no se cumplen determinadas metas, estas son las sanciones: se carece de recursos.

Como bien se decía, mañana el análisis político de los habitantes determina, de golpe, que hay que modificar la política; no puedo porque estoy encorsetado por esta imposición del gobierno nacional.

Y lo gracioso es esto. Estamos viendo que, de golpe, esto es una atribución del gobernador. El gobernador viene y firma. El gobernador debe, a su vez, ordenar a sus legisladores qué deben hacer. Es decir, la división de poderes, la calidad institucional evidentemente no tiene entidad justipreciable o valor para el gobierno.

¿Por qué? Porque esta restauración conservadora puesta en marcha, que hace rato que vengo denunciando, tiene su etapa de instrumentación en algo que vamos a llamar el “unicato”. El concepto del ejercicio de la política de este gobierno es celebrar acuerdos, como los comisarios bonaerenses –entre comillas–, “los porongas”, que eran los dueños del poder territorial.

Entonces, en vez de articular la política como el escenario donde intereses contrapuestos y disímiles ordenan, discuten, confrontan y resuelven, simplemente la política es ponerme de acuerdo con determinados jefes a manera de estanciero. Veinte estancieros ordenamos cómo debe ser el sistema político argentino.

Lo que sí le debo reconocer a este gobierno, fundamentalmente, es que no erra nunca. El vizcachazo no lo erra. Cada vez que resuelve algo, siempre es para el mismo lado.

Por lo tanto, esta no es una discusión jurídica ni una discusión económica, esta es una discusión política. Toda vez que el gobierno tiene que resolver un conflicto de intereses opta ciega, directa y concretamente por los más poderosos, por el capital concentrado.

Datos sencillos, desde el inicio del actual gobierno. No voy a hacer referencias porque entiendo las susceptibilidades lógicas que puede haber en esa necesidad o en esa promesa que se hizo en la apertura del ciclo legislativo de que el pago a los fondos buitres, o sea, derogar la ley de pago soberano traía estas ventajas. Recuerdo el proyecto del senador Rodríguez Saá, de limitarse, dijo, dando por única vez una autorización al Ejecutivo para que se endeude.

Esos 16 mil millones iniciales de autorización se han transformado en 70 mil millones de dólares en dos años. Es decir, esta es la capacidad del cumplimiento de promesas del gobierno.

No hablemos también de las otras, porque son proyectos legislativos que, transformados en leyes, son cajas de Pandora: abre la llave y cualquier cosa aparece.

Entonces, si hacemos memoria: subsidio a las petroleras, 80 mil millones de pesos al año; pago a los fondos buitres, 10.500 millones de dólares –150 mil millones de pesos–; quita de retenciones al sector agroexportador, 80 mil millones de pesos al año. Y no hablemos de la pieza maestra de todo esto, porque rápidamente, se aprende. Cuando discutíamos el pago a los fondos buitres yo planteaba que los fondos buitres no eran una anomalía, sino que eran la etapa superior del sistema financiero. Esto lo replican estos muchachos con este negocio de las LEBAC. Tenemos pago de intereses por 140 mil millones de pesos al año, por lo que informaba el senador Mayans.

Hago más todas y cada una de las palabras del senador Mayans sobre la cuestión económica.

Es decir, este negocio financiero que se drena –y se va a drenar en intensidad– las divisas argentinas, forma parte de la explicación de la

necesidad de este tema de que el pato de la boda sean los jubilados.

Tenemos un cuadro de definición permanente en el que esa necesidad de ordenar las finanzas públicas es una excusa. Todos sabemos que en economía lo principal es que los recursos existan. Un amigo decía que en economía lo importante es que esté lo que se necesite. ¿Cómo lo obtenés? Apropiación, mano armada... Veamos cómo se obtienen los recursos petroleros.

¿Qué quiero decir con esto? El tema es muy claro. Los recursos están. A confesión de parte, relevo de prueba: el gobierno confiesa que modifica la fórmula de ajuste previsional, que en su momento votamos, y lo justifica diciendo que esa es la manera de compensar el déficit. Son 100 mil millones de pesos. Esto es lo que hoy está en juego.

Acá se decía: “Por ahí es problema de falta de imaginación de estos muchachos, no se les ocurrió”. No, se les ocurre lo que se les tiene que ocurrir coherentemente. ¿Quieren evitar el déficit fiscal? Recuperen las retenciones a la soja que alegremente derogaron. Recuperen las retenciones a la minería que también derogaron.

Los recursos están. El problema es a quién se los quitan. Y han decidido quitárselos a los jubilados.

Hoy evidentemente tenemos un escenario donde hay dos hechos determinantes. La conformación del unicato, claramente. La política no va a través de la discusión con instituciones, con cuerpos parlamentarios, con diputados. La política va en la discusión de jefe a jefe. Ese es el concepto que hoy está en marcha. Que vengan los gobernadores. “Firmen acá y encárguense ustedes de ordenar eso”.

¿Desde cuándo los gobernadores tienen que legislar sobre una fórmula de ajuste previsional? Eso es atribución de este cuerpo, del Congreso, no de los señores gobernadores –con todo respeto–. Si los gobernadores quieren legislar sobre el tema previsional, darán instrucciones a sus diputados provinciales y legislarán sobre las jubilaciones provinciales aquellos que puedan.

Entonces, estos dos hechos son la contracara de la etapa de la que venimos en esta restauración conservadora que cada vez es más salvaje. Porque, además, lo venimos denunciando: no es posible precarizar empleo, precarizar régimen

previsional, la caída del consumo si no está, consiguientemente, montado un aparato represivo.

Se ha inaugurado una nueva doctrina de seguridad interior. Está claramente anunciada por la ministra Bullrich.

Todo esto forma parte del mismo paquete. Ante la protesta, ante la disconformidad con las políticas de ajuste, está la amenaza.

Antes de ayer hacía el trayecto desde la boca del río Limay hasta Bariloche. Nunca vi tanto vehículo militar estacionado, salvo en la época del conflicto con Chile.

Estamos militarizando zonas del país. Y esto es fundamental entenderlo. No tenemos un régimen de tierras que consagre la posibilidad de reivindicaciones hipotéticas de territorios. Hemos sacado, a través de nuestra reforma constitucional, los tratados internacionales. Y la reforma del Código Civil establece claramente que cuando hablamos de propiedad originaria nos referimos a propiedad efectivamente en posesión. Es una simple cuestión de prueba independiente del uso, o mal uso, o la usurpación. Es la prueba. Probá que es tuyo, como cualquier ciudadano argentino. No es necesario recurrir a los métodos de violencia que están recurriendo.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le recuerdo su tiempo, señor senador.

Sr. Fuentes. – Termino, le agradezco.

Fundamentalmente en esta cuestión está claro que no se puede sostener esta política si no viene acompañada de una estructuración, de un paquete de medidas represivas. Esto es básicamente lo que nos preocupa.

Creo que todos nos hemos quedado sorprendidos por los anuncios de cómo debe ser la intervención de los jueces en estos casos: que se abstengan de intervenir, que la actuación de la fuerza represiva está plenamente justificada, etcétera. Hoy, directamente, es decir a los magistrados: “¡Guarda con esto que viene!”.

Sumémoslo al control que están haciendo o a la persecución política sin fundamentos jurídicos para decretar prisiones.

Entonces, esto pone en cuadro el escenario que es sumamente preocupante, porque no son solamente las libertades políticas, son las libertades sindicales, son las libertades sociales.

Por lo tanto, en función de estos argumentos, que así como nace esta manifestación clara de

lo que es el unicato como régimen político en la Argentina, porque es un concepto profundamente metido... Es decir, la política es la intermediación, ¡es pérdida de tiempo! Si somos los dueños del país, ¿para qué queremos la política? ¡Los políticos son corruptos! ¡Los políticos coimean! ¡Basta de política! ¡Acá estamos los dueños de las empresas y los CEO y vamos a manejar el país como se nos cante! Y es lo que vienen haciendo. Veamos los ministros...

Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo, señor senador.

Sr. Fuentes. – Entonces, frente a esta cara, hoy ha habido una contracara, es decir, el esbozo de un modelo organizativo de resistencia. La movilización de la plaza, en la variedad de sectores presentes –sectores de la CGT, sectores docentes o gremiales de otras centrales, movimientos sociales, jubilados–, va conformando un volumen que está advirtiendo que esta situación debe tener otro tipo de salida. No se puede siempre joder a los mismos sectores.

Por lo tanto, señor presidente, desde el peronismo, muchos vamos a votar en contra de estas tres leyes.

Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.

Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.

Sr. Martínez (E. F.). – Señor presidente: voy a insertar mi intervención a los fines de acelerar el debate y la votación.

Simplemente, le pido unos segundos para rendir homenaje a los señores senadores que finalizan su mandato –no sé si habrá una nueva sesión– y lo personalizo específica o especialmente en la senadora Virginia García, tal vez el personaje de la Maga en muchas de nuestras tardes y de nuestras noches, no sólo por su profundidad, por su sentido –a lo mejor– de arcano, de necesidad, pero, fundamentalmente, de imprescindibilidad.

Y también le pido que no se olvide de que la Argentina sigue siendo un modelo para armar y en eso están las provincias que nosotros representamos... Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le agradezco el comentario, señor senador.

Senador Romero, tiene la palabra.

Sr. Romero. – Señor presidente, no me voy a referir a aspectos técnicos que aquí se han deba-

tido, en su mayoría, en profundidad. Voy a hacer algunas consideraciones solamente políticas.

No parto de la creencia de que los actos importantes mandados por la urgencia sean fundacionales ni que son históricos ni que son paradigma de federalismo. Tampoco me quiero escudar envuelto en las banderas de los jubilados para pararme en la tribuna de la esquina ni tampoco esconderme atrás de los gobernadores para justificar mi voto. Yo creo que estas son medidas posibles, dadas las necesidades tanto de la Nación como de las provincias.

No son muy ambiciosos estos cambios. Hemos tenido peores pactos que este. Hemos vivido pactos en noches de urgencia, donde se anunciaban catástrofes y apocalipsis venideros, y debo reconocer que en esto el gobierno es un poco más prudente y, sin ningún cataclismo en vista, anuncia medidas que, después, en las negociaciones, también va cediendo en lo posible, me imagino. La política es el arte de lo posible. Y esto es lo posible, diría. Yo, desde esa convicción de que esto es lo posible y lo necesario, hoy, en un proceso que no se agota ni que comienza hoy, voy a apoyar estos tres tratamientos.

Debo decir que no se agotan porque en el mismo texto, en el conglomerado del texto, anuncian que esto en el futuro se tiene que ir perfeccionando.

Los *shocks* no son buenos. Hemos vivido, también, experiencias de *shock* y no fueron buenos los resultados en el tiempo. No creo que la ciudadanía ni el país estén, como sucede en otros países del mundo, dispuestos a aceptar ajustes drásticos.

Tampoco sabemos, a ciencia cierta, si corregir los desvíos económicos y macroeconómicos de una manera suave y escalonada tiene éxito. Pero yo no voy a festejar, teóricamente, el fracaso de nadie. Nosotros tenemos que apostar a que todos los esfuerzos parciales nos marquen un camino de mejoría, nos marquen un camino que nos permita probar otra cosa.

El modelo que dejamos en 2015 nos llevaba –lo dije aquí muchas veces– a Venezuela. No sé si esto nos lleva a Alemania ni a Suiza, pero, lo otro, estoy seguro de que nos llevaba a Venezuela con el déficit creciente, la inflación creciente, el país aislado y cerrado. No sé cómo íbamos

a cubrir el déficit que tenemos. El gobierno no tiene mucho margen: se hace un ajuste para bajar el gasto, cosa que creo que, hoy, ni acá ni en Grecia ni en ningún lado es válido –porque la gente no lo tolera, además de que es de mayor impacto en la gente más necesitada– o aumentamos los impuestos, cosa que no se puede en la Argentina porque el nivel de actividad no nos permite aumentar los ingresos, o nos endeudamos, que es lo que se está haciendo. No es secreto ni está escondido. Ya veníamos endeudados y nos tenemos que endeudar.

Entonces que alguien nos diga la fórmula mágica, porque es fácil para muchos economistas de televisión decir: “Esta es la solución”. Pero una cosa es teorizar y otra cosa es gobernar.

Creo que el reflejo de la situación de la Nación es el de las provincias. A cada provincia le ajusta el zapato de una manera diferente: unas porque tienen cajas, otras porque tienen déficit, otras porque creen que merecen más después de estar pésimamente administradas –como dije muchas veces acá–, como la provincia de Buenos Aires. No sé cómo era antes, pero desde que está la democracia instalada, la provincia de Buenos Aires no tuvo una buena administración. Siempre ha tenido que buscar asistencia del gobierno nacional.

El déficit de las dos o tres provincias más grandes del país es el 85 por ciento del déficit de las provincias. Tampoco vamos a venir a flagelar a las provincias acá ni tampoco a convertirlas en víctimas porque, si el sistema federal argentino es injusto, también las administraciones provinciales dejan mucho que desear.

Hay leyes de disciplina fiscal que no se cumplieron. Las plantas de personal crecieron, más allá de que las provincias no pueden corregir los aspectos macroeconómicos, la falta de inversión y la falta de crecimiento.

Hay provincias que no tienen ese problema y ese drama y tienen derecho a no firmar el pacto fiscal. Hay pactos que yo no firmé desde Salta porque no necesitábamos lo que se nos ofrecía. No es el fin del mundo. Tienen derecho las provincias como San Luis de no firmar y plantear su posición distinta. Y aquellas que crean que les sirve este proyecto, harán aprobar por las Legislaturas lo aquí propuesto.

También es cierto que puede pasar que la Legislatura lo apruebe y no pasa nada tampoco. No se le aplican los beneficios ni las obligaciones. Pero da la impresión de que la mayoría de las provincias, por alguna razón u otra, repito, han tomado este camino y no debemos impedirles que esto sea un intento más –por eso, digo, no es fundacional– de sacar adelante el país y sacar adelante a las provincias.

En eso, creo que es importante, por ejemplo, cuando se habla de disciplina fiscal, esta tiene que ser equivalente. Las provincias tienen que disciplinar eso, pero la Nación también, porque la Nación imprime, tiene impuestos de aduana, como históricamente los tuvo, tiene la posibilidad de emitir títulos locales o extranjeros. Entonces, a veces, están en desigualdad. Son las provincias en ese comité que se creó, ese consejo o no sé cómo se llama el organismo que se propone crear, las que tienen que exigirle a la Nación la disciplina fiscal. En ese sentido, creo que no debe haber un sistema en el que haya un paternalismo de la Nación y las provincias se vean sometidas. Tiene que ser de igual a igual. Ese es el federalismo de concertación.

En cuanto al caso previsional, aquí se habló de las bondades de la confiscación. Aquí se habló de la liquidación de las AFJP. ¡Qué me importan las AFJP! Nos olvidamos de que les hemos expropiado los ingresos, los ahorros, a millones de jubilados o de trabajadores que estaban aportando al régimen en el que nos encontrábamos muchos de nosotros, el régimen de capitalización.

También sabemos –porque se ha visto y lo está investigando la Justicia– la forma en que se han manejado los recursos de la ANSES, por ejemplo, para pagar el fútbol, cuestión que está ahora en la Justicia.

Esas fueron ideas de corto plazo. Le llevaron al presidente Kirchner, creo que fue el exvicepresidente Boudou, la idea de dónde sacar más plata. Se la quitamos al campo en un momento, cuando se establecieron las retenciones y el crecimiento de las retenciones. Eso fue una expropiación del dinero del interior para ser destinado al gobierno nacional. Después, las cajas de jubilación. Después: “¿Cómo nos podemos aprovechar de alguien...?”. “Bueno, nos quedamos con YPF, a ver si empieza a perder plata”, que es lo que está sucediendo ahora.

Para muchos, son actos heroicos: la Vuelta de Obligado, la Conquista del Desierto, pasamos después a la conquista del ahorro de la gente... Pero no es épico aprovecharse del oportunismo para conseguir recursos; no es épico ni ético.

Entonces, ¿cuál es la discusión? Si acá creemos que la actualización de las jubilaciones es un aumento sucesivo de ellas porque nuestros jubilados ganan poco, estamos equivocados; no es eso. Cuando se habla de esta actualización es para preservar a los jubilados de la devaluación monetaria por la inflación, del castigo a los ingresos por la inflación. Ese fue el origen de esta norma que actualiza las jubilaciones.

Otro tema es que ganan poco, eso ya lo sabemos. Por eso, hasta hemos votado aquí el 82 por ciento móvil, que fue vetado por el gobierno anterior.

Lo que hoy tenemos que discutir es si preservamos a los jubilados de la inflación sí o no y tratar de que las jubilaciones no se alejen más de los ingresos de los activos. Eso es lo que hace esta fórmula, tomando un porcentaje entre la inflación y el costo de vida y un porcentaje de la suba salarial.

Acá se dijo también que no habrá actualización si la inflación es cero. Pero ojalá la inflación fuera cero. En ese caso, no va a subir nada: ni los precios, ni las actualizaciones, ni las dietas nuestras... Nada va a subir. Pero parece que estamos culturalmente propensos a creer que debemos vivir padeciendo inflación.

Ahora bien, ¿qué pasará el día que no haya inflación? Nos vamos a acordar de que los jubilados ganan poco. Entonces, ahí vamos a salir de ese espejismo de creer que un aumento para compensar la inflación es un aumento real. No es un aumento real, es un aumento engañoso. Es tal vez una compensación por el deterioro producido por la inflación. Algún día, si tenemos un país ordenado en sus cuentas fiscales, sin el déficit que hemos heredado y sin la inflación que hemos heredado, tal vez seamos capaces de sentarnos a discutir, fuera de la inflación, la justicia que hay o no en los ingresos de los jubilados. Ese es otro tema.

Pero si aquí creemos que vamos a hacer una fórmula para que haya un aumento permanente, eso es imposible porque no hay caja que lo aguante. La Argentina es un país donde se les

paga a los jubilados con impuestos y los impuestos no dan más. La carga tributaria, los costos —no el costo laboral, las cargas tributarias—, las cargas sociales y el costo de la burocracia y la corrupción es lo que hace que no vengan inversiones a la Argentina. Todos preguntan: “¿Por qué no vienen las inversiones?”. No vienen las inversiones porque estamos viendo que en nuestras provincias todavía las pymes no ganan dinero, todavía no ganan el dinero suficiente los chacareros, los productores.

¿Cuándo hay inversión? Cuando hay rentabilidad. Cuando la gente gana plata, no siempre la gasta toda, la invierte también. Y si las empresas son prósperas, también. Y si las empresas son prósperas, van a invertir. Y no estoy hablando de las grandes, estoy hablando de las pequeñas y las pymes, que a veces no saben cómo subsistir. Entonces, esta es la actualización posible para compensar del flagelo de la inflación a nuestros jubilados.

Por último, señor presidente, por más que lo haya señalado mi colega de Salta, no quiero dejar de expresar el repudio por las amenazas del señor Yasky de escracharnos públicamente. ¡No le tengo miedo a eso! Él debiera tener más valentía y venir a decirlo acá. ¡Les quiero decir que eso es una práctica fascista! El fascismo inventó el escrache: andar casa por casa marcando a los que ellos consideran el enemigo. ¡Y eso es lo que está haciendo, como lo han hecho con los periodistas durante el gobierno anterior y como lo han hecho con los productores! Es un acto fascista que repudio y que, como cuerpo, deberíamos repudiar.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). — Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador Rozas.

Sr. Rozas. — Gracias, presidente.

También trataré de hacer algunas apreciaciones conceptuales sobre estas tres leyes que están en análisis, no entrando puntualmente a las cuestiones técnicas porque fueron varios, empezando por los miembros informantes, los que han podido explicitar su contenido. Pero sí creo importante resaltar y rescatar algunas cuestiones que, en mi concepto, creo que son muy importantes y me parece que, a veces, por

la mezquindad entre los sectores políticos, el árbol no nos deja ver el bosque.

He escuchado con atención prácticamente todos los análisis de los distintos senadores que han hecho uso de la palabra y algunos descalifican este encuentro del gobierno nacional con los gobernadores de provincia. Muy por el contrario, yo creo que es un paso adelante en la Argentina, más allá de que podamos tener diferencias de apreciaciones sobre la letra chica en cada uno de estos proyectos de ley. Podemos tener miradas, apreciaciones o reflexiones distintas, pero el hecho institucional republicano de que, en medio de la confrontación permanente en la que venimos los argentinos desde hace muchos años, seamos capaces –hombres y mujeres que tienen la alta responsabilidad política de administrar las jurisdicciones provinciales– de sentarnos en una mesa común con el gobierno nacional a analizar la situación de fondo del país para no tropezar con la misma piedra, me parece realmente un hecho político trascendente que es un error no resaltar. Repito: como hecho institucional, por encima de las apreciaciones particulares sobre el contenido de las leyes.

Yo respeto, como pretendo que también se respete a los que no pensamos igual, que pueda haber apreciaciones, ¡y las hay, evidentemente! ¡Y en buena hora que pensemos diferente sobre algunos temas! Pero ese hecho institucional no puede pasar desapercibido para nosotros. Creo que es un error del mundo político no resaltar este hecho que en la Argentina no se daba hace mucho tiempo. De lo contrario, tendría que plantear a estos senadores que descalifican ese encuentro que estos señores gobernadores han tenido –según esas reflexiones–, simplemente, dos alternativas y no más: se han sentido extorcionados por el gobierno nacional o realmente han traicionado al pueblo que los ha votado, si esa es la visión por la cual los gobernadores han acordado con el gobierno nacional. Yo no creo que eso haya sido así.

Yo he sido convocado –supongo que el oficialismo también; soy opositor en el Chaco– por el gobernador de mi provincia, peronista, junto con los diputados provinciales y han sido convocados todos los sectores políticos, los sectores sociales, los del trabajo. Allí, el gobernador nos ha manifestado que él acompañó este acuerdo fiscal de consenso porque creía que era favora-

ble para la provincia del Chaco. ¡Y no tengo por qué dudar! No creo que el gobernador –por más que sea de un partido diferente del mío– quiera hacer algo por lo que le vaya mal al Chaco o vaya a firmar una documentación que le va a traer más perjuicios que satisfacciones. La verdad es que no entiendo el análisis de algunos colegas senadores.

Creo que lo que ha motivado sinceramente a la mayoría de los gobernadores es un análisis serio y reflexivo sobre la situación de la República Argentina –la situación de nuestro país– que no es, como también se ha explicado aquí, como que el problema de la Argentina arranca, exactamente, va a ser hace veinticuatro meses. Es decir, vivíamos en el paraíso de la felicidad, donde no había pobres, había pleno empleo, no teníamos deuda en el exterior, no teníamos compromisos, el país funcionaba extraordinariamente bien, no se le descontaba a las provincias argentinas el 15 por ciento indebidamente, todo funcionaba maravillosamente y, a partir de la asunción del gobierno de Cambiemos, comienzan los gravísimos problemas, como la falta de trabajo. No había antes trabajo en negro o trabajos informales, estaban todos los trabajadores reconocidos en blanco, no había ningún problema. ¡Todo lo generamos nosotros a partir de hace exactamente –o va a ser dentro de unos días– veinticuatro meses! ¡Claro! Si analizamos así el tema, hasta yo podría coincidir con algunos senadores de la oposición.

Se habla del endeudamiento. ¿Qué, el déficit lo inventamos nosotros? ¿Estábamos con superávits, gemelos y, cuando entramos nosotros, perdimos el superávit y entramos en déficit? Y, a partir de ahí, empezamos a endeudar, a endeudar y a endeudar la Argentina. ¿O estábamos ya con déficit antes de asumir nosotros? ¿O antes de que asumiéramos nosotros había problema con la generación de nuevos empleos en la Argentina? ¿O antes de que asumiéramos nosotros había problemas con el crecimiento de la economía en nuestro país? Entonces, tenemos que ser objetivos en el análisis, lo cual no quiere decir que en estos dos años nosotros hayamos hecho todo muy bien. Seguramente, alguien nos podrá hacer observaciones y las tendremos que atender, y tendremos que corregir algunas cosas, pero hay que ser sinceros porque, si no,

el análisis es parcial. El análisis no es un dato estricto de la realidad.

Se ha dicho acá por parte de algunos senadores cómo se remuneraba o cómo se incrementaba la remuneración de los jubilados: el 30 por ciento y podría haber sido el 40 o el 45. Lo que no sabemos es si es justo o injusto, porque no podíamos medir los niveles de inflación porque las estadísticas en este país no existían. ¡Y no estoy mintiendo ni estoy exagerando! Ustedes saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto, ¡absolutamente cierto! El INDEC no funcionaba ni para atrás ni para delante, mentía en las estadísticas.

Entonces, si había una inflación muy alta en el gobierno anterior, lo único que hacía, en todo caso –para ser comprensivos de los que sostienen esa situación–, era para compensar la inflación. ¿O la inflación no andaba en alrededor del 30, 32 o 33 por ciento? ¿O estoy exagerando? Entonces, si estamos hablando de un aumento o de un incremento de un 30 por ciento, lo que hacía el gobierno anterior era simplemente compensar la pérdida del valor adquisitivo de los jubilados por la inflación galopante que teníamos en el país. Esto también es un dato de la realidad.

Creo, con toda sinceridad y por respeto a los gobernadores... Porque hay gobernadores que tienen sus cuentas equilibradas en sus provincias y han firmado el pacto, como el gobernador de La Pampa, por ejemplo, para nombrar uno entre varios. ¿El gobernador de La Pampa entregó a su pueblo, a los pampeanos, para quedar bien con Mauricio Macri, para quedar bien con Cambiemos? ¿Ha perdido la racionalidad el gobernador Verna? Yo no creo que esto sea así. Creo, con toda sinceridad, que es un acto de responsabilidad política tremenda y profunda que necesita este país.

Lo primero que tenemos que reconocer todos los sectores es el problema, porque no se puede corregir ningún problema en ninguna parte del mundo si no se lo reconoce como tal. Si no reconocemos el problema, naturalmente nunca vamos a encontrarle una solución.

Acá, el problema grave de la Argentina es el déficit, que no solamente tiene que ver con el sector público, tiene que ver también con el sector privado. La actividad productiva no tiene hoy una correlación con el sistema de impor-

taciones, por ejemplo. Por eso, el déficit de la balanza comercial. Entonces, si nosotros no atacamos el déficit, el déficit no lo puede atacar únicamente el gobierno nacional. Tiene que ser una conciencia colectiva de todos los sectores y no solamente del público –gobernadores, intendentes y presidente–, sino también desde los trabajadores y de los industriales. Hombres y mujeres de distintas extracciones debemos convencernos de que tenemos que llegar al equilibrio fiscal en la Argentina. Si no, no hay manera de sostener en el tiempo esta situación en el país.

Yo he escuchado con atención el tema del endeudamiento y, realmente, es preocupante. ¡Claro que es preocupante! Yo no lo niego en absoluto. Yo también estoy preocupado, como muchos de ustedes, por el tema del endeudamiento. Ahora, pregunto: ¿cuál es el otro camino? Hay tres caminos y no hay otros más. No es que hay cincuenta caminos. Hay tres caminos: o producimos un *shock* en la sociedad, cuestión que la sociedad no está dispuesta a admitir ni a este gobierno ni a los que vengan. El segundo... Voy terminando ya, presidente, porque veo que está mirando el reloj y tiene razón. Ya termino. El segundo camino es hacer lo que está haciendo el gobierno nacional tomando créditos internacionales. Y el tercer camino es darle a la máquina desde el Banco Central. Pero los dos caminos nos llevan a un endeudamiento.

No es que tenemos una cuarta alternativa. En todo caso, la cuarta alternativa es hacer un esfuerzo entre el sector privado y el sector público para crear una nueva conciencia en la Argentina en el sentido de que no se puede gastar más de lo que somos capaces de producir. ¡Que la magia en la Argentina no existe! Cada vez que nos hicieron creer que venía un presidente que con magia nos permitía gastar todo lo que quisiéramos, sin producir lo necesario para sostener ese crecimiento, nos ha ido muy mal y nos va a seguir yendo mal si no tomamos clara conciencia.

Y termino. También he escuchado que el problema grave es que la reforma laboral afecta derechos inherentes a los trabajadores. Toda mi vida en la actividad política –llevo más de cuarenta años, no sé cuántos años llevo– siempre escuché y reconocí como tal que la columna vertebral del peronismo era la CGT...

Sr. Rodríguez Saá. – ¡Los trabajadores!

Sr. Rozas. – Bueno, la CGT es la representante legítima de los trabajadores. Por lo menos, así siempre me enseñaron a mí desde chiquitito al escuchar a los amigos del peronismo. Ahora, resulta ser que la CGT acuerda con el gobierno... Hay otros sindicalistas que no están de acuerdo y no me parece mal, pero no digamos que esta ley es como un acto unilateral del Poder Ejecutivo. ¡No! ¡De ninguna manera! Esta ley se discutió con los señores representantes de los trabajadores de la CGT y, en función de eso, el Poder Ejecutivo elevó este proyecto. ¡Hay que decir la verdad como es! Ahora, que haya otros sindicalistas que no están de acuerdo, también lo reconocemos y capaz que tienen su cuota de razón. Y termino...

Sr. Presidente (Pinedo). – Su tiempo, señor senador.

Sr. Rozas. – Bueno, por estas razones, señor presidente, termino diciendo que no digo que tengamos la verdad absoluta. No tengo esa soberbia. Si alguna vez la tuve, habrá sido cuando era muy joven. Hoy no la tengo.

Creo que lo que estamos haciendo gobernadores de todos los partidos políticos y nuestro gobierno nacional es un paso adelante. Y el presidente ha dado muestras, incluso para mi sorpresa personal, de que es capaz de reconocer cuando se equivoca y de que es capaz de reconocer el cambio cuando hay que hacerlo. Por lo tanto, este paso adelante lo hacemos con la voluntad de mejorar la situación futura de la Argentina. Si estas circunstancias no se dan, bueno, nos volveremos a sentar con los gobernadores, con los distintos sectores del trabajo, con industriales y con los distintos sectores políticos y corregiremos lo que haga falta.

Por eso, por estas convicciones, voy a acompañar los proyectos presentados aquí, en el recinto.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.

En primer término, quiero decir que soy respetuoso de las diferentes opiniones. Soy respetuoso del acuerdo que han celebrado los gobernadores con el presidente. Eso no significa

que no tenga todo el derecho a opinar diferente. No podemos pretender empezar a imponer nuevamente el pensamiento único. Que se hayan puesto de acuerdo –que está bien, que es valorable, que es importante– no significa que tengan razón y no significa que esté garantizado o asegurado el éxito.

En segundo lugar, quiero decir que reafirmo mi convicción de que se ha dado un trámite expés sin escuchar diversas opiniones que hubieran enriquecido el debate. El acuerdo se firmó el 16 de noviembre, el 17 de noviembre entraron los proyectos al Senado, el 23 de noviembre se firmó el despacho de la comisión y hoy, 29 de noviembre, se va a dar sanción al proyecto. Trámite expés. Y cuatro horas con veinte minutos –como señaló la senadora García– duró el tratamiento en la comisión. Son temas de una enorme profundidad y temas donde hay discrepancias valorables que, quizás, podrían enriquecer la solución de los problemas

En nuestro interbloque hay diferentes opiniones: las respetamos y votaremos en forma diferente. En este sentido, voy a expresar, desde mis convicciones, qué pienso.

Creo que es absolutamente injusto descalificar o pensar mal de la provincia de San Luis porque haya manifestado que, por el momento, no va a firmar el acuerdo, porque se le exige que renuncie a lo que nosotros hemos ganado en un juicio. La provincia de San Luis tiene sentencia firme de hace dos años, señor presidente, con liquidación practicada, intimado el gobierno por la Corte Suprema de Justicia para que dialogue sobre la forma en que va a hacer frente a sus obligaciones, plazo que venció hace unos días sin que el Estado nacional cumpliera. Entonces, facilitar el diálogo para que el gobierno nacional pueda acordar con el gobierno de San Luis, creo que sería una cosa saludable para la República.

Con respecto a las otras cosas que plantea el acuerdo del consenso, muchos de los objetivos los compartimos plenamente. ¿Cómo no vamos a compartir la transparencia, el equilibrio fiscal, superar el déficit fiscal? Nuestra provincia hace treinta años que tiene superávit fiscal de manera ininterrumpida, fruto de un enorme esfuerzo en la forma de administrar la provincia de San Luis. Más aún, tenemos superávit fiscal pese a que la Nación nos debe una enorme cantidad de

dinero. No tenemos endeudamiento y tenemos una responsabilidad fiscal enorme.

En nuestra provincia hay una ley –que se cumple– que establece que el 50 por ciento de los recursos provinciales se utilizan para gastos corrientes y el otro 50 por ciento para inversiones en infraestructura económica y social. ¡Y hace más de veinte años que se cumple estrictamente con esas normas, que significan un enorme progreso para la provincia de San Luis!

Aclaro una vez más que me siento orgulloosamente peronista, por más que crean que el peronismo pasó de moda o por más que crean que han terminado con el peronismo. Entonces, mientras haya una persona que sufra en la Argentina, va a haber peronistas que defiendan sus convicciones, y yo estoy dispuesto a defender mis convicciones. Entonces, ahora viene mi discrepancia. ¿A quién estamos defendiendo? ¿Quién se beneficia y quién se perjudica? Opino que se benefician los poderosos y se perjudican los más débiles.

Si es en el consenso, muchas provincias desde la debilidad han tenido que firmar. Otras, como San Luis, quedan al margen porque no son escuchadas en un reclamo absolutamente razonable, porque nadie le ha pedido en ningún momento al gobierno nacional que pague al contado o anticipado, como pide la provincia de Buenos Aires. ¡No! Hemos dicho que estamos dispuestos a negociar, a que nos paguen con títulos, a que nos paguen en plazos. Lo digo públicamente y sería bueno que escucharan los miembros del gobierno.

Con respecto a las jubilaciones, dice en los fundamentos –y lo han mencionado aquí también– que se van a economizar 100 mil millones de pesos. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Economizan 100 mil millones de pesos que no les van a pagar a los jubilados. ¡Los jubilados ya tienen muchos problemas! En cada rincón de mi provincia reclaman por el PAMI: no los atienden, no les cubren más los remedios y no les aumentan los sueldos y muchísimas pensiones por discapacidad, etcétera, se las han quitado. Entonces, lo que estamos tratando resta derechos, disminuye los derechos y yo no estoy de acuerdo.

Al senador por el Chaco, el senador Rozas, a quien respeto –ha sido gobernador, hemos sido gobernadores juntos, hemos gobernado

en momentos lindos de la Argentina y en momentos de crisis en la Argentina–, debo decirle que no son solamente esos tres caminos, que generalmente es endeudarse, endeudarse, endeudarse y seguir con el déficit. Al déficit hay que atacarlo, al déficit hay que terminarlo y se lo hace gobernando bien, gastando menos de lo que se tiene. Si dilapidan los fondos, si nombran en las plantas de personal enorme cantidad de asesores, todos con sueldos elevadísimos, es muy difícil disminuir el déficit. Y es muy injusto disminuir el déficit disminuyéndoles derechos a los jubilados de la Argentina. ¡Discúlpennme, pero es el peor camino! Ya lo han transitado. Lo ha transitado Cambiemos cuando formaba parte de la Alianza y están cometiendo el mismo error, el mismo error. Empezó el ajuste y será cada vez peor.

Pero el peronismo, desde la calle, defenderá los derechos. Y yo estaré del lado de los más débiles.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.

Senador Pichetto: tiene la palabra para el cierre.

Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidente.

La pregunta es quién no quiere estar al lado de los más débiles. Por supuesto que, desde nuestra visión política y de pertenecer a un movimiento nacional, siempre hemos estado al lado de los sectores populares. Así que es una reflexión valedera la que acaba de hacer el senador Rodríguez Saá.

Que hay que ordenar el déficit público, indudablemente hay que hacerlo. El déficit comercial y el déficit público de la Argentina son insostenibles, yo diría, en el corto y mediano plazo. Seguir manteniendo una política de endeudamiento sin un ordenamiento fiscal razonable es insostenible. Seguir planteando tasas de interés en las LEBAC, que equivalen prácticamente a las reservas que tiene la Argentina, es insostenible. Plantear políticas que no impliquen crecimiento de la actividad económica y del empleo privado también es insostenible.

Abrir importaciones para traer cerdo de Dinamarca es estúpido y, además, es un interés mezquino privado de una sociedad anónima que está vinculada con el secretario de Comercio.

Lo pongo como un ejemplo que produce repulsión, porque hay un montón de productores argentinos que no pueden producir cerdo –porcinos– cuando podrían tranquilamente hacerlo en un territorio argentino que tiene todas las posibilidades de hacerlo y de crecer. Seguir haciendo negocios no es bueno para el país. Perder empleo, no resolver los temas de empresas que están en dificultades con concursos preventivos y que pueden cerrar es poco inteligente. Todos compartimos estas cosas.

Pero acá estamos hablando de un tema que tiene que ver con un acuerdo federal, que lo firmaron veintitrés gobernadores –no quiero hacer el detalle–, menos el gobernador de San Luis, el gobernador Alberto Rodríguez Saá, que no firmó y que tiene legitimidad, tiene solvencia económica. Siempre he valorado el cuidado de los recursos públicos en esa provincia, la eficiencia en la obra pública. Ellos no firmaron, pero veintitrés provincias han firmado un acuerdo fiscal, un acuerdo que implica resolver un tema muy complejo, en donde ya teníamos tiempo de descuento –reitero, tiempo de descuento– en orden a que la Corte en cualquier momento iba a resolver el tema del fondo del conurbano, a partir de una demanda hecha por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una medida de vía recursiva de amparo ante la Corte que venía dilatándose en el marco del proceso electoral. La Corte, con mucha prudencia, ganó tiempo, les permitió a los gobernadores expresar su opinión. No estaban demandadas las provincias, pero todos sabemos, todos somos conscientes de que los recursos son únicos y que el impacto de una resolución favorable a la provincia de Buenos Aires terminaba impactando en la masa de recursos que se coparticipan o que se distribuyen en los estados provinciales.

Todos hemos sido conscientes de que esta cuestión tenía que tener una resolución de naturaleza política a través de un acuerdo político. Uno de los ejes centrales de ese acuerdo político era la preservación de los recursos de las provincias, que las provincias no vieran que se disminuían sus recursos. Este era uno de los aspectos.

Yo tuve la posibilidad, a pedido de los gobernadores, de participar en la discusión del CFI, en la que se hizo presente el ministro del Interior. Si bien hay provincias que tienen muy

buena administración –no quiero nombrarlas porque no quiero ser antipático con alguna que no la tenga– hay realidades muy complejas en el conjunto de las provincias argentinas. Muchas de ellas tienen dificultades en el financiamiento y en el pago de los salarios.

Acá me apuntan muy bien –y es un detalle importante– lo relativo a la compensación de fondos, el subsidio a cajas provinciales que tienen modelos que ya no son compatibles con ningún sistema previsional. En las provincias muchas veces funcionan jubilaciones a una edad y el mundo ha cambiado. Treinta o veinte años de aportes o veinte inviernos, como se sostenía en algunas provincias patagónicas, eran suficientes para acceder a una jubilación importante. Hubo provincias en la Patagonia a partir de la década del 60 que se constituyeron a través de un proceso de migración interna, trayendo profesionales con el atractivo del modelo jubilatorio. Ese modelo voló por el aire. Mi provincia tenía un sistema en el que una mujer docente a los 45 años se jubilaba. Estaba bien porque en ese momento había que propender a que vinieran docentes de distintos lugares del país porque no había. En la provincia de Tierra del Fuego pasaba lo mismo al igual que en Santa Cruz. Muchos de esos modelos provinciales han colapsado y lo han resuelto enviando la caja al Estado nacional y otros todavía subsisten. Este tema también estaba en el debate y también se resolvió.

También se resolvió terminar con la litigiosidad. Estas demandas cruzadas entre los estados provinciales que reclamaban legítimamente por el 15 por ciento, por el 1,9 de la retención de la DGI, de un presupuesto del año 2006, en donde la Nación se quedó con el 15 por ciento de los estados provinciales precisamente, ¿para qué?, para subsidiar a la ANSES, que siempre ha sido uno de los temas más sensibles que hemos tenido, en un modelo del año 2005 donde teníamos 2.000.000 de jubilados, 1.800.000 jubilados, y estaba en vigencia el sistema de las AFJP y los sueldos mínimos de las AFJP no cubrían ni el salario mínimo, vital y móvil, y el Estado nacional tenía que financiar a las AFJP, encima de que se llevaban la plata de las comisiones. Entonces, ese era el modelo.

El gobierno anterior, el gobierno de la ex-presidenta de la Nación, en los últimos ocho

años de su gestión expandió fuertemente el sistema previsional. Lo hizo con una visión de distribución del ingreso, lo hizo pensando que había muchos sectores que estaban en una precariedad muy grande: amas de casa, mujeres que no tenían la edad, que no habían completado los aportes. Se implementó el sistema de moratoria, con lo cual todo fue agrandándose de una manera realmente muy importante. Nuestro sistema previsional tiene más de 7.000.000 de jubilados y hay una relación con los activos que no cierra de ninguna manera. No cierra.

La proporción en un sistema previsional, en general, es de tres activos por un pasivo y lo mejor, lo óptimo, son cinco activos por un pasivo. Ese modelo podría ser autosuficiente.

¿Qué tiene la Argentina, además? Una precariedad laboral e informalidad, trabajo en negro que, indudablemente, significa que no hay aportes.

Hay algo para analizar con una visión ciertamente positiva de esa reforma laboral que, la verdad, no vamos a votarla en el Senado, por lo menos, no sé si me van a poder convencer, porque no vale ninguna ley el desprestigio injusto de esta institución. Pero lo único positivo que tiene ese proyecto es el blanqueo de trabajadores para incorporar trabajadores al sistema en blanco, para que puedan hacer aportes y para fortalecer el sistema previsional argentino.

¿Qué quiero decir? Que este sistema creció de una manera inconmensurable. Pensiones no contributivas, pensiones por discapacidad hay casi 1.400.000. Hay casi 3.000.000 de moratoria. ¿Qué significa el concepto de moratoria? Que no hubo aportes del trabajador. Una cosa es un trabajador que durante treinta años aportó al sistema previsional y otra cosa es un trabajador al que la ley le permitió hacer aportes, con descuentos, todos los meses le pagaban la jubilación y le descontaban el aporte de autónomo de veinte, treinta años.

Fue un sistema generoso y, yo diría, casi del primer mundo, pero un modelo que se financia con el Estado. Este sistema no funciona de manera autónoma, requiere del financiamiento del Estado nacional y cada día es más grande este financiamiento. Hoy estamos casi en el 60 por ciento del presupuesto en el año 2018. Al 48 o al 50 por ciento estamos llegando en 2017 y la tendencia es al crecimiento. Fíjense

en la dimensión del gasto social de la AUH, de la asignación universal, de las asignaciones familiares.

¿Es justo? Claro que es justo y que el Estado tiene que propender a ayudar a los humildes. ¿Y cómo podemos no compartir eso? Claro que lo compartimos. Ahora, indudablemente, si lo analizamos en un proceso de análisis económico es complejo desde el punto de vista de la extensión de la vida, de la prolongación de la vida, del aumento del trabajo en negro en la Argentina; de que en cualquier actividad, acá en el Once, hay talleres clandestinos, extranjeros que trabajan de manera ilegal y que hacen trabajar a argentinos ilegales. En fin, toda la gama sobre la que no quiero pasarme de nuevo, porque me pongo, a lo mejor, a decir algunas aseveraciones y después se me descalifica por eso.

Este es el mundo que tenemos. El mundo de La Salada, de La Saladita, La Saladita caminando por la calle. La patria informal, la estructura ilegal, el funcionamiento informal del trabajo son casi superiores al marco legal, al trabajo legal, al trabajo blanqueado.

Esto no fue dicho por ningún funcionario del gobierno. Porque el gobierno no habla, sigue el consejo de Durán Barba. Entonces, “no hablemos de este tema porque perdemos votos”, “no expliquemos a la sociedad argentina esto porque nadie lo habla”. Lo hablan los periodistas, lo hablan los curas, lo habla la CGT, que tiene que preocuparse por los trabajadores activos.

Acá está todo cambiado. Los curas tienen que ocuparse de los problemas de la Iglesia, que hay algunos que son bastante complejos. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mi visión del Estado es laica.

—La señora senadora Negre de Alonso realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. — No doy interrupciones.

Creo que la tarea de la Iglesia es pastoral, humanística, con una visión de defensa de los pobres, de los humildes. Cuando se meten en el andarivel político estamos con problemas. Y esto lo dije antes. No lo digo ahora, lo dije siempre. Y siempre lo expreso. Los que me conocen, lo saben. Tengo el máximo de los respetos. Soy católico, no voy nunca a la iglesia, pero, en fin...

¿Qué quiero decir? Que acá cualquiera opina de cualquier cosa. ¿Y saben por qué? Porque no hay un ordenador comunicacional del gobierno en los grandes temas.

El acuerdo fiscal tenía claridad en orden a mantener en las provincias los recursos. ¿Saben para qué? Para que los gobernadores puedan pagar los sueldos a fin de mes, para que puedan dar clases. Hay una provincia donde no empezaron las clases o tiene problemas con las clases. Y hay otras que tienen dificultades para pagar salarios.

Entonces, los gobernadores firmaron a sabiendas, con el conocimiento fehaciente de que una de las condiciones era revisar una cláusula de ajuste previsional que fue por encima de la inflación y del salario real de los trabajadores. Si uno analiza el funcionamiento de la fórmula de ajuste de los jubilados, advierte que creció más que el salario de los activos, casi un 29 por ciento más en el promedio de 2009 a la fecha. Es un dato realmente interesante.

Nos hubiera gustado escuchar al director de la ANSES explicando todas estas cosas: profundidad, conocimiento, transmitir a la opinión pública.

Están tratando de hacer ahora una corrección que es aproximadamente el uno por ciento del presupuesto. El año pasado tomaron una medida realmente equivocada. No quiero descalificar: equivocada. Yo diría que la tomaron porque tienen problemas culposos. Tienen problemas de culpa. Como hacían el blanqueo, tenían que incorporar la reparación histórica. ¿Y saben cuánto significó en términos del déficit? El 1,9. ¿Y saben lo que significó, además? Un reconocimiento a todos los planteos judiciales y administrativos que estaban en discusión. Muchos de ellos pueden ser legítimos y otros no. Y el Estado pleiteaba. Y la Corte había resuelto en el marco de las cuestiones previsionales el fallo “Badaro”, que había dado un paraguas desde el punto de vista de lo que significaba el modelo de ajuste previsional, pero había que ganar el juicio y había que acreditar que el reclamo de ese jubilado era justo, era legítimo y correspondía.

En cambio, con la ley de reparación histórica todos tenían razón. El argumento era que se iba a paralizar la industria del juicio. La industria del juicio se viralizó, las acciones administrativas crecieron hasta el infinito. ¡Todos tienen razón! El Estado dejó de discutir la legitimidad

de las demandas. La verdad, es de una torpeza absoluta.

Mire, el gobierno anterior pagaba entre 12 mil y 15 mil sentencias por año. Y lo que yo le quiero decir también es que, muchas veces, los criterios judiciales y la visión que se tiene sobre este tema no comprenden la realidad de que es el Estado el que tiene que sostener el sistema. ¿Y sabe cómo se sostiene el sistema? Con más impuestos. De algún lado sale. La carga impositiva de la Argentina en materia productiva, en materia comercial, es muy alta.

¿Qué quiero decir? Que este es un tema que habrá que abordarlo con seriedad y responsabilidad. Miren, estamos dándole el 82 por ciento a más de 1.400.000 jubilados en esta reforma que hemos hecho, en el debate de esta comisión, de este trámite medio rápido –como dijo el senador Rodríguez Saá–, pero hemos incorporado cosas importantes.

En efecto, 1.400.000 jubilados van a cobrar el 82 por ciento. Reciben un aumento directo de más de 540 pesos; están fuera del marco de la fórmula. Yo no escuché a ningún analista ni a ningún comentarista hablar de este tema. Nadie habla de este tema: 1.400.000 jubilados van a cobrar el 82 por ciento, aportantes con treinta años de aportes, y me parece legítima esa diferenciación. Aportantes.

Segundo tema: ampliamos la posibilidad de que el trabajador que se considera activo, que tiene ganas de seguir trabajando, pueda hacerlo. Y a mí me parece bueno este tema. No es imperativo. Es voluntario. Si alguien quiere seguir en la actividad, puede hacerlo. Si se siente bien de salud, si está bien de la cabeza, si tiene ganas de trabajar puede hacerlo. Y hay ahí también un conjunto de ventajas en términos de la relación del empleo y de los aportes con el empleador.

El otro punto es que hemos mejorado la fórmula. Este Senado ha mejorado la fórmula. ¿Sabe por qué? Porque la fórmula del gobierno era mala, muy mala, y porque, además, mencionaba un rubro que nadie entiende, que es el PBI: 0,2 del PBI, producto bruto interno. Nunca nadie sabe cómo se va a calcular eso y hemos puesto la inflación. Hemos sacado este concepto del PBI y hemos puesto el salario de los trabajadores, el denominado RIPTE, que es la pauta salarial que todos los años los sindicatos argentinos discuten

con el empleador en términos del aumento del porcentaje.

Yo lo que espero, porque he visto una gran preocupación de la CGT en este tema, es que trabajen el aumento salarial, en la discusión de la pauta salarial, siempre arriba de la inflación para los activos. Cuando logren eso, indudablemente, esto va a impactar con una mejora importante para los jubilados.

Y el otro asunto es la inflación. He escuchado la estupidez de decir que, si baja la inflación, va a bajar el salario de los jubilados. ¡Ojalá en la Argentina bajara la inflación!, porque el poder adquisitivo sería real, porque no se devaluaría en el supermercado. ¡Ojalá pudiéramos ser un país normal sin inflación!

En fin, ¿qué quiero decir? Hemos puesto dos elementos concretos. Y yo no mido este tema en función de marzo, que puede ser..., no sé, hay una diferencia de 520 o de 580... Yo lo mido en función de una planificación seria de cara al futuro. No hay ningún país del mundo, ninguno, que no ajuste por vía salario y por vía de inflación. ¿Sabe por qué no lo hicimos antes de esta manera? Esta era la propuesta que tenía la oposición radical y, también, de Cambiemos cuando eran opositores a la fórmula que pusimos nosotros, que era salario más inflación, RIPTE más inflación.

¿Qué quiero decir? Que me parece que esto es más certero, es más razonable, es más realista y tiene que ver con cosas concretas que el común de la gente maneja.

El salario del jubilado tiene que mantener su poder adquisitivo; tiene que mantener el poder adquisitivo desde el momento en que se jubila. En algún momento, habrá que debatir cómo votamos aquí, en el Congreso, una reformulación del sistema previsional. En lo personal, tengo algunas ideas. No las voy a decir ahora porque es otro debate.

Pero estas tres leyes —que vamos a votar en forma separada— formaron parte del acuerdo. Que nadie se haga el distraído acá. Todos sabían lo que firmaban, porque dentro del acuerdo estaba consignada la cláusula previsional. Como nosotros tenemos un marco de responsabilidad con nuestras provincias y con nuestros gobernadores, nos toca la ingrata tarea de tener que votar esta ley porque, acompañamos a los goberna-

dores y porque creemos que los acuerdos y los pactos, cuando se firman, hay que cumplirlos.

Lo que creo también es que el gobierno tiene que explicar, que el jefe de Gabinete explique, que el señor Basavilbaso explique, que el ministro de Economía explique los temas que llevan adelante, que no traten de ningunear los temas porque, si no, la sociedad no sabe lo que pasa. Y lo más fácil es venir a gritarles a los senadores que son entregadores, que están en contra de los jubilados. Esto es lo que pasa siempre. El hilo se corta por lo más fino. Estamos votando este proyecto porque es un proyecto del Poder Ejecutivo y porque nuestros gobernadores lo avalaron con su firma. ¿Está claro? Esta idea es del Ejecutivo, es del gobierno nacional, que para resolver la pérdida y el déficit del 1,9 de la reparación, que fue una resolución totalmente ilógica, ilógica... El blanqueo se lo hubiéramos votado igual. ¿Sabe por qué? Porque habíamos votado tres blanqueos anteriormente, en el gobierno anterior, y no nos poníamos colorados cuando votábamos blanqueo, porque son instrumentos de política económica de determinada coyuntura. Esto es lo que ha pasado.

Es todo vinculado. Nadie fue sorprendido ni a nadie le pusieron un arma en la cabeza. Todos sabían lo que firmaban y el debate se planteó acá con la presencia de los gobernadores.

Lo que quiero decir es que una parte de mi bloque va a acompañar. Yo respeto la posición de otros compañeros que tienen una visión crítica respecto de este tema. No es un tema fácil. No es un tema fácil. Es un tema realmente complejo.

No repitan este tipo de medidas. No las repitan, porque creo que además no van a pasar más por el Congreso. Hay una mala experiencia con de la Rúa cuando metió medidas de ajuste que profundizaron después la crisis. No lo hagan. Esto es una decisión coyuntural. Es por un tiempo reducido, de corto plazo, donde hay que abordar una temática de fondo del sistema previsional: qué se hace con el sistema de pensiones, si se lo mantiene dentro de la estructura previsional, si no se lo mantiene, si se lo desengancha, si el Estado puede sostener todo este modelo de 7, 10 millones de jubilados, en fin...

Son interrogantes que hay que plantearse. ¿Sabe qué? Sin demagogia, con responsabilidad institucional y tratando de buscar soluciones a

los problemas. La economía tiene que crecer porque, de lo contrario, no sirve de nada esto. No sirve. Este ahorro que puede hacerse o esta modificación no sirve para nada si la economía argentina no crece, si no crece el empleo privado, si no sostienen la industria en el espacio urbano de la provincia de Buenos Aires, que es un tema altamente delicado, ya que se están cerrando fábricas. Si no se cuida el tema de las importaciones, todos los esfuerzos que se puedan hacer con un sentido positivo no van a servir de nada. Si no se modifica la política, si no cambian la política económica con las LEBAC y las tasas de interés, ¿quién va a apostar a la inversión, a la producción y al empleo si no se puede producir en la Argentina?

Entonces, presidente, vamos a trabajar esta cuestión y la vamos a apoyar –repito, creo que una parte de los senadores de mi bloque la van a apoyar–, en cumplimiento de lo firmado por los gobernadores de nuestro partido y también de otros partidos políticos. Veintitrés gobernadores han firmado esto.

Esto tiene que ver con el destino de las provincias. Mañana por la mañana, cuando se despierten los compatriotas en los estados provinciales tienen que saber que el peronismo ha cuidado que los trabajadores públicos provinciales cobren su sueldo, que los sistemas públicos de educación y de salud se sigan llevando adelante, que las cajas provinciales de las provincias puedan seguir pagando las jubilaciones.

Tiene que ver con eso; tiene que ver con todo eso. Nada más, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador. Senador Naidenoff, tiene el cierre.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Presidente: la Argentina es compleja y creo que a lo largo de este debate ha quedado en claro que quizás esta complejidad venga de la mano de no asumir la realidad.

El peor error que se puede cometer en política, o desde la administración del Estado, es no hacerse cargo de las cosas. Aquí estamos discutiendo uno de los aspectos centrales o, quizás, una de las materias pendientes de la política en la Argentina que tiene que ver con el abordaje fiscal. Y este abordaje, claro está, viene de la mano del federalismo, porque, por

las posiciones que hemos escuchado, el debate fue federal. Tan federal fue que se planteó como una cuestión previa la discusión que se dio en el marco, justamente, de la Comisión de Coparticipación.

Ahora, ¿cómo resolvemos en el marco del federalismo los problemas pendientes, de arrastre, de la Argentina en un contexto fiscal complejo, con la consolidación del sector público argentino Nación-provincias? Porque hay que decir las cosas como están, no las vamos a esconder. Para el año 2016 surge un desequilibrio fiscal global del 7,85 por ciento, rigidez del gasto en las provincias del orden del 88 por ciento en 2016, con poco margen, muy finito, para la inversión. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo afrontamos este desafío fiscal?

Claro, nos podemos parar de dos maneras. Algunas provincias –no todas– están en situación de cierto privilegio en el contexto de su autonomía o, fundamentalmente, de su manejo económico. Ese privilegio les puede permitir decir “no acuerdo” en el marco del federalismo de concertación y están en todo su derecho.

Pero también un país se forja con un sentido de identidad propia. La Nación implica eso: un destino común. Y no hay destino común si no se tiene la capacidad de construir grandes acuerdos para resolver estos problemas pendientes. No hay destino común.

Y este acuerdo tiene mucha madurez. Hay un gobernador que cuando expuso en el plenario de comisiones dijo que este es el acuerdo de la sensatez. Y lo decía, creo yo, desde una provincia que puede exhibir, a diferencia de otras, cuentas públicas medianamente ordenadas, que no están en una situación límite o de apremio. Pero si no hay reciprocidad, si no se tiene la capacidad de construir en conjunto para resolver y abordar estos problemas, no hay salida. O la salida es la mirada histórica del corto plazo, de la especulación chiquita, de la vuelta de la esquina, de cómo nos plantamos o podemos quedar parados si metemos palos en la rueda para la próxima contienda electoral.

En realidad, como gobierno no solamente tenemos que poner en valor el acuerdo de los veintitrés gobernadores de provincia, tenemos que poner en valor la madurez y el salto de calidad que se han dado prácticamente en estos veinticuatro meses de gestión del gobierno de

Cambiemos. Se aprobaron leyes importantes para el gobierno y para el país y lo logramos con el acompañamiento de aquellos diputados y senadores que tienen un alto sentido de responsabilidad.

Hay dos Argentinas que se transitan, dos miradas de la Argentina en los últimos tiempos: la que apuesta al futuro y también la de una oposición que se interpela renovándose, “aggiornándose”, para enfrentar los problemas que tenemos. Y está la vieja, la que se queda en el atajo –porque siempre es más fácil el atajo– o mirando el pasado, olvidándose de los errores propios y sin abordar con un salto de calidad los problemas que tenemos que resolver entre todos. Y consenso, para no repetirlo, es poner en valor la política.

Conociendo a muchos de los que administran el país o los que gobiernan –en mi caso– mi provincia, no los definiría como improvisados o que los van a llevar de la oreja para suscribir un convenio que no convenga a los estados provinciales. Acá hay compensaciones recíprocas, nadie pierde. Lo dijeron todos los gobernadores: nadie pierde. Desde luego que se toman medidas de manera gradual, el senador Romero lo decía.

El senador Romero lo decía. ¿De qué endeudamiento hablamos? Si venimos de una deuda por monetización y ahora la deuda tiene que ver con organismos internacionales. La deuda ha existido: la deuda interna o la deuda que se toma. ¿Cómo se afrontan los problemas? ¿Con mayor emisión, con mayor ficción? ¿Cómo resolvemos la cuestión previsional? Nosotros acompañamos y celebramos la moratoria que ha implicado que 3.100.000 argentinos puedan contar con sus ingresos, que estaban al margen porque la mayoría no aportó. Y, de 4.800.000 jubilados, hoy hay 8.000.000 cuyas prestaciones hay que afrontar mes a mes.

¿Cómo lo hacemos con una realidad económica como la argentina? ¿Vamos a mirar para atrás y decir que cuando asumimos heredamos el mayor déficit de la historia, que cuando asumimos la situación era tal? Me parece que no es el camino. Hay que tener madurez y sentido de responsabilidad política. ¡Sentido de responsabilidad política! Y eso es lo que se ha hecho en la Argentina con este acuerdo, con el consenso fiscal, con la ley de responsabilidad fiscal y con la reforma previsional.

Es mucho más fácil decir cómo se pierde con el cambio de fórmula, pero lo que nadie dice es que la vieja fórmula –la que estamos dejando sin efecto– no se puede poner en práctica, en primer lugar, porque fue una ficción, porque cuando se la aplicó nunca se incorporaron los jubilados que ingresaron por la vía de la moratoria. En segundo lugar, porque es procíclica: cuando el país no crece, los haberes no están por encima de la inflación. Ya nos ha pasado: 2014, 2016... No es una fórmula que garantice justamente mejoras constantes en el tiempo. Y, en tercer lugar, porque no se la puede aplicar, porque con el consenso fiscal derogamos el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por lo tanto, al modificarse el criterio de distribución, esta fórmula de la movilidad no tiene sentido.

Y quiero rescatar, porque acá se habló de unicato, de disciplinamiento, de escribanía... Miren: quiero mirar para adelante. Lo que sí quiero poner en valor acá, desde el Senado, es que no se aprobó a libro cerrado el proyecto del Ejecutivo ni siquiera la pretensión inicial de muchos gobernadores.

La cláusula de la movilidad fue una propuesta del bloque opositor, que surgió del Senado, porque no corría, porque acá hay sentido de calle, no solamente el sentido de quienes tienen la responsabilidad de administrar. Y ese sentido de calle encontró una ecuación que garantiza no perder el poder adquisitivo, porque esa es la esencia de la movilidad. La esencia de la movilidad es no perder el poder adquisitivo.

Y no se pierde el poder adquisitivo, sino que también nos vamos a encontrar con esta ecuación de actualización vía inflación, más el RIPTE, que es el incremento de los trabajadores formales, que van a dar un aumento superior a la inflación. Esa es la fórmula que se encontró para una salida difícil. Pero hay que decir las cosas como son: el sistema tiene señales de alarma, no solamente la relación de la tasa de aportantes o la informalidad, sino que también la evasión, en la Argentina, contribuye a estas cosas.

Entonces, presidente –no me quiero extender porque se habló muchísimo–, solamente quiero decirles que acá hay responsabilidad política en este cuerpo, de los que acompañan y de los que votan a favor de este paquete de medidas. No es un acto de salvataje, tampoco es la reforma, es un primer paso. Es un primer paso de los tantos,

como tantos pactos fiscales que se celebraron en la Argentina en otros tiempos. En otros momentos firmaron las veinticuatro provincias argentinas. Y en otros tiempos, en otro contexto, se firmaron pactos que implicaban la transferencia a las provincias de los servicios de educación y de la salud, sin la debida contraprestación, y los firmaron todos.

Acá nos compensamos. Acá nadie pierde. No sé si habrá margen para triunfalismos, pero, ¿saben qué?, ganó la responsabilidad. Así que, presidente, con pleno convencimiento, desde nuestro bloque vamos a acompañar el paquete de medidas propuestas por el Ejecutivo con las reformas que se han incorporado.

Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor senador.

Corresponde la autorización de las inserciones y de las abstenciones para la votación del Orden del Día N° 939, sobre reforma de la actualización previsional.

Se va a votar la autorización de inserciones y abstenciones.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se votó.

Quiero pedir que se identifiquen los que se van a abstener. Se toma nota.

Señor miembro informante: le voy a preguntar si va a haber modificaciones sobre el texto, si no, lo someto a votación en general.

Sr. Cobos. – Señor presidente: es una modificación, más que todo, formal, porque si no estaríamos convalidando una incoherencia.

El artículo 1°, en el despacho de la comisión, aceptó la propuesta de la oposición en cuanto a cambiar la fórmula de movilidad que, como bien lo explicó el senador Pichetto, estaba basada en la inflación más un porcentaje del PBI. El artículo 1° queda, entonces, tal cual fue explicitado: 70 por ciento en función de la inflación y 30 por ciento en función de la variación salarial.

Entonces, el artículo 2°, que dice: “La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente se hará efectiva a partir del 1° de marzo del 18”, queda tal cual. Y corresponde anular lo que sigue que expresaba lo siguiente: “de acuerdo a la variación experimentada por el nivel general del índice

de precios al consumidor nacional establecido por el INDEC para el tercer trimestre de 2017”.

Como ya está establecida otra metodología, esto no condice con lo anterior. Es la única modificación. No cambia la numeración.

Sr. Presidente (Pinedo). – ¿Es la única modificación que se va a aceptar?

Sr. Cobos. – Propongo que se vote en general y en particular.

Sr. Presidente (Pinedo). – Le estoy preguntando si es la única modificación que se va a aceptar. En tal caso, voy a someter a votación en general y en particular.

¿No va a haber otras modificaciones, señor senador?

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar en general...

Sr. Rodríguez Saá. – ¿Qué vamos a votar, señor presidente?

Sr. Presidente (Pinedo). – Estamos votando el dictamen de la comisión con la modificación leída por el señor senador Cobos.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Es el Orden del Día N° 939, sobre reforma de la actualización previsional.

Sr. Luenzo. – Yo quiero hacer una propuesta de modificación.

Sr. Presidente (Pinedo). – Senador Luenzo: tengo entendido que usted quiere hacer una propuesta de modificación en particular.

Sr. Luenzo. – Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – Primero, lo vamos a votar en general, por sugerencia de varios señores senadores. Así que vamos a votar primero en general y, luego, le doy el uso de la palabra.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI (O.D. N° 939/17
y O.D. N° 940/17)

Señora presidente:

Por la presente quiero referirme a los proyectos que corresponden al O.D. N° 939/17 –expediente P.E.-391/17– y al O.D. N° 940/17 –expediente P.E.-390/17–. El primero de ellos trata sobre las modificaciones al régimen previsional en cuanto a la movilidad de las prestaciones y tiene por objeto ajustarlas para lograr

un ahorro en las cuentas públicas para poder financiar y subsidiar a los sectores concentrados de la economía, que es lo que el Poder Ejecutivo nacional viene haciendo desde que asumió.

Esta modificación en la fórmula para determinar la movilidad en las prestaciones que envía el Poder Ejecutivo es una de las herramientas o medidas previstas por el gobierno para lograr un ahorro en las cuentas públicas y de esa manera empezar a poner en vigencia el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, que incumbe al segundo orden del día mencionado.

La situación financiera y económica de la provincia que represento como senador nacional era y es sumamente delicada, con un gran déficit presupuestario, con una caja de jubilaciones colapsada desde lo económico-financiero, con atrasos en pagos de salarios, etcétera, y en tan solo dos años de gestión de la gobernadora Roxana Bertone se fue orientando su rumbo económico-financiero, acomodando sus cuentas públicas y creando las condiciones para crecer, siempre cuidando lo social y sin ajustar.

Lamentablemente la visión del gobierno nacional es diametralmente opuesta. Este considera que las condiciones para tener una economía pujante, en expansión y creadora de empleos requieren ajustar desde lo social y favorecer a los sectores concentradores de la economía y por eso desregula el sistema financiero, desgrava a las grandes empresas, deroga todas las trabas para las importaciones sin distinguir entre bienes de capital o no, quita retenciones a las mineras y reduce a su mínima expresión las que gravan a los *commodities* agropecuarios, etcétera. Obviamente esta desfinanciación en la recaudación del Estado debe suplirse o reemplazarse por otro lado y así es como se disminuyen los subsidios a los servicios públicos, los salarios son considerados un costo laboral y se busca su reducción a la vez de flexibilizar las condiciones de trabajo en detrimento de los derechos de los trabajadores. Lo mismo ocurre con las prestaciones jubilatorias y con toda otra inversión en lo social que el matiz ideológico del gobierno solo ve como un gasto.

Mi provincia, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, depende para su desarrollo y funcionamiento de los dineros provenientes de la coparticipación federal y, pese a que no concordamos con el gobierno nacional en cuanto a su política económica y social, no es menos cierto que tengo una responsabilidad institucional y por ello debo dar mi voto positivo a ambos proyectos, ya que de lo contrario la provincia se encontraría en serios problemas para poder cumplir sus compromisos.

La necesidad de que mi provincia cuente con los fondos de coparticipación federal y el auxilio económico necesario para hacer frente a sus obligaciones es lo que torna mi voto en positivo, pero es el único motivo que lo justifica, ya que mi visión política, económica

y social se encuentra en las antípodas del gobierno nacional.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA BLAS (O.D. N° 939/17)

Señora presidente:

Vengo a fundamentar mi voto y posición respecto al proyecto de ley de reforma previsional que envió el Poder Ejecutivo, cuyo orden del día es el 939/17.

Si analizamos el proyecto de ley de reforma previsional, este incluye tres aspectos bien determinados que impactan de manera directa en el sistema previsional argentino. Este proyecto que tratamos hoy realiza y nos trae un cambio rotundo respecto al cálculo de la movilidad bajo el argumento de que es correcto mantener el poder adquisitivo de las prestaciones preservando su valor mediante aquello que efectivamente erosiona, es decir, la variación de los índices de precios.

En primer lugar modifica el artículo 32 de la ley 24.241, de movilidad de las prestaciones, la que a propuesta de nuestro bloque mejora lo que originalmente se incluye en el proyecto y que propicia el cálculo de la movilidad en un 70 por ciento en las variaciones del nivel general del IPC –índice de precios del consumidor– y en un 30 por ciento por el coeficiente que surja de la variación del RIPTE –remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales–, el que se aplicará trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario.

Consideramos más razonable que el haber jubilatorio se actualice de acuerdo a la variación del salario de los trabajadores activos, por lo que creo en consecuencia que con esta base de cálculo se preserva el haber jubilatorio.

En segundo lugar, el proyecto de ley garantiza a los beneficiarios de la prestación básica universal –PBU– que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82 por ciento del valor del salario mínimo vital y móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, y sus modificatorias.

No se puede estar en desacuerdo con el otorgamiento del 82 por ciento móvil a la prestación básica universal, pero en mi opinión resulta discriminatoria ya que no alcanza a los beneficios previsionales que se otorgaron por aplicación de la ley 24.476, por el artículo 6° de la ley 25.994 o por la ley 26.970, todas ellas con las modificaciones introducidas por los artículos 20 a 22 de la ley 27.260.

Finalmente, modifica el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, permitiendo al trabajador, con carácter optativo, la permanencia en el empleo hasta los 70 años de edad.

La ampliación de la edad jubilatoria, llevándola a los 70 años, aunque se establezca como optativa, no favorece la generación de empleo y la apertura de fuentes de trabajo para nuestra población joven.

Necesitamos disminuir la tasa de desempleo y producir el recambio generacional en el mercado laboral.

Elevar a setenta años la posibilidad de jubilarse echa por tierra la posibilidad del ingreso al primer empleo. Tampoco favorece la recaudación previsional, como se pretende, toda vez que en su artículo 8° el presente proyecto de ley establece claramente que a partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la prestación básica universal establecida en el artículo 17, inciso a), de la ley 24.241 y sus modificatorias, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y, con respecto a las contribuciones patronales, únicamente aquellas con destino al régimen nacional de obras sociales y las cuotas del régimen de riesgos del trabajo, con lo que queda perfectamente demostrado que tampoco favorece el equilibrio que se busca entre aportes y beneficios previsionales.

Resulta además ajena a nuestra cultura e idiosincrasia, al menos en mi región, trabajar más allá de los sesenta y cinco años de edad. Nuestros mayores necesitan el goce pleno de su jubileo, disfrute y descanso en su entorno social y familiar. Necesitan una remuneración acorde a sus esfuerzos y a lo que dieron en su vida productiva.

Elevar a setenta años la edad jubilatoria no tiene antecedentes en ningún país del mundo. Si la expectativa de vida de una persona se amplía, que sea para disfrutar de su vida pasiva.

Confío y quiero creer que esta improvisada reforma sea transitoria y que, tal como lo mencionó en reiteradas oportunidades el ministro de Trabajo, se profundice en una discusión seria que beneficie plenamente a nuestros jubilados.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU (O.D. N° 939/17)

Señora presidente:

No tengo dudas de que esta reforma previsional es el segundo paso para destruir el sistema social y solidario que existe en la Argentina. El gobierno, que durante su campaña prometió mejorar las condiciones de los jubilados y pensionados, hoy atiende las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y da los siguientes pasos para desfinanciar definitivamente la ANSES y dejar descubiertos a nuestros adultos mayores y beneficiarios del sistema previsional.

Hasta el año 2015 teníamos la mejor cobertura de sistema previsional de toda América Latina: la mejor mínima, la mejor media, la mayor cobertura –alcanzando el 98 por ciento–, la mejor movilidad y el mejor Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El año pasado, a través de una supuesta reparación histórica, se dio el primer gran paso en contra de los jubilados, declarando una falsa emergencia en materia de litigiosidad. El objetivo de esa ley, además del blanqueo de capitales de dudosa procedencia en pleno contexto internacional de escándalo por los *Panama Papers*, fue comenzar con el vaciamiento de nuestro FGS.

Por medio de esa norma se impuso un supuesto beneficio, que en realidad se tradujo en la creación de una jubilación de segunda: la pensión universal al adulto mayor, por debajo de la mínima, no heredable por el cónyuge y sin beneficios básicos como la obra social del PAMI.

Como segundo paso, hoy estamos tratando un proyecto en el que no se logra vislumbrar una sola disposición que mejore las condiciones de vida de los beneficiarios del sistema jubilatorio. Esta reforma no solo vulnera los derechos del conjunto de los trabajadores activos y pasivos, sino que además desfinancia definitivamente a la seguridad social.

Esto ya lo hemos vivido, sabemos que con la norma propuesta el verdadero objetivo es realizar una brutal transferencia de los recursos, en forma discrecional y arbitraria, en favor de un Estado inactivo y de los privados. La rebaja de contribuciones a la seguridad social impulsada en la nueva reforma tributaria provocará el mismo efecto: vaciar la caja para el pago de las jubilaciones.

Por su parte, el pacto fiscal que redistribuye fondos de la coparticipación impositiva entre la Nación y las provincias pone como víctima al presupuesto de la ANSES. Esta batería de medidas tiende a un vaciamiento acelerado de las arcas previsionales y a la final liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

El objetivo de esta reforma es hacer explotar la ANSES en detrimento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que conquistamos hace casi 10 años. Este modelo era verdaderamente solidario, cíclico y beneficiaba de forma directa a los estados provinciales, ya que planteaba un método en el que se invertía a la seguridad social de forma permanente para sostener su financiamiento.

Los beneficiarios del SIPA vinculaban la evolución de sus prestaciones con la mejora salarial del conjunto de los trabajadores activos en las políticas de redistribución del ingreso entre el capital y el trabajo.

Lamentablemente hace dos años que los debates giran en torno al ajuste y quienes lo pagan son los trabajadores pasivos y activos junto con las provincias. Mientras, el gobierno nacional continúa liberando las retenciones de la renta sojera o minera a costas de nuestra soberanía.

Este conjunto de reformas propuestas por el Ejecutivo plantean un esquema diseñado solo para los sectores de altísimo poder adquisitivo y pensado para instalar beneficiarios de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría.

Señora presidente: el debate que debemos dar es otro. ¿Cómo reactivamos las economías provinciales, la industria, el empleo? ¿Cómo hacemos para que nuestros jubilados actuales y futuros puedan soñar con un mejor porvenir?

Conocemos el sistema hacia el que se quiere avanzar, ya hemos vivido la experiencia de las AFJP y no han aportado un solo peso a las actividades productivas ni a las economías regionales. Mientras ese modelo existió, el Estado tuvo que salir a cubrir la jubilación mínima del 77 por ciento de los contribuyentes del sistema de capitalización individual, lo que implicó una pérdida de 3.500 millones de pesos anuales en concepto de aportes y 6.000 millones de pesos con la reducción de las contribuciones patronales.

El debate de hoy plantea mucho más que un simple cambio de fórmula de reajuste y ninguna noticia es buena para los beneficiarios, ya que el único objetivo del gobierno es el del ahorro, más allá de a quiénes ni a cuántos se perjudique. Hablamos de algo más de 17 millones de personas, que integran los sectores más vulnerables de la sociedad, que el próximo año verán fuertemente recortados sus ingresos.

Esta propuesta es inadmisibles, sobre todo, porque el mundo que se viene en términos de empleo será mucho más difícil que el actual, por lo cual es imperioso sostener un sistema solidario, con mayores contribuciones y una clara presencia del Estado como regulador.

Los trabajadores que deben pagar este ajuste son quienes sostienen y han sostenido al país, tanto en los momentos más complejos como en los de mayor desarrollo; es a ellos a los que les debemos respeto y un futuro digno.

POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR LOVERA (O.D. N° 939/17)

Señora presidente:

Como representante del pueblo de la provincia de La Pampa, ciudadano argentino y hombre de la democracia, creo fervientemente que el diálogo abierto, la pluralidad de voces, el respeto mutuo y el consenso, constituyen las bases del sistema republicano y federal.

En pos de ello, veintidós provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional entablaron diferentes encuentros en busca de acercar posiciones y aunar criterios.

Ello implicó para los diferentes actores resignar o ceder intereses en pos de alcanzar acuerdos que en el futuro beneficiarán a todos los argentinos. Hicieron lo propio las provincias, pero también el Estado nacional.

Sabemos que la conflictividad y la falta de diálogo no nos conducen a buen puerto. Celebro, por ello, la firma de este consenso como puntapié inicial para un largo camino de discusiones, acuerdos y negociaciones que nos debemos los argentinos.

Creo fervientemente que este intercambio de compromisos es el modo para una verdadera transforma-

ción, como así también en la imperiosa necesidad de trabajar en el corto plazo en una nueva ley de coparticipación que contemple las necesidades nacionales, regionales y provinciales.

Señora presidente: apuesto, sueño, con una verdadera Argentina federal, con un país con paz y justicia social. Por tal razón, voy a ratificar legislativamente lo acordado y suscripto por el gobernador de mi provincia, en conjunto con el resto de los mandatarios provinciales y el Estado nacional.

Además, estoy convencido de que la búsqueda de una solución común a los problemas socioeconómicos imperantes, los compromisos asumidos y los entendimientos alcanzados contribuyen al fortalecimiento de la democracia.

Seguramente nos quedan muchas cuestiones por resolver, numerosas discusiones por sortear y diversos acuerdos que celebrar.

Importantes esfuerzos deberán realizar los gobiernos provinciales a tal fin. Pero, también, el gobierno nacional deberá multiplicar sus esfuerzos para que este acuerdo fortalezca al país en toda su extensión.

Por nuestra parte, en nombre de la responsabilidad político-institucional que nos corresponde, acompañaremos esta iniciativa y, con ello, vertimos todas nuestras esperanzas en el comienzo de una nueva instancia de diálogo y de compromiso recíproco entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Los pampeanos lo necesitamos.

No me caben dudas de que todos quienes nos encontramos en este recinto deseamos terminar con las inequidades provinciales y regionales, anhelamos avanzar en un ambiente de diálogo federal, acompañar el esfuerzo para bajar la presión tributaria y lograr con ello mayor competitividad en la producción y la generación de más y mejores empleos. De empleos dignos, señora presidente.

Este consenso al que se arribó debe constituirse en el piso o la base a partir de la cual debemos construir el futuro del país al que todos aspiramos.

Del mismo modo, debemos darle el espacio necesario al diálogo, al intercambio de opiniones, a la pluralidad de voces. No puedo más que estar en contra de los tratamientos exprés y con debates breves. La historia nos demuestra que, muchas veces, las consecuencias por actuar con premura, cuando se requería de un espacio de diálogo mayor, resultaron graves para nuestro país.

Por esta razón, mi postura respecto de la firma del dictamen del proyecto de ley de reforma previsional fue la disidencia parcial.

Entiendo que debemos priorizar la voluntad de nuestro gobernador frente al compromiso asumido en el consenso fiscal que, como ya adelanté, celebramos y compartimos. Pero, en igual sentido, estamos convencidos de que debería haberse estudiado con mayor profundidad el índice de movilidad y actualización,

el impacto social respecto a la opción de la edad jubilatoria, las consecuencias económico-sociales que tal modificación producirá en los haberes jubilatorios y con mayor énfasis en las jubilaciones más bajas.

No estamos discutiendo sólo números, estamos legislando sobre el futuro de millones de personas, de nuestros jubilados que tanto han sufrido las desacertadas decisiones políticas a lo largo de la historia.

En mi condición de representante de los trabajadores debo expresar mi pesar ante la falta de convocatoria a la CGT para debatir al respecto junto a los gobernadores. No estamos hablando solo de una reforma, se encuentran en juego políticas públicas con profunda incidencia social.

Si no hubiese existido tanta premura en el tratamiento del expediente P.E.-391/17, de reforma previsional, y se hubiese garantizado mayor participación y pluralidad de voces, habríamos alcanzado consensos que dotaran de mayor legitimidad a las decisiones y un compromiso más acabado con los derechos de todos los argentinos.

Debemos ser cautos, responsables y comprometidos. Escuchar a todos quienes deseen pronunciarse al respecto. Somos los representantes del pueblo, de todos y cada uno de los habitantes. Debemos asumir tal rol y velar por el bienestar de la ciudadanía en su conjunto. Solo después de ello estaremos en condiciones de adoptar una decisión acabada, responsable y garante del bien común.

Tres órdenes del día fueron acordadas por los gobernadores de todas las provincias argentinas: el O.D. N° 939/17, sobre reforma previsional; el O.D. N° 940/17, sobre consenso fiscal, y el O.D. N° 941/17, sobre régimen federal de responsabilidad fiscal. Estas tres iniciativas en bloque fueron consensuadas por los máximos representantes políticos del país. Por tal motivo acompañaremos con nuestro voto los órdenes del día 940 y 941 en general y en particular.

En referencia al O.D. N° 939/17, sobre reforma previsional, nuestra provincia se comprometió en el consenso fiscal a “impulsar la modificación de la fórmula de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público para que se ajusten trimestralmente, garantizando aumentos por encima de la inflación” y a “garantizar haberes equivalentes al 82 por ciento móvil para quienes hayan cumplido los 30 años de servicios con aportes efectivos”.

Por todo lo expuesto, de acuerdo a la postura adoptada en el seno de la comisión y respetando la voluntad y el compromiso asumido por el gobernador de nuestra provincia, vamos a acompañar en general este proyecto. Destacamos, especialmente, la incorporación del 82 por ciento móvil, medida que adoptamos en nuestra provincia hace más de diez años y que nos hemos comprometido a mantener en pos del bienestar de nuestros jubilados. Asimismo, teniendo en cuenta que no pudimos incorporar modificaciones superadoras respecto al índice de movilidad y actualización,

previstos en el capítulo I, votaremos negativamente esos artículos, como así también la extensión optativa de la edad jubilatoria.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se vota en general.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Pichetto. – Había cuatro abstenciones.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son tres abstenciones.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a tener que volver a votar porque se cargaron mal las abstenciones.

Sr. Secretario (Tunessi). – Son tres abstenciones.

Sr. Rozas. – ¿Quiénes son los que se abstienen?

Sr. Secretario (Tunessi). – Senadores Abal Medina, Luenzo y Linares.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Negre de Alonso. – Si el senador Luenzo se abstiene, no va poder hacer la propuesta de modificación...

Sr. Presidente (Pinedo). – Désela a su compañero para que haga la propuesta...

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Durango. – ¿Estamos votando otra vez?

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar lo mismo, otra vez en general.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del Día N° 939: afirmativos, 43 votos; negativos, 23 votos; abstenciones, 3.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.²

Sr. Presidente (Pinedo). – En consideración en particular.

Si no hay objeciones, se va a votar de acuerdo al dictamen de comisión en una sola votación en particular, con las modificaciones leídas por el señor senador Cobos.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

Sra. Mirkin. – Yo me voy a abstener en el artículo 5º.

Sr. Presidente (Pinedo). – Muy bien.

¿Quiere hacer votar artículo por artículo? No tengo problema.

–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pinedo). – Vamos a votar artículo por artículo.

Sr. Pichetto. – Hay un acuerdo mayoritario, presidente...

Sr. Presidente (Pinedo). – Artículo 1º...

Sr. Pichetto. – Presidente: hay una aceptación de la modificación.

Senadora: ¿por qué no dice cuál es la diferencia...?

Sr. Presidente (Pinedo). – No, no. Porque simplemente se quieren abstener.

Sra. Durango. – No. Yo tengo una serie de artículos que los quiero votar negativamente y otros positivamente. Entonces, quiero que estén discriminados.

Sr. Presidente (Pinedo). – Si usted quiere, nos dice los artículos y tomamos nota de cuáles son los votos negativos.

Sra. Durango. – Bueno, ahora se los dice el senador Lovera.

Sr. Presidente (Pinedo). – Díganos, senador Lovera.

Sr. Lovera. – Señor presidente: vamos a votar en forma negativa los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º y 9º.

Sra. Mirkin. – Presidente...

Sr. Presidente (Pinedo). – Senadora Mirkin.

Sra. Mirkin. – Me abstengo en el artículo 5º.

Sr. Presidente (Pinedo). – Se toma nota. Con esas manifestaciones, se va a votar en particular en una sola votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – El resultado de la votación en particular es: afirmativos, 42 votos; negativos, 24 votos; abstenciones, 3. Y en el artículo 5º, cuatro abstenciones, porque se abstiene la senadora Mirkin. Y se consigna el voto negativo en los artículos 1º, 2º, 3º, 7º, 8º y 9º del senador Lovera y de la senadora Durango.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación.²

Corresponde la autorización de inserciones para la votación del Orden del Día N° 940, sobre consenso fiscal.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Autorizamos las inserciones y abstenciones.³

Si no hay objeciones, se va a votar en general y en particular en una sola votación.

Sra. García. – Pido la palabra.

Sra. Labado. – Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pinedo). – Me piden la palabra las senadoras García y Labado.

Tiene la palabra la senadora García.

Sra. García. – Gracias, presidente.

Para manifestar y para pedir autorización para abstenerme en los órdenes del día números 940 y 941.

Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra la senadora Labado. ¿Es para lo mismo?

Sra. Labado. – Para lo mismo, presidente.

Sr. Presidente (Pinedo). – La senadora García y la senadora Labado se abstienen en esta votación y en la siguiente.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU (O.D. N° 940/17)

Señora presidente:

Considero que el paquete de reformas que han ingresado al Congreso podría haber representado un punto de inflexión histórico. No obstante, como consecuencia del apuro por aprobar de manera urgente estas leyes, volvemos a posponer una discusión nunca saldada: cuáles son las bases fundamentales del verdadero federalismo.

Existe una realidad que no se puede negar: las distintas provincias del país sufren de manera ascendente la dependencia por la discrecionalidad del gobierno nacional. Desde la coparticipación hasta la obra pública o los impuestos que afectan directamente a las economías regionales y les generan crisis que llegan a destruirlas definitivamente.

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

Quiero saber cómo vamos a resolver en el futuro el problema de la falta de financiamiento que tienen nuestros distritos, que además ahora comienzan a tomar deuda en dólares y a partir de ahora deberán enfrentar nuevos problemas.

Todos los diarios lo han señalado: la gran ganadora de esta reforma es la provincia de Buenos Aires y, frente a ese triunfo, hay 23 jurisdicciones perdedoras. Esto se traduce en una clara violación a los derechos adquiridos por el conjunto de las provincias argentinas en contradicción con el sistema federal de gobierno.

El beneficio recibido por los distintos estados provinciales hace más de veinte años fue pensado como una forma de fortalecer al federalismo, con el fin de potenciar el crecimiento y el desarrollo económico del interior profundo.

En cambio, una vez más, nos subordinamos a las decisiones del Ejecutivo y exponemos a nuestros gobernadores a tener que aceptar todo condicionamiento del gobierno porque, si no, no hay recursos para el desarrollo.

La reforma tributaria, que modifica impuestos coparticipables como ganancias, impuestos internos, impuesto al cheque e ingresos brutos, entre otros, desfinancia de manera directa a las provincias. Una vez más no damos la discusión que tenemos que dar: dónde está el federalismo y cuáles van a ser las políticas de Estado que vamos a encarar en el futuro para fortalecerlo.

Mientras el gobierno nacional ha contraído deuda externa por más de 150 millones de dólares para cubrir un déficit que no ha resuelto, le pide a las provincias que cedan la autonomía. Es inadmisibles, señora presidente, porque este acuerdo a cambio promete bonos que aún no se empezaron a conversar y además se introducen reformas que no tienen en cuenta las características de cada una de las provincias que conforman el país.

Como representante de la provincia de Río Negro y como fiel defensora del federalismo, no voy a acompañar este proyecto ni estoy dispuesta a avalar un camino recesivo en los ingresos de las provincias.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA LUNA (O.D. N° 940/17)

Señora presidente:

Lo que viene para su tratamiento en esta oportunidad reviste el título de Consenso Fiscal entre la Nación y las Provincias.

El acuerdo avanza en un conjunto muy amplio de materias que incluyen cuestiones tributarias, administrativas, previsionales y fiscales en general y se presenta como una batería de medidas tendientes a resolver progresivamente el déficit fiscal y –entre otras cosas– ordenar la relación financiera con las provincias en términos de sustentabilidad y de equilibrio.

Muchas de las medidas contempladas en este acuerdo, como otras que se conocen por distintos medios, nos remiten a otros intentos que fracasaron en el pasado

inscribiéndose en la misma lógica de ajuste sobre los sectores más vulnerables mientras se favorece a los de mayor capacidad de aporte.

Debo reflexionar también sobre la naturaleza constitucional de esta Cámara como representante de los intereses de las provincias y, en este sentido, reconocer la difícil situación financiera de mi provincia de La Rioja a partir de la pérdida de un punto de coparticipación en 1988 y que resulta causa principal del déficit crónico del presupuesto local y origen de un largo y continuo peregrinar de los gobiernos provinciales de turno hacia la centralidad del poder, a fin de asegurar las condiciones para la mínima subsistencia del estado provincial y nuestra sociedad.

En el acuerdo se establece que la Nación compensará, a través de transferencias diarias y automáticas, a las provincias que adhieran y cumplan con el consenso con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018, resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del aumento de la asignación específica del impuesto al cheque. La compensación será administrada por cada jurisdicción y se destinará a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, etcétera.

El gobernador de mi provincia ha firmado el consenso fiscal y lo vamos a acompañar, en el convencimiento de que el gobierno nacional será recíproco en atender las demandas financieras de mi provincia, no solo en orden al mencionado punto de coparticipación perdido, sino también en función de un plan de desarrollo productivo sustentable y sostenible.

POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA VARELA (O.D. N° 940/17)

Señora presidente:

El acuerdo celebrado entre veintidós de las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el gobierno nacional que hoy homologamos aquí, en esta casa, que es la máxima representación del federalismo, le da un marco de solución a muchos problemas que se venían arrastrando desde hace años.

Este consenso no es producto de un día, ni de la voluntad política de un único sector, es un trabajo que se viene realizando desde comienzos de 2015.

Es un acuerdo en el que se consensuaron lineamientos para armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de promover tres metas claras que nos propusimos al momento de asumir como gobierno en 2015: promoción del empleo, de la inversión y del crecimiento económico.

También establece un nuevo marco de coparticipación en el que las provincias resuelven un problema tan importante como es el Fondo del Conurbano Bonaerense, que las tenía como contraparte de un litigio, obteniendo estas del gobierno nacional la compensación correspondiente. De esta manera se da solución, en el marco de un diálogo interjurisdiccional a más de

cincuenta procesos judiciales pendientes de resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Terminar con estos litigios tendrá como resultado una relación más armónica para lograr nuevos y necesarios consensos para el desarrollo de nuestra Nación.

Entre otros puntos, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su calidad de firmantes, se han comprometido a unificar las alícuotas máximas de ingresos brutos y reducirlas gradualmente en un plazo aproximado de cinco años, lo que permitirá que muchas de las actividades que acumulan mucho impuesto en cascada queden exentas del mismo.

Más allá de todos los puntos principales del acuerdo fiscal que podría enumerar, creo que lo más importante para destacar de él es que se trata del primer pacto donde las provincias no resignaron federalismo.

En resumen, este es un buen ejemplo de lo que se logra cuando todos cedemos un poco en pos del bien común, que es la razón de ser de quienes tenemos el privilegio de ocupar una banca.

Por último, junto con mi acompañamiento a este pacto, insto, al igual que el presidente, a que los mandatarios comuniquen con la verdad, ya que no sólo es un acuerdo que firmamos, sino que debemos cumplirlo. De esta manera estaremos en el camino correcto para cumplir con las metas de responsabilidad fiscal que llevarán a la reducción del déficit.

Sr. Presidente (Pinedo). – Entonces, se va a votar en general y en particular el Orden del Día N° 940: consenso fiscal.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden del Día N° 940, resultan afirmativos, 52 votos; negativos, 15 votos; abstenciones, 2. En general y en particular.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.¹

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación.²

Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones para la votación del Orden del Día N° 941, sobre responsabilidad fiscal.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobadas las abstenciones e inserciones.

Varios señores senadores. – ¿Quiénes se abstienen?

Sr. Secretario (Tunessi). – ¿Quiénes se abstienen?

Sr. Presidente (Pinedo). – Se abstienen las senadoras Labado y García.

Se va a votar en general y en particular el orden del día sobre responsabilidad fiscal.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – En general y en particular, para el Orden del Día N° 941: afirmativos, 53 votos; negativos, 14 votos; 2 abstenciones.

–El resultado de la votación surge del acta correspondiente.³

Sr. Presidente (Pinedo). – Aprobado. Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación.⁴

10

CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS SOBRE TABLAS ACORDADOS

Sr. Presidente (Pinedo). – Corresponde la habilitación del tratamiento de los asuntos que por Secretaría se enunciarán.

Señor secretario.

Sr. Secretario (Tunessi). – Con la aclaración de que se incorpora el expediente de la señora senadora Boyadjian, S.-3.615/17, acordado en el plenario de Labor Parlamentaria; y se ha acordado el retiro del expediente S.-1.654/17.

Expediente S.-4.551/17: resolución 7 de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo, que resuelve proponer para integrar al Comité de Lucha contra la Tortura, en calidad de referentes parlamentarios, a los señores Juan Manuel Irrazábal, a la señora María Laura Leguizamón, a la señora Rocío Alconada Alfonsín, al señor Alex Roberto Ziegler, al señor Marcelo D'Agostino, a la señora Diana Conti, elevándose la presente resolución para ser considerada por ambas Cámaras del Congreso de la Nación. La Cámara de Senadores actuará como cámara de origen –ley 26.827, artículo 1º, inciso d)–. El artículo 3º es de forma.

Integran el conjunto que se solicita habilitar:

¹ Ver el Apéndice.

² Ver el Apéndice.

³ Ver el Apéndice.

⁴ Ver el Apéndice.

Proyecto: PE - 391/17

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 29/11/2017 23:47:44

Acta : 5

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: Pinedo, Federico

Presentes: 69 **Ausentes:** 3 **AMN:** 34

Afirmativos: 44
Negativos: 23
Abstenciones: 2
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	ABS.	14	37. Leguizamón, María Laura	SI	37
2. Aguilar, Eduardo Alberto	NO	53	38. Linares, Jaime	ABS.	46
3. Aguirre, Hilda Clelia	NO	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	SI	6
4. Almiron, Ana Claudia	NO	24	40. Luenzo, Alfredo Héctor	NO	70
5. Alperovich, José Jorge	SI	17	41. Luna, Mirtha M. T.	SI	27
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	SI	20
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	AUSENTE	
8. Blas, Ines I.	SI	28	44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Braillard Pocard, Pedro	SI	65	46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	SI	50	47. Mera, Dalmacio	SI	59
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Aníbal	SI	44	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	25
14. Catalán Magni, Julio César	SI	52	50. Negre de Alonso, Liliána Teresita	NO	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	NO	48
16. Crexell, Carmen Lucila	NO	63	52. Ojeda, José Anatolio	SI	58
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	53. Pais, Juan Mario	NO	35
18. Durango, Norma Haydee	SI	7	54. Pereyra, Guillermo Juan	NO	62
19. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	55. Perotti, Omar Angel	NO	60
20. Espínola, Carlos Mauricio	NO	33	56. Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
21. Fellner, Liliana Beatriz	NO	31	57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fernández Sagasti, Anabel	NO	55	58. Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	54
24. Fuentes, Marcelo Jorge	NO	16	60. Pinedo, Federico	SI	Presidente
25. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	51	61. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
26. García, Virginia María	NO	12	62. Riofrío, Marina Raquel	SI	13
27. Giacompo, Silvia del Rosario	SI	41	63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giménez, Sandra D.	SI	57	64. Rodríguez Saá, Adolfo	NO	38
29. Godoy, Ruperto Eduardo	NO	34	65. Romero, Juan Carlos	SI	19
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Rozas, Ángel	SI	22
31. González, Nancy Susana	NO	9	67. Sacnun, María de los Angeles	NO	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	68. Solanas, Fernado Ezequiel	NO	47
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	NO	11	72. Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: Votación anulada.

Proyecto: PE - 391/17**Descripción:** SE VOTA EN GENERAL**Tipo Quorum:** MAS 1/2 MC**Fecha:** 29/11/2017 23:49:54**Acta :** 6**Mayoría:** MAS 1/2**VOTOS EMITIDOS****Miembros del cuerpo:** 72**Votación:** NOMINAL**Presidente:** Pinedo, Federico

Afirmativos:	43
Negativos:	23
Abstenciones:	3
Resultado:	AFIRMATIVA

Presentes: 69	Ausentes: 3	AMN: 34
----------------------	--------------------	----------------

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	ABS.	14	37. Leguizamón, María Laura	SI	37
2. Aguilar, Eduardo Alberto	NO	53	38. Linares, Jaime	ABS.	46
3. Aguirre, Hilda Clelia	NO	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	SI	6
4. Almirón, Ana Claudia	NO	24	40. Luenzo, Alfredo Héctor	ABS.	70
5. Alperovich, José Jorge	SI	17	41. Luna, Mirtha M. T.	SI	27
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	SI	20
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	AUSENTE	
8. Blas, Ines I.	SI	28	44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Brailard Pocard, Pedro	SI	65	46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	SI	50	47. Mera, Dalmacio	SI	59
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Aníbal	SI	44	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	25
14. Catalán Magni, Julio César	SI	52	50. Negre de Alonso, Liliana Teresita	NO	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	NO	48
16. Crexell, Carmen Lucila	NO	63	52. Ojeda, José Anatolio	SI	58
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	53. Pais, Juan Mario	NO	35
18. Durango, Norma Haydee	SI	7	54. Pereyra, Guillermo Juan	NO	62
19. Elías de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	55. Perotti, Omar Angel	NO	60
20. Espinola, Carlos Mauricio	NO	33	56. Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
21. Fellner, Liliana Beatriz	NO	31	57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fernández Sagasti, Anabel	NO	55	58. Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	54
24. Fuentes, Marcelo Jorge	NO	16	60. Pinedo, Federico	SI	Presidente
25. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	51	61. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
26. García, Virginia María	NO	12	62. Ríofrío, Marina Raquel	NO	13
27. Giaccoppo, Silvia del Rosario	SI	41	63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giménez, Sandra D.	SI	57	64. Rodríguez Saá, Adolfo	NO	38
29. Godoy, Ruperto Eduardo	NO	34	65. Romero, Juan Carlos	SI	19
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Rozas, Ángel	SI	22
31. González, Nancy Susana	NO	9	67. Sacnun, María de los Angeles	NO	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	68. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	47
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigrid Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	NO	11	72. Zamora, Gerardo	SI	29

Proyecto: PE - 391/17

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 29/11/2017 23:52:24

Acta : 7

Mayoría: MAS 1/2

VOTOS EMITIDOS

Miembros del cuerpo: 72

Votación: NOMINAL

Presidente: Pinedo, Federico

Presentes: 69 **Ausentes:** 3 **AMN:** 34

Afirmativos: 42
Negativos: 24
Abstenciones: 3
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abal Medina, Juan Manuel	ABS.	14	37. Leguizamón, María Laura	SI	37
2. Aguilar, Eduardo Alberto	NO	53	38. Linares, Jaime	ABS.	46
3. Aguirre, Hilda Clelia	NO	2	39. Lovera, Daniel Aníbal	SI	6
4. Almirón, Ana Claudia	NO	24	40. Luenzo, Alfredo Héctor	ABS.	70
5. Alperovich, José Jorge	SI	17	41. Luna, Mirtha M. T.	SI	27
6. Barrionuevo, Walter Basilio	SI	4	42. Marino, Juan Carlos	SI	20
7. Basualdo, Roberto Gustavo	SI	64	43. Martínez, Alfredo Anselmo	AUSENTE	
8. Blas, Ines I.	SI	28	44. Martínez, Ernesto Félix	SI	67
9. Boyadjian, Miriam Ruth	SI	72	45. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
10. Braillard Pocard, Pedro	SI	65	46. Menem, Carlos Saúl	AUSENTE	
11. Cabral, Salvador	SI	50	47. Mera, Dalmacio	SI	59
12. Caserio, Carlos Alberto	SI	71	48. Mirkin, Beatriz Graciela	SI	8
13. Castillo, Oscar Aníbal	SI	44	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	25
14. Catalán Magni, Julio César	SI	52	50. Negre de Alonso, Liliana Teresita	NO	39
15. Cobos, Julio	SI	21	51. Odarda, María Magdalena	NO	48
16. Crexell, Carmen Lucila	NO	63	52. Ojeda, José Anatolio	SI	58
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	69	53. Pais, Juan Mario	NO	35
18. Durango, Norma Haydee	SI	7	54. Pereyra, Guillermo Juan	NO	62
19. Elias de Perez, Silvia Beatriz	SI	42	55. Perotti, Omar Angel	NO	60
20. Espinola, Carlos Mauricio	NO	33	56. Pérsico, Daniel Raúl	SI	49
21. Fellner, Liliana Beatriz	NO	31	57. Petcoff Naidenoff, Luis Carlos	SI	43
22. Fernández Sagasti, Anabel	NO	55	58. Pichetto, Miguel Ángel	SI	15
23. Fiore Viñuales, María C. del Valle	SI	26	59. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	54
24. Fuentes, Marcelo Jorge	NO	16	60. Pinedo, Federico	SI	Presidente
25. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	51	61. Reutemann, Carlos Alberto	AUSENTE	
26. García, Virginia María	NO	12	62. Riofrío, Marina Raquel	NO	13
27. Giacoppo, Silvia del Rosario	SI	41	63. Rodríguez Machado, Laura Elena	SI	23
28. Giménez, Sandra D.	NO	57	64. Rodríguez Saá, Adolfo	NO	38
29. Godoy, Ruperto Eduardo	NO	34	65. Romero, Juan Carlos	SI	19
30. González, María Teresa Margarita	SI	18	66. Rozas, Ángel	SI	22
31. González, Nancy Susana	NO	9	67. Sacnun, María de los Angeles	NO	10
32. Guastavino, Pedro Guillermo Angel	SI	32	68. Solanas, Fernando Ezequiel	NO	47
33. Irrazábal, Juan Manuel	SI	36	69. Urtubey, Rodolfo Julio	SI	5
34. Iturrez de Cappellini, Ada Rosa	SI	30	70. Varela, Marta	SI	66
35. Kunath, Sigríð Elisabeth	SI	56	71. Verasay, Pamela	SI	45
36. Labado, María Ester	NO	11	72. Zamora, Gerardo	SI	29

Observaciones: Senadores Lovera, Daniel Anibal y Durango, Norma Haydee consignan su voto "negativo" a los Arts 1.2.3.7.8 v 9. Senadora Mirkin, Beatriz Graciela "abstención".

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE SENADORES
SESIONES ORDINARIAS DE 2017

ORDEN DEL DÍA N° 939

Impreso el día 23 de noviembre de 2017

SUMARIO

COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de Reforma Previsional. (P.E. 391/17)

DICTAMEN DE COMISIÓN

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado como expediente PE-391/17, conteniendo Mensaje 129/17 y Proyecto de Ley de Reforma Previsional; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

Capítulo I

Índice de Movilidad Jubilatoria

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Art. 32.- Movilidad de las prestaciones.

Las prestaciones mencionadas en los incisos a), b), c), d), e) y f) del artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, serán móviles.

La movilidad se basará en un setenta por ciento (70%) en las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un treinta por ciento (30%) por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIOTE), conforme la fórmula que se aprueba en el Anexo de la presente Ley, y se aplicará trimestralmente en los

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario.

En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”.

Artículo 2°. - La primera actualización en base a la movilidad dispuesta en el artículo 1° de la presente, se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2018, de acuerdo a la variación experimentada por el Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), para el tercer trimestre del año 2017.

Artículo 3°.- Sustitúyese el artículo 2° de la Ley N° 26.417 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 2°.- A fin de practicar la actualización de las remuneraciones a las que se refiere el artículo 24, inciso a) y las mencionadas en el artículo 97 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, se aplicará un índice combinado entre el previsto en el inciso b) del apartado I del artículo 5° de la Ley N° 27.260 y su modificatorio y el índice establecido por la Remuneración Promedio de los Trabajadores Estables.

Artículo 4°.- Encomiéndase a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar el cálculo trimestral de la movilidad y su posterior publicación.

Capítulo II Haberes Mínimos Garantizados

Artículo 5°.- Incorpórase como artículo 125 bis de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones el siguiente:

“Art. 125 bis.- El Estado Nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten Treinta (30) años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias vigente en cada período.

La presente garantía no resulta aplicable a los beneficiarios que hubiesen accedido a la Prestación Básica Universal por aplicación de la Ley N° 24.476 modificada por el Decreto N° 1.454 del 25 de noviembre de 2005, por el artículo 6° de la Ley N° 25.994 o por la Ley N° 26.970, todas ellas con las modificaciones introducidas por los artículos 20 a 22 de la Ley N° 27.260.”

Artículo 6°.- La Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establecerá las pautas de aplicación relativas a la liquidación del suplemento previsto en el artículo 5° de la presente.

Capítulo III

Facultad del empleador para intimar al trabajador a jubilarse

Artículo 7°.- Sustitúyese el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente forma:

"Art. 252.- A partir de que el trabajador cumpla setenta (70) años de edad y reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento, el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un (1) año.

Lo dispuesto en el párrafo precedente no afecta el derecho del trabajador de solicitar el beneficio previsional con anterioridad al cumplimiento de los setenta (70) años de edad.

Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente Ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo."

Artículo 8°.- A partir de que el trabajador reúna los requisitos necesarios para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU) establecida en el artículo 17, inciso a) de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones, el empleador deberá ingresar los aportes del trabajador y con respecto a las contribuciones patronales, únicamente aquellas con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales de la Ley N° 23.660 y sus modificaciones y las cuotas del Régimen de Riesgos del Trabajo de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones.

Artículo 9°.- Incorpórase como último párrafo del artículo 253 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias el siguiente:

"También es aplicable lo dispuesto por el presente artículo al trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación, considerándose la fecha del acuerdo de la prestación como inicio del cómputo de la antigüedad posterior al mismo."

Art. 10.- Quedan excluidos de lo establecido en este Capítulo, los trabajadores del sector público aunque los organismos en los que

presten servicios se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o.1976) y sus modificatorias)

Capítulo IV Disposiciones Finales

Art. 11.- La presente medida entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de comisión, 23 de noviembre 2017.-

Julio C. Cobos – Pedro G. A. Guastavino – Juan M. Irrazabal – Inés I. Blas – Silvia del Rosario Giacoppo – Roberto G. Basualdo – Beatriz G. Mirkin – Laura E. Rodriguez Machado – Rodolfo J. Urtubey – María T. Gonzalez – Dalmacio E. Mera – Pamela F. Verasay – Juan C. Romero.-

En disidencia parcial: Daniel A. Lovera

ANEXO I CALCULO DE LA MOVILIDAD

$$Mov_{mar_t} = 0,70 \cdot \left\{ \left(\frac{IPCN_{sep_{t-1}}}{IPCN_{jun_{t-1}}} \right) - 1 \right\} + 0,30 \cdot \left\{ \left(\frac{RIPE_{sep_{t-1}}}{RIPE_{jun_{t-1}}} \right) - 1 \right\}$$

$$Mov_{jun_t} = 0,70 \cdot \left\{ \left(\frac{IPCN_{dic_{t-1}}}{IPCN_{sep_{t-1}}} \right) - 1 \right\} + 0,30 \cdot \left\{ \left(\frac{RIPE_{dic_{t-1}}}{RIPE_{sep_{t-1}}} \right) - 1 \right\}$$

$$Mov_{sep_t} = 0,70 \cdot \left\{ \left(\frac{IPCN_{mar_t}}{IPCN_{dic_{t-1}}} \right) - 1 \right\} + 0,30 \cdot \left\{ \left(\frac{RIPE_{mar_t}}{RIPE_{dic_{t-1}}} \right) - 1 \right\}$$

$$Mov_{dic_t} = 0,70 \cdot \left\{ \left(\frac{IPCN_{jun_t}}{IPCN_{mar_t}} \right) - 1 \right\} + 0,30 \cdot \left\{ \left(\frac{RIPE_{jun_t}}{RIPE_{mar_t}} \right) - 1 \right\}$$

Donde:

- $Mov_{m,t}$ es la movilidad a otorgarse en el mes “m” del año “t” indicados en el subíndice
- $IPCN_{m,t}$ es el valor del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor con cobertura Nacional, publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS, correspondiente al mes “m” y año “t”
- $RIFTE_{m,t}$ es la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables correspondiente al mes “m” y año “t”, elaborada por la Secretaría de Seguridad Social -MTEySS

Daniel A. Lovera.

Fundamentos de la disidencia parcial del senador Daniel Lovera respecto de la firma del dictamen del Proyecto de Ley Reforma Previsional expediente PE-391/17

Señor Presidente:

Los legisladores de la provincia de La Pampa, en defensa de los intereses de nuestra Provincia, vamos a priorizar la voluntad de nuestro gobernador, Ingeniero Carlos Verna - acerca del compromiso asumido en el consenso fiscal-, quien en conjunto con las demás provincias argentinas firmó el pacto correspondiente el último 16 de noviembre.

De esta manera voy a ratificar legislativamente lo acordado y firmado por nuestra provincia mediante los dictámenes correspondientes.

En nombre de la responsabilidad y la representatividad que me otorga el cargo que ejerzo hoy, y ante los efectos y consecuencias de esta ley, que atraviesa a todas las provincias e involucra a una sociedad sensible en tanto estén en juego sus intereses y derechos, considero necesario un mayor estudio de algunas cuestiones trascendentes: la propuesta de cambio de índice de movilidad y de actualización, y la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo numero 20744 en su art. 252 respecto a la opción de la edad jubilatoria.

Es así que en esta oportunidad voy a firmar en disidencia parcial, situación ésta que fundamentaré en el recinto.

Daniel A. Lovera

*VERSION PRELIMINAR SUSCEPTIBLE DE CORRECCIÓN UNA VEZ CONFRONTADO CON EL EXPEDIENTE ORIGINAL